

PORVENIR / CONTESTACIÓN DEMANDA / 11001310503820230031900

Camila Soler Sanchez <casoler@godoycordoba.com>

Miércoles 20/03/2024 9:09 AM

Para: Juzgado 38 Laboral Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato38@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: luisfuentes976@hotmail.com <luisfuentes976@hotmail.com>; Buzón Procesos Judiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (24 MB)
GCL 20 03 2024 CSS (CD).pdf;

Señores
JUZGADO TREINTA Y OCHO (38) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E.S.D

REFERENCIA	Proceso Ordinario Laboral adelantado por CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS contra ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Y OTROS.
RADICACIÓN	11001310503820230031900.
ASUNTO	Contestación de la demanda por ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

CAMILA SOLER SÁNCHEZ, identificada como aparece al pie de mi correspondiente, abogada inscrita en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, persona jurídica que actúa en condición de apoderado especial de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, encontrándome dentro del término legal, me permito radicar contestación de demanda dentro del proceso de referencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022 y, en concordancia con el numeral 14 del artículo 78 del C.G.P., se remite el presente memorial con copia al apoderado judicial de la parte demandante (luisfuentes976@hotmail.com), Colfondos S.A. (procesosjudiciales@colfondos.com.co) y Colpensiones (notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co).

Cordialmente,



Camila Soler Sánchez
C.C. 1.014.290.875
T.P. 352.159 del C.S de la J.
casoler@godoycordoba.com
Bogotá - Calle 84A No. 10 – 33, piso 5
PBX: (60-1) 317 4628
Celular: 3114878921
www.godoycordoba.com
Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín



Godoy Córdoba Abogados forma parte de la práctica de derecho internacional Littler Global, que opera en todo el mundo a través de una serie de entidades jurídicas independientes. Para obtener más información, visite: www.Littler.com

Este correo pudo ser enviado fuera del horario laboral de quién lo recibe. Te invitamos a responderlo durante tu jornada de trabajo.

Doctor

MARCOS JAVIER CORTES RIVEROS

JUEZ TREINTA Y OCHO (38) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

E.S.D

REFERENCIA Proceso Ordinario Laboral adelantado por **CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS** contra **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y OTRO.**

RADICACIÓN 11001310503820230031900.

ASUNTO Contestación de la demanda por **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

CAMILA SOLER SÁNCHEZ, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, abogada inscrita en el certificado de existencia y representación legal de **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, persona jurídica que actúa en condición de apoderado especial de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, encontrándome dentro del término legal, me permito dar contestación a la demanda, en los siguientes términos:

I. FRENTE A LAS PRETENSIONES DECLARATIVAS

Al 1°	Me opongo a pesar de ser una pretensión dirigida contra la AFP Colfondos S.A., por cuanto afecta los intereses de mi representada.
Al 2°	Me opongo , el traslado horizontal efectuado por la demandante al RAIS con la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. es completamente válido, ya que el mismo estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, acerca de cada uno de los regímenes pensionales, por ende, no se dan los supuestos necesarios para declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante, sino por el contrario, se evidencia que la señora Carmen Yadira Silgado Tapias se encontraba conforme con los servicios y beneficios brindados por el régimen privado, por cuanto, en ningún momento manifestó inconformidad alguna con el Sistema.
Al 3°	Me opongo. Es preciso indicar que el traslado horizontal efectuado por la demandante con la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. es completamente válido, por

	cuanto se brindó la información pertinente y necesaria, acerca del RPM y del RAIS, de modo que resulta improcedente dicha pretensión.
Al 4°	Me opongo , por cuanto la demandante se encuentra válidamente afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y, por ende, el reconocimiento de la pensión de vejez no se encuentra sometida a requisitos de edad y semanas.
Al 5°	<p>Me opongo, en la medida que, el traslado horizontal efectuado por la demandante con la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. es completamente válido, en atención a que; en primer lugar, no se aporta prueba alguna que permita indicar tal acto es ineficaz y, en segundo lugar, con la presente contestación de demanda se aporta formulario de vinculación suscrito por la señora Carmen Yadira Silgado Tapias, que da muestra del consentimiento libre, voluntario e informado, atendiendo a que, para dicha data, el único requisito que se les solicitaba a los Fondos de Pensiones de la asesoría brindada era el formulario en mención.</p> <p>Por lo anterior, no es dable proferir condena de reconocer y pagar perjuicios a favor de la demandante, como quiera frente a la relación de Porvenir S.A. y la demandante no se configuró daño alguno que derive en tal afectación, máxime cuando la conveniencia de uno u otro régimen no puede ser determinada por los eventuales valores que se reconozcan en uno u otro derecho pensional; teniendo en cuenta que, la misma Ley contempla la coexistencia de ambos regímenes pensionales que si bien se configuran de manera distinta, ambos amparan y reconocen las prestaciones pensionales de los afiliados conforme a la elección que ellos realicen.</p> <p>De igual manera, no se puede desconocer que, las cotizaciones realizadas por la demandante en el RAIS generaron rendimientos por la buena administración de mi representada incrementando su valor en su cuenta de ahorros individual, por lo que, no se puede hablar de una afectación a perjuicios materiales cuando no los hay.</p> <p>Finalmente, es obligación de la parte demandante demostrar los supuestos perjuicios y daños generados, pero pese a ello, no se observa dentro del expediente prueba alguna que permita acreditar su dicho.</p>

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES CONDENATORIAS

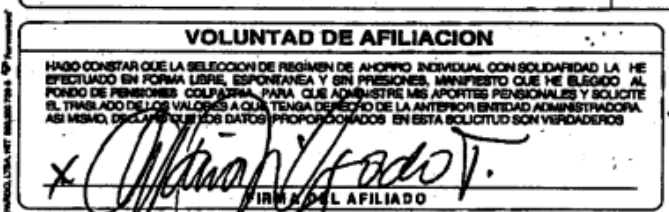
Al 1°	Me opongo. El traslado horizontal realizado por la demandante con la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. goza de plena validez jurídica, ya que, el mismo se encuentra ajustado conforme lo dispuesto en el Decreto 663 de 1993. De ahí que,
--------------	---

	no resulte ser procedente que mi representada traslade a Colpensiones lo correspondiente a aportes, rendimientos, gastos de administración u otros rubros.
Al 2º	<p>Me opongo. El traslado horizontal efectuado por la demandante con la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. el día 31 de mayo de 1999 goza de plena validez jurídica, ya que, el mismo se encuentra ajustado conforme lo dispuesto en el Decreto 663 de 1993.</p> <p>De otro lado, no es procedente dicha pretensión en la medida que, Porvenir S.A. no resulta responsable por ningún tipo de creación de daño o perjuicio a la parte demandante, toda vez que se cumplió de manera cabal con cada una de sus obligaciones en materia de información al momento del traslado de régimen efectuado.</p> <p>Igualmente, debe destacarse que, no puede asegurarse un perjuicio cuando mi representada actuó de manera diligente al administrar los dineros aportados por la demandante y así generar una serie de rendimientos.</p> <p>Finalmente, es obligación de la demandante demostrar los supuestos perjuicios y daños generados, pero pese a ello, no se observa dentro del expediente prueba alguna que permita acreditar su dicho.</p>
Al 3º	<p>Me opongo. Si bien, es una pretensión dirigida contra Colpensiones, se debe indicar que, en la medida que, como se dijo, la afiliación de la demandante al RAIS es válida y, en consecuencia, no hay obligación que le asista a dicha administradora del RPM.</p>
Al 4º	<p>Me opongo. El traslado horizontal efectuado por la demandante el día 31 de mayo de 1999 a través de la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. es válido por cuanto se brindó la información pertinente y necesaria, acerca del RPM y del RAIS, de modo que resulta improcedente dicha pretensión.</p>
Al 5º	<p>Me opongo. Si bien, es una pretensión dirigida contra Colpensiones, se debe indicar que, en la medida que, como se dijo, la afiliación de la demandante al RAIS es válida y, en consecuencia, no hay obligación que le asista a dicha administradora del RPM.</p>

Al 6°	Me opongo , por cuanto la demandante se encuentra válidamente afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, razón por la cual, no el asiste obligación alguna a Colpensiones frente a una presunta prestación económica.
Al 7°	Me opongo a esta pretensión, por cuanto, al no haber fundamento de las pretensiones de la demanda, deberá absolverse a mi representada de todas y cada una de ellas incluyendo cualquier condena que se pudiese imponer a título de facultades ultra y extra petita.
Al 8°	Me opongo a esta pretensión, por cuanto que, al no haber fundamento de las mismas, deberá absolverse a mi representada de todas y cada una de ellas y, en consecuencia, se deberá condenar a la demandante en costas y agencias en derecho a favor de Porvenir S.A.

III. EN CUANTO A LOS HECHOS

Al 1°	Es cierto.
Al 2°	No me consta , como quiera que se trata de una afirmación que hace referencia a un tercero, como lo es el Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, por lo que la parte demandante deberá probar su dicho.
Al 3°	No me consta , se trata de una afirmación de la demandante. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 4°	Es cierto. Aclarando que a corte del mes de marzo de 2024 la demandante cuenta con 1437 semanas cotizadas.
Al 5°	No me consta , se trata de una afirmación de la demandante. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 6°	No me consta , como quiera que se trata de una afirmación que hace referencia a un tercero, como lo es la AFP Colfondos S.A., por lo que la parte demandante deberá probar su dicho.
Al 7°	No me consta , como quiera que se trata de una afirmación que hace referencia a un tercero, como lo es la AFP Colfondos S.A., por lo que la parte demandante deberá probar su dicho.
Al 8°	No me consta , como quiera que se trata de una afirmación que hace referencia a un tercero, como lo es la AFP Colfondos S.A., por lo que la parte demandante deberá probar su dicho.

Al 9°	No me consta , como quiera que se trata de una afirmación que hace referencia a un tercero, como lo es la AFP Colfondos S.A., por lo que la parte demandante deberá probar su dicho.
Al 10°	<p>Es cierto. Aclarando que la demandante suscribió el formulario con la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. de manera libre y voluntaria, tal y como se observa en la siguiente imagen:</p>  <p>De igual forma, se debe indicar que, en dicho momento, el asesor de manera verbal le indicó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial); que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros. Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 57 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.</p> <p>Así mismo, a la demandante se le indicó que de sus aportes se realizaría un descuento mensual para gastos de administración, los cuales se verían reflejados en los rendimientos que sus aportes generarían; que de este mismo descuento se destinaría otra parte para el pago de una aseguradora que, en caso de incurrir en contingencias de invalidez o muerte, cubriría el 100% de la prestación a la cual tuviese derecho; lo anterior de conformidad con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.</p> <p>De igual manera, se le comunicó que entre los beneficios más importantes del Régimen de Ahorro Individual se destacan: En caso de que la afiliada fallezca y no cumpla con el capital para pensionarse, sus herederos podrán disponer de ese capital; en caso de no completar el capital necesario para la pensión y si cuenta con 1150 semanas de cotización, podría acceder a la garantía de la pensión mínima; si el monto de su pensión llega a ser superior al 70% de su Ingreso Base de Liquidación, podrá disponer de sus excedentes de libre</p>

	disposición. Así mismo, se le explicaron las características técnicas del Régimen de Prima Media, administrado por el Instituto de Seguros Sociales.
Al 11°	No me consta , como quiera que se trata de un trámite que realizó la demandante ante otro Fondo de Pensiones, como lo es la AFP Colfondos S.A., por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 12°	Es cierto que la parte demandante radicó derecho de petición el día 20 de febrero de 2023.
Al 13°	No me consta , como quiera que se trata de un trámite que realizó la demandante ante otro Fondo de Pensiones, como lo es Colpensiones, por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 14°	No me consta , como quiera que se trata de un trámite que realizó la demandante ante un tercero, como lo es la UGPP, por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 15°	No me consta , como quiera que se trata de una afirmación que hace referencia a un tercero, como lo es la UGPP, por lo que la parte demandante deberá probar su dicho.
Al 16°	Es cierto , aclarando que, dicha proyección pensional no puede ser entendida como una situación jurídica concreta y definitiva, por cuanto la misma puede fluctuar con el paso del tiempo.
Al 17°	No es cierto como está redactado . Pues debe tenerse en cuenta que, las proyecciones pensionales que realiza Porvenir S.A. se basan en: i) Edad del afiliado y su grupo familiar; ii) Capital acumulado y; iii) Tasa de rentabilidad. Mas no respecto del IBC reportado en un periodo determinado.
Al 18°	No es cierto . Si bien es una apreciación subjetiva efectuada por la parte demandante la cual debe ser demostrada en el presente asunto, se debe indicar que, el asesor comercial de la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. brindó la debida información a la demandante al momento del traslado horizontal, esto es, para el 31 de mayo de 1999, respecto de las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.
Al 19°	No es cierto . Porvenir S.A. mediante respuesta de fecha 15 de marzo de 2023 se le puso de presente a la demandante que, Porvenir S.A. procedería a trasladar la totalidad de los dineros obrantes en la cuenta de ahorro individual con destino a Colpensiones, una vez, dicha entidad procediera con la reactivación de la

	vinculación a través del aplicativo Mantis; sin embargo, a la fecha, la entidad administradora del RPM no ha procedido de conformidad.
OMISIONES Y FALENCIAS AL MOMENTO DEL TRASLADO DE RÉGIMEN	
Al 1°	No es cierto. El asesor comercial de la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. le informó de manera verbal a la demandante al momento del traslado horizontal, el monto de su pensión dependería del capital contenido en su cuenta de ahorro individual, es decir, que debía acumular una suma superior al 110% del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. De igual forma, le indicó los factores que se debía tener en cuenta al momento de liquidar la pensión. Adicionalmente, le informó acerca de las diferentes modalidades de pensión.
Al 2°	No es cierto. La demandante suscribió el formulario de vinculación con la AFP Porvenir S.A. el día 31 de mayo de 1999 de manera libre, voluntaria e informada sin ningún tipo de presiones o apremios. Lo anterior, por cuanto, aquella recibió información clara, veraz y oportuna acerca de las características, riesgos, ventajas y desventajas del RPM y del RAIS, contando con elementos de juicios objetivos, a fin de que escogiera el régimen pensional que más se ajustara a sus intereses, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993.
Al 3°	No es cierto. El asesor comercial de la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A. brindó información cierta, clara y sin interés de inducir en error a su potencial afiliada, acerca de todo lo atinente al Sistema General de Pensiones, de conformidad con las leyes vigentes para el momento del traslado de régimen pensional. Tan es así que, de manera libre y voluntaria decidió suscribir el formulario de vinculación el día 31 de mayo de 1999.
Al 4°	No es cierto. El asesor comercial de la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A., le indicó de manera verbal a la demandante al momento el traslado horizontal, a la demandante al momento del traslado horizontal, el monto de su pensión dependería del capital contenido en su cuenta de ahorro individual. De otro lado, debe indicarse que, el Régimen de Prima y el Régimen de Ahorro Individual son sistemas independientes que, si bien coexisten dentro del sistema general de pensiones, lo relativo al reconocimiento y pago de la pensión de vejez cuentan con variables diferentes, métodos de financiación disímiles, entre otros aspectos que no me permiten equipararse una de la otra.
Al 5°	No es cierto. Dentro de la base de datos de mi representada no obra solicitud por parte de la demandante a efectos de que Porvenir S.A. le efectuara simulación pensional, pues dicho proceder no se realiza de manera oficiosa.

IV. HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA

A continuación, se presentan los hechos, fundamentos y razones de la defensa de mi representada con base en los cuales se deberá proferir sentencia absolutoria atendiendo a que todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la demanda quedarán plenamente desvirtuados.

NO HAY RAZONES PARA DECRETAR LA INEFICACIA DE LA VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

No existen razones fácticas o jurídicas que conduzcan a la declaratoria de ineficacia del acto jurídico por medio del cual la demandante se trasladó de manera horizontal. Por tal razón, dicha decisión se hizo en forma consciente y espontánea, sin presiones o apremios de ninguna naturaleza y con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las normas que se encontraban vigentes para la fecha en que se produjo, pues: (i) Antes de adoptar la decisión referida, recibió información suficiente y veraz sobre las implicaciones de su afiliación y las características generales del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; (ii) Suscribió el formulario de vinculación, el cual cumplía con los requisitos de ley, el cual estaba aprobado por la entonces Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera; (iii) En cumplimiento de las exigencias legales, al suscribir la solicitud de vinculación, con la cual se concretó su afiliación al Sistema General de Pensiones, manifestó en forma expresa que lo hacía en forma voluntaria y libre.

Así las cosas, se tiene que la firma del formulario de afiliación no puede ser considerada como un mero requisito formal o una manifestación vacía sin ninguna consecuencia, ya que corresponde a una exigencia normativa que, por lo tanto, no puede ser ignorada, como tampoco pueden ser desconocidos los efectos que produce. De igual forma, la circunstancia de que conste en un formulario previamente impreso no le resta validez a lo manifestado, ya que corresponde a una expresión inequívoca de la voluntad de la demandante.

Por lo anterior, es claro que, el acto de afiliación es completamente válido, pues se cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad entonces vigente y no pesa sobre él ningún vicio u omisión que lo invalide.

PORVENIR S.A. CUMPLIÓ CABALMENTE CON LA OBLIGACIÓN DE DAR INFORMACIÓN A LA DEMANDANTE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ESA OBLIGACIÓN ESTABA ESTABLECIDA PARA LA FECHA DEL TRASLADO HORIZONTAL

Al momento en que la demandante tomó la decisión voluntaria de trasladarse, Porvenir S.A. cumplió a cabalidad con las obligaciones que le correspondían en materia de información, atendiendo los parámetros establecidos en las normas vigentes en ese momento, las cuales, debe aclararse, no exigían una información en los términos reclamados en la demanda, puesto que esa información tan rigurosa solo vino a ser determinada con mucha

posterioridad, inicialmente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y, más adelante, por varias normas legales y reglamentarias.

Un breve recuento de las normas que regulaban el deber de información respecto de entidades como la aquí demandada para la fecha en que se hizo la afiliación cuya nulidad se demanda, indican lo siguiente:

- Si se entendiese que los afiliados al Sistema de Seguridad Social pueden ser considerados como consumidores, les sería aplicable el artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, que solamente establecía la obligación de dar una información veraz y suficiente.
- Posteriormente, el Decreto 663 de 1993 en su artículo 30 estableció para las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías la obligación de *"Suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas."*
- En la Ley 100 de 1993 no se estableció ninguna obligación puntual para las administradoras del sistema de pensiones en materia de suministro de información, si se tiene en cuenta que, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 se limitó a señalar que *"La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley"*. Por tanto, esta disposición legal solamente aludió a la manifestación de la elección del régimen, pero no fijó en cabeza de las administradoras ninguna carga en materia de entrega de información al afiliado.
- Ninguna de las normas reglamentarias de la Ley 100 de 1993 exigió a las administradoras pensionales la obligación de entregar una información como la aquí demandada. El Decreto 656 de 1994 que en sus artículos 14 y 15 regula las obligaciones de las entidades administradoras de fondos de pensiones no menciona la de entregar información a los afiliados.

De lo antes expuesto, es forzoso colegir que si bien existía una obligación para las administradoras del Sistema General de Pensiones de entregar información dada a quienes pretendiesen vincularse a ellas, esta correspondía a una información necesaria, veraz y suficiente, pero nada más. Por lo tanto, no había obligación alguna de brindar una asesoría, de dar un buen consejo incluso para desincentivar la afiliación, ni, mucho menos una doble asesoría. Tampoco existía la obligación de informar por escrito sobre los beneficios puntuales que cada uno de los regímenes pensionales ofrecía, ni sobre el monto de la

pensión que se obtendría, esto es, no era obligatorio hacer proyecciones pensionales por escrito en uno u otro régimen, pues ninguna norma así lo exigía, si se tiene en cuenta que esos requerimientos surgieron con mucha posterioridad, como se explicó con antelación.

El ente gubernamental que vigila a las Administradoras de Fondos de Pensiones ha sido enfático en señalar que la obligación de otorgar información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación nace en el ordenamiento jurídico únicamente a partir de la entrada en vigor del Decreto 2241 de 2010. Así las cosas, en concepto 2017056668-001 del 12 de junio de 2017, la Superintendencia Financiera indicó:

"La obligatoriedad de ofrecer una asesoría, entendida como la "información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras (...)" se encuentra expresamente consagrada a partir del 1º de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010."

Mas adelante, con la expedición del Decreto 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015 señaló que, recae en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones la obligación de asesoría e información tanto para sus afiliados como para el público en general.

Así lo estimó también la Superintendencia Financiera en concepto 2015123910 del 29 de diciembre de 2015, en el que se señaló:

"Sobre este particular, debe advertirse que no obstante la existencia del deber de asesoría, sólo hasta la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, es claro el deber legal de las administradoras de "poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que les permitan conocer las consecuencias de su traslado", por lo que en vigencia del Instituto de Seguros Sociales los traslados realizados por fuera de la vigencia de estas disposiciones la asesoría podía no contener la ilustración correspondiente a la favorabilidad en cuanto al monto de la pensión."

De otro lado, solo a partir de la expedición de la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, reguló la obligación de conservar soportes documentales que den cuenta de la doble asesoría recibida. Por lo tanto, para la fecha en que se produjo el acto materia del proceso era perfectamente admisible que la información a quienes estaban interesados en vincularse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad se suministrara en forma verbal, sin que por ello, pudiese sostener que no fueran completas, transparentes, veraces y oportunas.

Cumple advertir que, aún en el caso de haberse efectuado una proyección pensional, que no era legalmente exigible, no estaría ella plenamente ajustada a la realidad pensional del afiliado, por cuanto en la mayoría de los casos, las variables laborales, de número de semanas cotizadas, de edad, de expectativa de vida, entre otras, modificarían de manera sustancial el contenido y exactitud de esa proyección.

En consecuencia, es forzoso concluir que en este caso esa obligación de información que debía darse a la demandante se cumplió en forma estricta, como surge de las pruebas del proceso.

LA DEMANDANTE TAMBIÉN TENÍA EL DEBER DE INFORMARSE SOBRE EL ACTO JURÍDICO DE VINCULACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y SUS CONSECUENCIAS

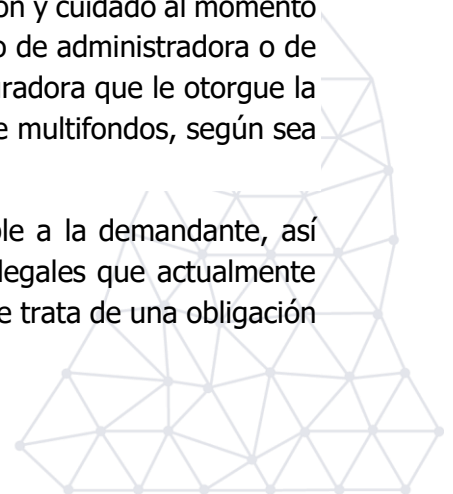
En la demanda se pretende hacer recaer en cabeza de la AFP Porvenir S.A. toda la responsabilidad sobre el deber de dar información acerca de las consecuencias del traslado. No obstante, la circunstancia de que esa entidad administradora tuviera algunas responsabilidades profesionales no es excusa para que la demandante por su cuenta, no haya indagado sobre las implicaciones que tendría su afiliación, pues, aún el hecho de ser lego en el asunto no la eximía de actuar con dedicación en un asunto con implicaciones tan importantes.

Resulta claro que, no puede descargarse totalmente el deber de informar en la Administradora de Pensiones, pues, en virtud del principio de igualdad, dicha obligación también recae sobre la afiliada, quien es conocedora de su situación particular y de sus expectativas laborales, que, en últimas, son las que le permitirán acceder a un mejor derecho pensional, situación que se escapa del conocimiento de la AFP.

Adicionalmente, como todo consumidor financiero, la demandante debía actuar con una mediana diligencia, lo cual suponía, por lo menos, obtener una información suficiente sobre el acto jurídico que estaba adoptando, y con mayor razón, si los datos relevantes que permitían precisar las consecuencias de esa decisión estaban claramente determinadas en normas legales de conocimiento público.

De igual forma, todos los afiliados al Sistema de Pensiones tenían y tienen obligaciones lo cual corrobora el Decreto 2241 de 2010, al señalar que, como consumidores financieros, deben: (a) Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multifondos y de las diferentes modalidades de pensión; (b) Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden; (c) Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de multifondos, según sea el caso.

Por consiguiente, ese deber de obtener información le era exigible a la demandante, así para la época de la afiliación no estuviesen vigentes las normas legales que actualmente gobiernan las obligaciones de los consumidores financieros, pues se trata de una obligación



que recae en toda persona que obre con responsabilidad en el manejo de sus asuntos personales, con mayor razón, si eventualmente involucra a su familia.

LA DEMANDANTE CONTÓ CON VARIAS OPORTUNIDADES PARA TRASLADARSE DE RÉGIMEN PENSIONAL Y NO LO HIZO

Debe tenerse en cuenta que durante su vinculación como afiliada a la AFP Porvenir S.A. la demandante contó con varias oportunidades para cambiarse de régimen pensional y, pese a ello, no lo hizo, de lo cual solamente es posible concluir que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Téngase en cuenta que, para la época del traslado se encontraba vigente el artículo 13 original de la Ley 100 de 1993, el cual señalaba que los afiliados al Sistema General de Pensiones podían trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial. En todo el tiempo de vigencia de esa disposición la demandante guardó silencio, así como, cuando dicho término se elevó a cinco (05) años, debido a la modificación efectuada por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003.

Resulta importante anotar que, de esta posibilidad de traslado se dio conocimiento a la opinión pública por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) a través de la Circular Externa No 001 de 2004. Igualmente, Asofondos, entidad gremial que agrupa a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, hizo pública esa posibilidad en un comunicado que fue publicado en un diario de amplia circulación nacional.

Aparte de ello, el artículo 3 del Decreto 1161 de 1994 estableció un derecho de retracto el cual podía ser ejercido por la persona dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del formulario de vinculación.

Como se observa, la demandante contó con varias posibilidades legales para regresar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de las cuales es forzoso entender que tenía conocimiento por estar establecidas en disposiciones legales de público conocimiento. Alegar lo contrario equivaldría a aceptar que en este caso se justifica y excusa la ignorancia de la ley.

Es bien sabido que, en cabeza de todos los ciudadanos se encuentra el deber de conocer las leyes, pues no es excusa su desconocimiento, tal y como se estableció en la sentencia C-651 de 1997, cuando la Corte Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 9° del Código Civil que dispone: *"Art.9: La ignorancia de la ley no sirve de excusa"*. Se indicó en la mencionada sentencia: *(...) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico (...)".*

En ese sentido, debe apreciarse por parte del despacho que la demandante, quien es la mayor interesada en su situación pensional, actuó de forma poco diligente frente al traslado realizado y solamente años después, mostró un inusitado interés por su situación pensional. Además de las posibilidades de traslado establecidas en las normas antes citadas, la demandante contó con otras específicamente dirigidas a situaciones como las que ahora alega, de un supuesto perjuicio por su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: El parágrafo del artículo 2º del Decreto 1642 de 1995 otorgó un plazo de gracia especial para retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con el cumplimiento de dos requisitos: (i) Que el solicitante fuera beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y (ii) Que el traslado de régimen evidenciara un perjuicio del afiliado frente al régimen del cual se trasladó.

En consecuencia, si la promotora del pleito consideraba que el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad le ocasionaba perjuicios, tuvo una oportunidad para regresar a su anterior administradora, motivo por el cual, no puede afirmarse que desconociera esta oportunidad, por estar consagrada en una norma cuyo conocimiento se presume.

IMPROCEDENCIA DEL TRASLADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRIMA DE SEGURO PREVISIONAL COMO CONSECUENCIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL PRODUCTO DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA

En el hipotético caso de que se declare la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional que es materia del presente proceso, no resulta viable que, como parte de las prestaciones mutuas que correspondan, se ordene a la administradora demandada la devolución de los gastos destinados a la administración y de las sumas que ha pagado por concepto de primas de los seguros previsionales que ha estado obligada a contratar.

Ello es así, porque las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que, en este caso, cumplió plenamente su cometido en el periodo en el cual, la demandante ha mantenido su vinculación con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de tal suerte que, esas sumas ya fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y a la fecha no se encuentran en poder Porvenir S.A., pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que ha implicado la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual de la demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos.

De tal modo que, no tiene ningún sentido y va en contra vía de las normas legales que gobiernan las restituciones mutuas en caso de la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico, que la persona a la cual se le ordena restituir o devolver un bien, en este caso, unas sumas depositadas en una cuenta, igualmente deba devolver las sumas que invirtió para mantener ese bien y para incrementarlo, en cumplimiento de mandatos legales que está obligado a acatar. Es claro, por lo tanto, que las sumas destinadas a los gastos de

administración ya se agotaron o extinguieron por haber sido destinadas al cumplimiento de su objetivo: manejar los fondos y las cuentas individuales. En tal sentido, dichos rubros no están en poder de la administradora, ya que, por exigencia de la ley estuvo obligada a invertirlas en la obtención de la rentabilidad mínima que debe garantizar.

En el mismo orden de ideas, tampoco es procedente que la administradora deba restituir las sumas que pagó por concepto de primas de los seguros previsionales, por cuanto ya no están en su poder, sino en el de la compañía aseguradora que contrató para la cobertura del pago de las sumas adicionales necesarias para financiar las prestaciones que, por mandato legal, así lo requieran. La destinación de estas sumas también cumplió su objetivo y, en consecuencia, aquellas se agotaron y se extinguieron. Así mismo, la cobertura que brindó la respectiva compañía de seguros ya se hizo efectiva y no puede retrotraerse en el tiempo, por ser material y jurídicamente imposible. Por esa misma razón, no es viable que se restituyan las sumas que sirvieron para que esa cobertura estuviese vigente, además, debe tenerse en cuenta que, en el Régimen de Prima Media no existe la necesidad de contratar seguros previsionales para los fines que sí están previstos en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Así las cosas, no es jurídicamente procedente ordenar la devolución de gastos de administración y de lo pagado por concepto de prima del seguro previsional, además de lo anteriormente dicho, debe indicarse que, el RPM y el RAIS son sistemas pensionales excluyentes entre sí; lo anterior, debido a que pese a ser dos sistemas que buscan cumplir un mismo objetivo, es decir, asegurar los riesgos de vejez, invalidez o muerte, reconocen prestaciones en condiciones y características totalmente diferentes.

Como muestra de lo anterior, expone la Superintendencia Financiera que, mientras que en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida los afiliados obtienen sus prestaciones en condiciones que ya se encuentran taxativamente regladas en la ley, por su parte, en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los afiliados obtienen sus prestaciones de acuerdo con los valores que hayan ahorrado en su cuenta individual.

Se expresa igualmente que, en primer lugar, toda decisión judicial o administrativa de traslado de régimen pensional debe tener en cuenta el objetivo constitucional de estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional, pues no es viable efectuar traslados sin el monto de aportes necesarios en cada régimen; en segundo lugar, el mantenimiento del orden legal, por lo que es imperioso hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar o conceder solicitudes de traslado aun cuando los demandantes no cumplan los requisitos legales; y, en tercer lugar, las decisiones deben apoyarse en criterios técnicos que determinen que no se generará una afectación al Régimen de Prima Media con prestación Definida, esto último, a la luz de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

Por lo anterior, para esa superintendencia, en lo que tiene que ver puntualmente con el traslado de recursos entre los regímenes pensionales, los mismos deben efectuarse de

conformidad con la norma específicamente prevista para ello, es decir, el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008, señalando lo siguiente:

"De esta manera, la normatividad existente permite inferir que en caso de resultar necesario un traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media, lo procedente, además del traslado de la información correspondiente a la historia laboral del afiliado, es el traslado del valor de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos",

"...respetando la destinación de los aportes pensionales realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora que genere los rendimientos que se trasladan a la administradora de destino".

Y en cuanto a las sumas pagadas por concepto de primas de seguros previsionales se ha pronunciado de la siguiente manera:

"...en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado..."

Como se observa, se considera que las sumas destinadas al pago de seguro previsional y los gastos de administración **no deben ser trasladados** al Régimen de Prima Media en la medida que, durante el periodo de afiliación la AFP cumplió con la finalidad de proporcionar al afiliado el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, es decir, se invirtieron conforme con la estructura del Régimen de Ahorro Individual. Consideramos entonces que, existiendo una norma que regula la situación, no se ve ninguna razón atendible para apartarse de ella e incluir conceptos que no contiene y que por razones lógicas no pueden trasladarse.

IMPROCEDENCIA DE TRASLADO DE LAS SUMAS CON DESTINO AL FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA

No hay ninguna razón de orden jurídico para ordenar la remisión a Colpensiones de las sumas aportadas con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima con cargo a los propios recursos de mi representada. Si bien, los efectos de la ineficacia, en particular, es la de devolver las cosas al estado en que se hallaban antes de que se produjera el acto ineficaz y como consecuencia de ello, se deba trasladar a Colpensiones los recursos que se recibieron durante el periodo de vinculación de la demandante, es importante precisar que, de conformidad con el artículo 7° de la Ley 797 de 2003 el cual hace referencia a que un porcentaje relativo va destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

De lo anterior, se puede extraer que dichos aportes los cuales van dirigidos a una subcuenta, tienen como propósito financiar las pensiones de garantía de pensión mínima de aquellos afiliados que pertenezcan al RAIS y su capital acumulado no alcance a financiar la prestación económica de conformidad con los parámetros del artículo 64 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, no tiene sentido alguno que se traslade dichos rubros a Colpensiones cuando dicho régimen no cuenta con la capacidad ni la facultad de administrar tales dineros.

Si ello es así, no se encuentra ningún motivo que justifique que esas sumas, que no están en poder de la administradora, sean remitidas con cargo a los propios recursos de esta. Ello equivaldría a una sanción injustificada, que no guarda ninguna correspondencia con los efectos jurídicos de una ineficacia, ni, mucho menos, con las restituciones que de ellos puedan derivarse.

En efecto, como lo ha entendido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en la consulta del 3 de agosto de 2022 (Número único: 11001030600020220006200), al examinar algunas decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha considerado que, *"lo relevante es cerciorarse de que en el régimen pensional en que se encuentre el cotizante estén también sus aportes pensionales. En consecuencia, si aquel opta por un cambio de régimen, lo propio debe ocurrirles a los aportes, sin salvedad ni excepción alguna"*.

De acuerdo con este criterio, no tiene sentido trasladar ese 1.5% sobre la base de cotización puesto que sirve para equilibrar la diferencia que existe en el monto de los aportes que existe entre los dos regímenes, tal y como se expuso en la referida consulta: *"Quiere decir lo anterior, parafraseando a la Corte Suprema de Justicia, que la decisión que ordena trasladar los recursos pensionales al régimen al que esté vinculado el cotizante no lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del Sistema General de Pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional"*

En conclusión, en el caso de marras no resultaría procedente girar el porcentaje destinado al fondo de garantía mínima a Colpensiones por cuanto se estaría constituyendo un enriquecimiento sin justa causa.

LA SOLICITUD DE PERJUICIOS DE LA DEMANDANTE CONTRARÍA EL PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS.

Se debe tener en cuenta que, si bien es cierto que el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, señaló que el plazo a partir del cual el afiliado podrá trasladarse de régimen corresponde a 5 años posteriores al traslado, no implica ello que la demandante no hubiese contado con la posibilidad de trasladarse en vigencia de esta disposición.

Lo anterior implica, que la demandante no puede pretender vía proceso ordinario el pago de perjuicios y daños causados, cuando aquello contraría sus actuaciones y decisiones en materia pensional, como quiera que, pese a tener el tiempo suficiente para trasladarse al RPM, lo que hizo fue permanecer en el RAIS y solicitar su derecho pensional, mostrando así voluntad de permanecer en dicho régimen pensional.

En este punto se debe traer en cuenta la doctrina de los actos propios desarrollada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia SC10895 de 2015, haciendo alusión a sentencia 2006-00041-01 de 2013, señaló:

"Inocultable es, por lo tanto, la importancia de actuar con sujeción a los postulados que se derivan del principio general de la buena fe, pues sólo así es posible 'la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo', que a voces del artículo 2º de la Constitución Política son, entre otros más, fines del Estado Social del Derecho.

*(...) Con fundamento en el comentado principio, se ha estructurado la 'doctrina de los actos propios' -venire contra factum proprium non valet-, conforme a la cual, en líneas generales, **con fundamento en la buena fe objetiva existe para las personas el deber de actuar de manera coherente, razón por la cual ellas no pueden contradecir sin justificación sus conductas anteriores relevantes y eficaces, específicamente si con tales comportamientos se generó una expectativa legítima en los otros sobre el mantenimiento o la continuidad de la situación inicial**". (Subrayas y negrilla fuera del texto original).*

Así las cosas, se debe tener en cuenta en el presente asunto, que la demandante a lo largo de su afiliación en el sistema pensional denotó su vocación de permanencia en el régimen privado sin objeción alguna.

LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE RESPECTO DE LA FALTA DE INFORMACIÓN NO ES POR SÍ SOLO SUFICIENTE PARA DECLARAR LA EXISTENCIA DE PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS.

La demandante alega una falencia en la información entregada por los fondos de pensiones y sobre el particular, deberá tenerse en cuenta que, la estructura y condiciones del RPM y del RAIS se encuentran cabalmente estipulados en la Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias, por lo que, no resulta plausible que la demandante alegue que no fue asesorado de manera completa, clara, veraz, oportuna, adecuada y suficiente sobre las diferencias de los regímenes, los beneficios y desventajas al momento de suscribir el formulario de afiliación con la AFP Porvenir S.A.

Por otro lado, si bien es cierto que, el afiliado puede solicitar el reconocimiento de una indemnización de perjuicios de acuerdo con los artículos 2341 del Código Civil y 14 de la Ley 446 de 1998, le corresponde a aquella demostrar su dicho, sin embargo, no se observa dentro del plenario prueba sumaria alguna que permita inferir que, debido a la falta de información por parte de los fondos privados, se le ocasionó un daño y/o perjuicio.

Así las cosas, la sola afirmación de la demandante no puede ser tenida como una prueba suficiente para solicitar una posible indemnización, de modo que, Porvenir S.A. no encuentra sustento jurídico que permita dar credibilidad a lo manifestado por la parte demandante.

CARGA DE LA PRUEBA

La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva. Se conoce como principio "*onus probandi*", el cual indica que por regla general

corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo.

Así las cosas, en aquellos eventos en los que quien demanda alega haber padecido un perjuicio y pretende ser indemnizado, tiene la carga probatoria de acreditar el daño patrimonial causado y los elementos en los que se funda éste como lo son la culpa, el daño en sí y la relación de causalidad entre la culpa y el daño. En este sentido lo ha indicado la Honorable Corte Constitucional cuando en Sentencia C-609/14 estableció:

"como desde antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el tenor del artículo 2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina más tradicional identifica como 'culpa, daño y relación de causalidad entre aquélla y este'. Condiciones estas que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en comentario, definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó en la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos sujetos: el autor del daño y quien lo padeció".

En la misma línea en la Sentencia C-1008/2010 la Corte Constitucional señaló:

"3.4. En lo que concierne a la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia especializada la define como el encuentro accidental fortuito de una fuente de la obligación resarcitoria generada por mandato legal. Sobre la particular señala que: "como desde antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el tenor del artículo 2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina más tradicional identifica como "culpa, daño y relación de causalidad entre aquélla y este". Condiciones estas que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en comento, definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó en la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos sujetos: el autor del daño y quien lo padeció"

En este orden de ideas, cuando la demandante dentro de la demanda por medio de la cual alega haber sufrido unos perjuicios por el presunto incumplimiento del deber de información, y pretende la indemnización de éstos, no es posible predicar ni aplicar la carga dinámica de la prueba, ni mucho menos dar por ciertos los hechos en los que se fundamenta tal pretensión, toda vez que se parte de "negaciones indefinidas", negaciones que, en línea con lo dispuesto en el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso, no son susceptibles de ser probadas.

Es importante precisar que las negaciones indefinidas son aquellas que no implican ni directa ni implícitamente la afirmación de un hecho concreto y contrario y por lo tanto, son de imposible demostración judicial, no por ser negativas sino por su indeterminación.

Ahora bien, la imposibilidad aun absoluta en la que se puede encontrar la demandante para justificar los hechos negativos no podría ser un motivo para descargarlo de la prueba e imponer ésta al demandado.

Encontramos entonces que la pretensión de la indemnización de unos perjuicios reposa sobre hechos que son en sí negaciones indefinidas, como por ejemplo cuando la demandante señala que *"Porvenir no cumplió con el deber de información"*, pero dicha negación no tiene implícito un hecho concreto y contrario, es decir, no implica *per se* un hecho que pueda determinarse en el tiempo y espacio, lo que torna a esta negación en una negación indefinida imposible de probar.

Tal como se sabe, la ineficacia consiste en la declaración de invalidez de un acto que produce plenos efectos jurídicos. No obstante, la responsabilidad que pueda dar lugar los hechos que sirven de sustento para tal declaración no se relaciona con el efecto indemnizatorio que se persigue. Lo anterior, teniendo en cuenta que con independencia de los hechos fundantes que dan origen a la declaratoria de nulidad y/o ineficacia del acto, la demandante deberá probar el daño y la culpa del ofensor, así como la relación de causalidad existente entre la conducta desplegada por el responsable y los daños ocasionados con motivo de la nulidad, en otras palabras, no bastará con probar el daño, sino que también deberá probarse el perjuicio.

En efecto, tal posición encuentra su sustento en las consideraciones expuestas en los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, según los cuales, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, correspondiendo a las partes demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o la obligación que reclaman.

En virtud de lo anterior, los hechos sobre los cuales se fundamenta la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación al Régimen de Ahorro Individual, no pueden generar por sí solos, el restablecimiento del derecho mediante la imposición de perjuicios, pues para tal efecto, como se indicó, es necesario verificar la existencia del derecho que se reclama, es decir, el que se pretende restablecer, ya que si no se acredita el derecho no hay nada que restaurar, pues por una parte, ninguno de los sujetos procesales goza de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su libelo, y por la otra, no le está permitido a los jueces declarar de forma oficiosa, o en uso de las facultades extra o ultra petita, la existencia de tales perjuicios, porque su existencia debe estar debidamente acreditada, máxime, si la parte demandante no los solicita en su escrito de demanda, pues se reitera, además de señalar lo pretendido, deberá acreditar sus propias aseveraciones.

Ahora bien, ha de advertirse que las consideraciones aquí expuestas, no rayan con las razones indicadas en la Sentencia SL 373 de 2021 de la C.S.J que abrió la oportunidad al afiliado pensionado que se crea lesionado en sus derechos de requerir su reparación, habida cuenta de que tales consideraciones no establecieron una presunción en favor del afiliado y mucho menos lo exoneraron de su deber legal de probar los supuestos de hechos sobre los cuales basa sus pretensiones, tanto es así, que sobre el particular advirtió la Corte:

"Por lo tanto al no reclamar la reparación de perjuicios no podría la Sala de oficio entrar a evaluar esta posibilidad"

En efecto, en todos los casos nuestro ordenamiento jurídico ha señalado que los perjuicios deben probarse, y que, por ende, el reconocimiento de los mismos por parte del juez se encuentra condicionado a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, al momento de imponerse cualquier condena, deben hacerse explícitos los razonamientos y las pruebas que llevaron a dicha autoridad a tomar tal decisión, ya que la ausencia de tales aspectos conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso, máxime cuando los mismos se están aplicando de manera oficiosa.

En este orden, como quiera que los perjuicios alegados por la demandante, según su dicho, se generaron como consecuencia de una presunta falta del deber de información, ha de advertirse que corresponde a la demandante probar que el perjuicio reclamado, se generó con ocasión de la asesoría que se le suministró al momento de su afiliación y que pese a que el mismo permaneció afiliado al RAIS hasta la fecha de presentación de la demanda, no existió ningún elemento constitutivo de la voluntad consiente de la persona de mantenerse en el régimen, pues contrario a lo manifestado por la demandante, y conforme lo probado en el proceso, no existe reclamo alguno a la administradora y/o petición requiriendo dentro de las diferentes oportunidades legales previstas para el efecto en la norma, el traslado de régimen.

Finalmente, debe advertirse que el perjuicio reclamado no se generó con la asesoría suministrada por la administradora de pensiones, pues, en primer lugar, la administradora de pensiones cumplió a cabalidad con las exigencias señaladas en las normas vigentes al momento de la afiliación, y, por último, porque la consolidación del derecho pensional depende en ambos regímenes de hechos futuros que la administradora no puede predecir, a fin de determinar qué régimen le convine más.

En otras palabras, la obligación de la administradora de fondos de pensiones se traduce en la correcta administración del capital ahorrado por el afiliado en su cuenta de ahorro individual y no el reconocimiento de una pensión con una mesada pensional de determinado valor, lo que se traduce en que las obligaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones son de medio y no de resultado.

CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS EN QUE SE PRETENDA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Cabe resaltar que, la indemnización de perjuicios por la posible irregularidad de la afiliación únicamente aplica en caso de **los pensionados** y es una pretensión que debe ser estudiada, según el material probatorio que se incluya en el expediente. No obstante, la carga de la prueba no corre la misma suerte que en los procesos de declaratoria de ineficacia del traslado, toda vez que, tal y como lo han decantado las sentencias de la honorable Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en la SL 1689 de 2019 y SL 2818 de 2019, la carga de la prueba se encuentra en cabeza de quien pretenda el pago de daños y/o perjuicio. Por

lo tanto, debe existir una prueba **cierta** acerca de la existencia de un perjuicio ocasionado a la demandante en el presente asunto.

En tal sentido, debe resaltarse que no existe prueba documental alguna dentro del plenario que acredite que mi representada incumplió con alguna de sus responsabilidades ocasionándole algún tipo de daño y/o perjuicio a la demandante, razón por la cual, resulta improcedente cualquier declaratoria de este tipo, y más aún, cuando mi representada, cumplió con el deber de información exigible para época del traslado de la demandante.

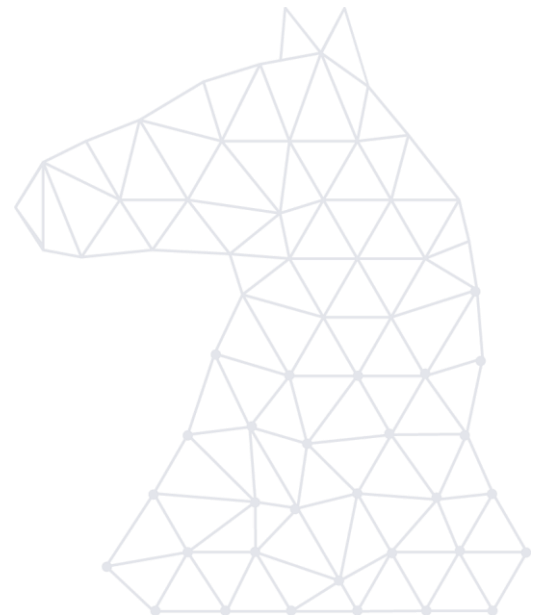
BUENA FE OBJETIVA DE LA AFP PORVENIR S.A.

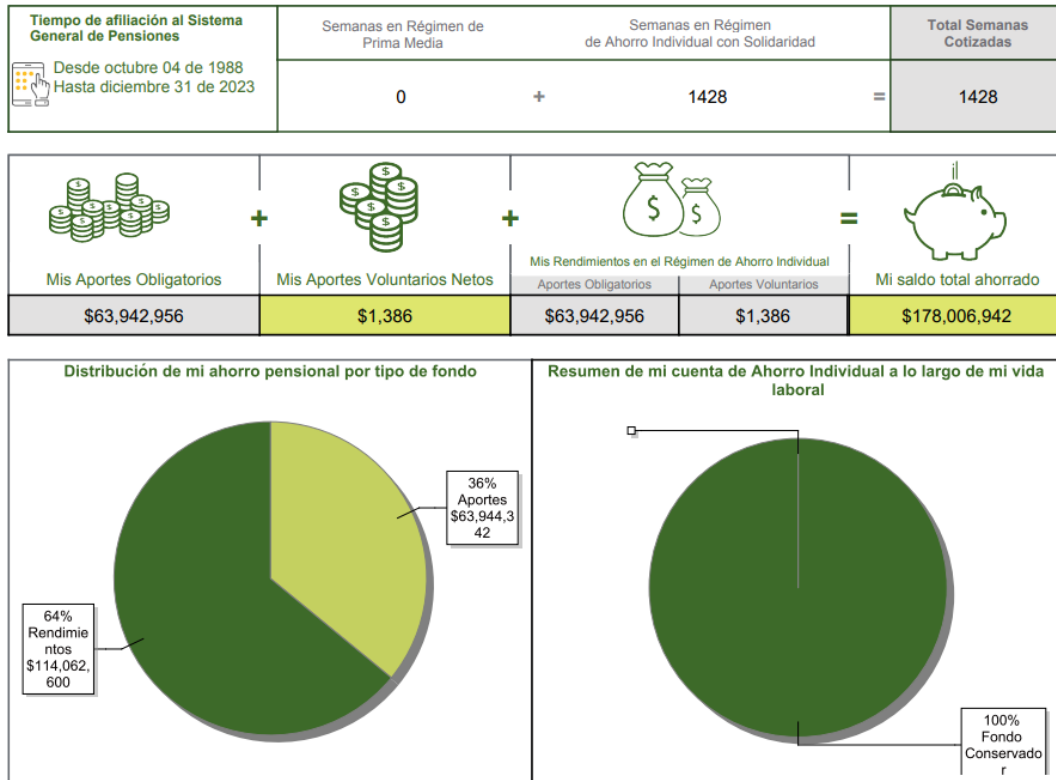
La buena fe objetiva se traduce en un deber de comportamiento que se expresa a través de las reglas de honestidad y corrección, transparencia, diligencia, responsabilidad, consideración del interés del otro, entre otros deberes que emanan permanentemente del carácter normativo propio de ese principio, las cuales deben estar presentes en todas las actuaciones de a quienes les es exigible.

De acuerdo con lo anterior, el actuar de la administradora aquí llamada a juicio, siempre ha sido de buena fe objetiva, cumpliendo con todas las obligaciones que se encontraban a su cargo.

EN EL CASO EN CONCRETO

Así las cosas, véase incluso que, en el caso que se analiza, en la cuenta de ahorro individual de la demandante, se encuentra depositado un total de \$178.006.942 que están distribuidos en un 36% en aportes correspondientes a \$63.944.342 y un 64% que equivale a \$114.062.600 en rendimientos, lo que demuestra claramente que es a razón de la actividad profesional de mi representada que la cuenta de ahorro acreció con el paso del tiempo y los rendimientos, situación que, en caso de haber continuado la demandante en el RPM, no se habría generado, como se muestra a continuación:





V. EXCEPCION PREVIA

INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES O POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES

De conformidad con el numeral 5° del artículo 100 del Código General del Proceso me permito proponer la excepción previa denominada "*Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones*"; ya que, al revisar de manera detallada el acápite denominado "*Pretensiones declarativas*" y "*pretensiones condenatorias*", solicita, declarar la ineficacia de la afiliación efectuada por la demandante del RPM al RAIS y a su vez, el reconocimiento y pago de perjuicios.

Es por lo anterior que, tales pretensiones al no estar consignadas de manera principal y subsidiaria se excluyen entre sí y por tal razón, en el presente asunto, se configura una indebida acumulación de pretensiones, yendo en contravía de lo estipulado en el numeral 2° de artículo 25-A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Así las cosas, no pueden acumularse en una demanda pretensiones principales cuyo objetivo es el de declarar la ineficacia de la afiliación y su posterior retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida junto con la reclamación de perjuicios debido a que se estaría generando una doble condena contra mi representada.

VI. EXCEPCIONES DE FONDO

a) PRESCRIPCIÓN DE LA INEFICACIA

Sin que se reconozca derecho alguno a favor de la parte demandante, propongo la excepción de prescripción frente a todos aquellos derechos que eventualmente hayan perdido oportunidad de discusión y exigibilidad por el simple pasar del tiempo.

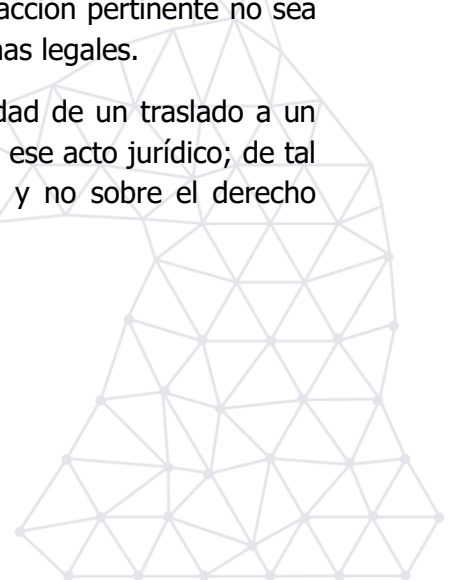
Tenga en cuenta señor Juez que, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo establece un término específico y especial para efectos de la prescripción en materia laboral, el cual a la letra reza lo siguiente:

"Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto."

Por tal motivo, que se trate de un proceso de declaratoria de ineficacia de un traslado de régimen pensional, no significa que se esté en presencia del derecho pensional y que por esa vía se concluya que la acción no prescribe, puesto que una cosa es la consolidación o causación del derecho prestacional como derecho subjetivo especialísimo, y otra, distinta, la ineficacia del acto que define bajo cuál régimen ese derecho se ejercerá, lo que en modo alguno impide que efectivamente se cause.

De igual forma, no todas las cuestiones que estén relacionadas con un derecho pensional tienen que ver con la causación o consolidación de ese derecho y, en consecuencia, con la naturaleza imprescriptible que este tiene; entender lo contrario, equivale a considerar que todos los aspectos debatidos en un proceso judicial que giren en torno a un derecho pensional no pueden ser afectados por el fenómeno jurídico de la prescripción. Si bien, no se desconoce el carácter imprescriptible del derecho a la pensión de vejez, como tampoco el de los elementos que lo conforman, como el porcentaje de la base salarial, ello no significa que cuando lo que se discute en el proceso sea una cuestión jurídica distinta a ese derecho, en sí mismo considerado, de todos modos, por estar aquel involucrado indirectamente, la acción pertinente no sea susceptible de prescribir en el término establecido en las normas legales.

Es claro que lo discutido en el presente proceso es la legalidad de un traslado a un régimen pensional y por ello se pide la nulidad o ineficacia de ese acto jurídico; de tal modo que, el proceso gira en torno a ese específico punto y no sobre el derecho pensional de la demandante.



b) PRESCRIPCIÓN DE LOS PERJUICIOS

El ordenamiento jurídico contempla la prescripción extintiva como una garantía a la seguridad jurídica y como un modo de extinguir las obligaciones dentro del marco de una relación obligacional.

Conforme a esta institución jurídica, el titular del derecho debe exigir el cumplimiento de una obligación dentro de un término perentorio, so pena de que su obligado, pueda alegar su negligencia al demorar en exceso el cobro de su acreencia y así extinguir dicha obligación. De esta forma, si el titular del derecho deja de exigir la prestación por largo tiempo, es de presumir que tal acreencia o derecho no le interesa, por lo cual este pierde su razón de ser.

Descendiendo al caso que nos ocupa y sin que se le esté reconociendo mediante este acápite derecho alguno a la parte demandante, se propone la excepción de prescripción frente a todos aquellos derechos que hubiere podido tener dicha parte y que no se hayan exigido dentro del término perentorio. Respecto del término perentorio, este lapso es de 3 años, conforme a lo dispuesto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que dispone:

"las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto".

Así las cosas, en el presente caso es evidente que existe la configuración de la prescripción, toda vez que la afiliación a Porvenir que hoy se discute, ocurrió en un término superior a los 3 años, contados desde el momento en que se suscribió el Formulario respectivo.

c) PRESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El ordenamiento jurídico contempla la prescripción extintiva como una garantía a la seguridad jurídica y como un modo de extinguir las obligaciones dentro del marco de una relación obligacional.

Conforme a esta institución jurídica, el titular del derecho debe exigir el cumplimiento de una obligación dentro de un término perentorio, so pena de que su obligado, pueda alegar su negligencia al demorar en exceso el cobro de su acreencia y así extinguir dicha obligación. De esta forma, si el titular del derecho deja de exigir la prestación por largo tiempo, es de presumir que tal acreencia o derecho no le interesa, por lo cual este pierde su razón de ser.

Descendiendo al caso que nos ocupa y sin que se le esté reconociendo mediante este acápite derecho alguno a la parte demandante, se propone la excepción de prescripción

frente a todos aquellos derechos que hubiere podido tener dicha parte y que no se hayan exigido dentro del término perentorio.



Bajo ese contexto, la imprescriptibilidad de los aportes pensionales no debe operar para los gastos de administración, teniendo en cuenta que, **estos NO constituyen parámetros para liquidar la mesada pensional** de ningún afiliado en el SSGS (RPM – RAIS). Cabe resaltar que, aun cuando de decretarse la nulidad o ineficacia de la afiliación los aportes se trasladarían con los rendimientos causados a la fecha, los cuales, en la mayoría de los casos constituyen un porcentaje superior al valor de los aportes como quedó probado en el proceso.

Es por lo anterior que, de acuerdo con el hecho de no haberse trasladado nunca al RAIS, en el RPM también se efectuaría el cobro de gastos de administración.

Al respecto, el Artículo 48 de la Constitución Nacional establece que, para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones y estas, son de obligatorio cumplimiento y no puede invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido, por cuanto puede afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y a fin de evitar fraudes al sistema, conforme cita textualmente:

*"El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley...**la liquidación de las pensiones sólo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones**...Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones.*

No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido”(Negrilla y Subrayado fuera del texto)

En adición, y en concordancia con el artículo 20 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, y el art 101 de la Ley 100 de 1993 que señala: *"Rentabilidad Mínima a cargo de las AFP. La totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los fondos de pensiones será abonada en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados."*

Así las cosas, en el presente caso es evidente que existe la configuración de la prescripción frente a los gastos de administración, toda vez que la afiliación a Porvenir aconteció el día 31 de mayo de 1999, es decir, transcurrió un término superior a los 3 años.

d) COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

En la medida en la que la afiliación de la demandante al RAIS cuenta con plena validez, al llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, mi representada no se encuentra en obligación de acceder a las peticiones de la demanda.

e) BUENA FE

Ahora bien, sin que lo presente signifique reconocimiento alguno a favor de la parte demandante, debo señalar que mi representada siempre ha obrado de buena fe, y prueba de ello es que brindó asesoría en debida forma a la demandante, incluso previo al traslado, hecho que hace improcedente cualquier condena en contra de ella.

f) COMPENSACIÓN.

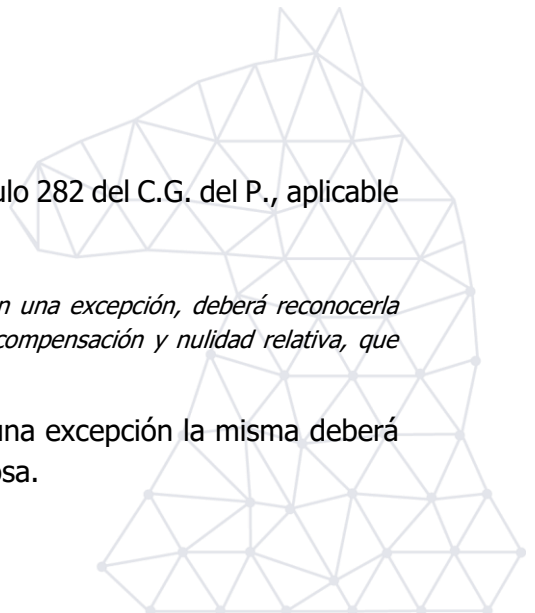
Sin aceptar ningún tipo de responsabilidad frente a mi representada, se entiende que cualquier suma de dinero pagada previamente compensa las obligaciones monetarias que puedan llegar a surgir en el presente proceso.

g) INNOMINADA O GENÉRICA

Excepción que se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 282 del C.G. del P., aplicable por analogía al procedimiento laboral, que indica:

"Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda..."

Por tal motivo, si el señor juez encontrare probada alguna excepción la misma deberá ser declarada al proferirse la sentencia de manera oficiosa.

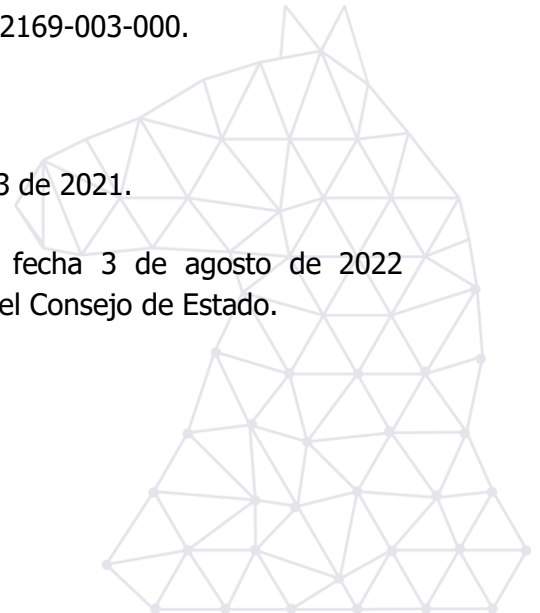


VII. PRUEBAS

a) DOCUMENTALES

Me permito manifestar que la documental allegada con el presente escrito corresponde a la totalidad de documentos que reposan en el archivo de mi representada:

- Formulario de afiliación al Fondo de Pensiones Colpatria de fecha 31 de mayo de 1999.
- Certificado de afiliación expedido por Porvenir S.A. de fecha 15 de marzo de 2024.
- Historia Laboral Consolidada expedida por Porvenir S.A. de fecha 15 de marzo de 2024.
- Relación de aportes expedida por Porvenir S.A. de fecha 15 de marzo de 2024.
- Viabilidad expedida por Asofondos
- SIAFP
- Bono pensional.
- Derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2023.
- Respuestas brindadas por Porvenir S.A. de fecha 15 de marzo de 2023.
- Concepto emitido por la Superfinanciera 2019152169-003-000.
- Comunicado de prensa.
- Respuesta del Ministerio de Hacienda – Auto 583 de 2021.
- Concepto No. 11001030600020220006200 de fecha 3 de agosto de 2022 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.



b) INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito al señor Juez, se fije fecha y hora para que la demandante comparezca a su despacho a absolver el interrogatorio de parte que le formularé, con exhibición de documentos.

VIII. ANEXOS

Anexo a la presente contestación de demanda los siguientes documentos:

1. Los documentos relacionados como prueba.
2. Copia simple de la Escritura Pública por medio de la cual Porvenir S.A. otorga poder general a Godoy Córdoba S.A.S. para ejercer representación y defensa judicial.
3. Certificado de Existencia y Representación legal de Godoy Córdoba S.A.S.
4. Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de la suscrita.

IX. NOTIFICACIONES

La suscrita recibirá notificaciones físicas en la Avenida Calle 84a No. 10-33, piso 5 de la ciudad de Bogotá y notificaciones electrónicas a los correos: notificaciones@godoycordoba.com y casoler@godoycordoba.com

X. TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES

En esta oportunidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022 y, en concordancia con el numeral 14 del artículo 78 del C.G.P., se remite el presente escrito con copia al apoderado judicial de la parte demandante (luisfuentes976@hotmail.com), Colfondos S.A. (procesosjudiciales@colfondos.com.co) y Colpensiones (notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co).

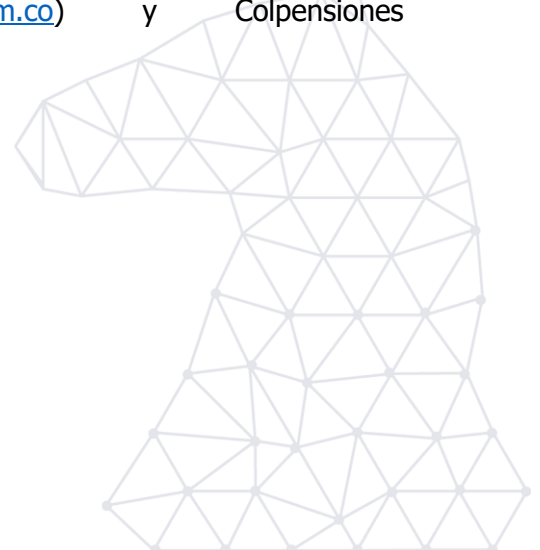
Del señor Juez,



CAMILA SOLER SÁNCHEZ

C.C. 1.014.290.875 de Bogotá D.C.

T.P. 352.159 del C.S. de la J.



SOLICITUD DE AFILIACION Y TRASLADO

CIUDAD BTA	FECHA DE ELABORACION AÑO 1999 MES 05 DIA 31	FECHA DE RADICACION 31 MAY 1999	0235517
VINCULACION INICIAL AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES <input type="checkbox"/>		TRASLADO DE REGIMEN <input type="checkbox"/> : ENTIDAD ADMINISTRADORA ANTERIOR CAPRECOM <input type="checkbox"/> ISS <input type="checkbox"/>	
TRASLADO DE FONDO DE PENSIONES <input checked="" type="checkbox"/> COLFONDDO		CAJANAL <input type="checkbox"/> OTRA <input type="checkbox"/>	
FONDO DE PENSIONES ANTERIOR			

INFORMACION DEL TRABAJADOR

NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD 64 516 673.	T.I. X	C.C. X	C.E.	NACIONALIDAD COLOMBIANA	FECHA DE NACIMIENTO AÑO 1959 MES 06 DIA 13	M X	SEXO X
PRIMER APELLIDO SILGADO	SEGUNDO APELLIDO TAPIAS			PRIMER NOMBRE CARMEN	SEGUNDO NOMBRE YADIRA.		
OCUPACION O CARGO ACTUAL Profesional				SALARIO O INGRESO MENSUAL \$ 523.000	% COTIZACION VOLUNTARIA O MONTO EN PESOS		
DIRECCION DE RESIDENCIA 137 # 133A 1A int. 1 Ap. 302 BTA				DEPARTAMENTO CUND	TELEFONO 2594397		
DIRECCION DONDE LABORA Terminal Transporta Mod. Amarillo BTA				DEPARTAMENTO CUND	TELEFONO 2223141	EXT. 2636220	
APARTADO AEREO				ENVIO CORRESPONDENCIA	DONDE LABORA <input type="checkbox"/>	RESIDENCIA <input checked="" type="checkbox"/>	APARTADO AEREO <input type="checkbox"/>
TIPO DE TRABAJADOR DEPENDIENTE <input checked="" type="checkbox"/> INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE ASOCIADO <input type="checkbox"/> SERVICIO DOMESTICO <input type="checkbox"/>							

INFORMACION DEL EMPLEADOR (SI ES INDEPENDIENTE, NO DILIGENCIAR)

NO. DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR: 899999055-4	NIT. <input checked="" type="checkbox"/>	C.C.	C.E.	NOMBRE O RAZON SOCIAL MINISTERIO - TRANSPORTE	SECTOR PUBLICO X	SECTOR PRIVADO
DIRECCION DEL AREA DE PERSONAL DEL EMPLEADOR AV DORADO CAN				APARTADO AEREO	CIUDAD BTA	DEPARTAMENTO CUND
				TELEFONO 2224555	FAX	

INFORMACION BENEFICIARIOS

APELLIDOS Y NOMBRES (SI SON MAS DE 3 BENEFICIARIOS, ADJUNTAR RELACION)	SEXO M F	EDAD	CODIGO PARENTESCO	CODIGOS PARENTESCO
TAPIAS EUSEBIA	X	60	03	01 CONYUGE
SILGADO BARTOLO	X	63	03	02 COMPAÑERO (A) PERMANENTE
				03 PADRES
				04 HIJOS
				05 HIJOS INVALIDOS

VOLUNTAD DE AFILIACION

HAGO CONSTAR QUE LA SELECCION DE REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD LA HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESIONES, MANIFIESTO QUE HE ELEGIDO AL FONDO DE PENSIONES COLPATRIA PARA QUE ADMINISTRE MIS APORTES PENSIONALES Y SOLICITE EL TRASLADO DE LOS VALORES A QUE TENGA DERECHO DE LA ANTERIOR ENTIDAD ADMINISTRADORA. ASI MISMO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS

X *[Firma]*
FIRMA DEL AFILIADO

AFILIACION POR RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR

LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO SON LOS QUE CORRESPONDEN A LA INFORMACION QUE ME HA SIDO SUMINISTRADA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO EMPLEADOR

NOMBRE REPRESENTANTE COMERCIAL: JOSE LOIS CRUZ B.	C.C. 79 503 575	OBSERVACIONES:
EMPRESA DONDE LABORA: AFP ZI 4176098-6447	TELEFONO	

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El (La) Señor(a) **CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **64.516.673**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR** desde el 01 de julio de 1999.

La presente certificación se expide el 15 de marzo de 2024.

Cordialmente,



Gerente de Clientes



Nombre afiliado:

Carmen Silgado

Tipo y número de documento:

CC 64,516,673

Fecha de nacimiento:

13/06/1959

Tu Historia Laboral Consolidada

Semanas

Entidades Públicas

A

Consolidada

Traslados de aportes

0

Semanas cotizadas

Válidas para bono

0

Semanas cotizadas

+

Fondos de Pensiones (RAIS)

B

Otras Administradoras

190.4

Semanas cotizadas

[Ver detalles](#)

+

C

Porvenir

1246.5

Semanas cotizadas

[Ver detalles](#)

=

Total

A + B + C

Cotizadas*

1437

Semanas cotizadas



*Este total corresponde a las semanas que has cotizado y están confirmadas

* Si cotizaste simultáneamente para más de un empleador, el valor total del aporte estará incluido en el saldo y el tiempo sumará solo una vez para el cálculo de las semanas cotizadas

D

Por consolidar

Traslados de aportes

130.4

Semanas pendientes por confirmar

[Ver detalles](#)

• ¿Por qué estas semanas no hacen parte de las que se muestran en la sección consolidada?

Porque las entidades públicas no han enviado los aportes pertinentes.

• ¿Cómo puedes identificar que estas semanas aún están en verificación?

En la sección D de este documento se ven reflejadas las semanas que serán verificadas por la entidad que corresponda.

• ¿Cómo se puede verificar si las semanas están validadas?

Una vez recibamos los aportes, las semanas se sumarán en la sección A, (en este punto como afiliado puedes validar tu Historia Laboral y reportar las inconsistencias que identifiques, para revisarla). [haz clic aquí](#)

Aportes

Valor de las semanas válidas para bono a fecha de generación del certificado

+

Otras Administradoras y Porvenir

Saldo de la cuenta individual

\$ 182,847,473

=

Total acumulado

\$ 182,847,473



¿Te hacen falta semanas cotizadas?
Para actualizar tu Historia Laboral,
[haz clic aquí](#)



¿Cuántas semanas cotizadas
tienes en los últimos 3 años?

152

Si has cotizado por lo menos 50 semanas en este período
estás cubierto por un seguro previsional que te ampara a ti y
a tu familia, teniendo en cuenta los demás requisitos legales.

* El valor del bono pensional es un cálculo provisional y no debe entenderse en ningún caso como una situación jurídica concreta y definitiva, el mismo puede variar por cambios en su historia laboral o por el tipo de redención de su bono pensional

Nombre Afiliado:
Carmen Silgado

Tipo y número documento:
CC 64,516,673

Fecha de actualización de información:
27/02/2024



D

Semanas cotizadas en las Entidades Públicas

Estas semanas no se han verificado

Tipo	N° identificación	Razón Social del Empleador
NIT	899999067	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT	899999067	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Historia Laboral reportada en el sistema de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda (OBPI)		
Periodo Inicial Día/Mes/Año	Periodo Final Día/Mes/Año	Días Cotizados
04/10/1988	31/03/1991	909
01/04/1991	02/04/1991	2
01/08/2013	31/08/2013	1
01/10/2013	31/10/2013	1
Total de semanas que no se han verificado:		130.4

Nombre Afiliado:
Carmen Silgado

Tipo y número documento:
CC 64,516,673

Fecha de actualización de información:
05/03/2024



B Semanas cotizadas en otras administradoras del Régimen Privado

Administradora de origen	Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
				Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	09/1995	09/1995	\$ 426,556	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	10/1995	11/1995	\$ 290,222	60			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	12/1995	12/1995	\$ 198,639	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	02/1996	02/1996	\$ 460,480	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	03/1996	03/1996	\$ 300,310	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	04/1996	11/1996	\$ 312,089	240			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	12/1996	12/1996	\$ 300,310	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	01/1997	01/1997	\$ 587,996	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	02/1997	02/1997	\$ 326,889	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	03/1997	07/1997	\$ 355,782	150			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	08/1997	08/1997	\$ 368,265	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	09/1997	09/1997	\$ 510,100	26			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	10/1997	10/1997	\$ 421,631	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	11/1997	11/1997	\$ 463,110	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	12/1997	12/1997	\$ 363,265	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	01/1998	01/1998	\$ 745,386	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	02/1998	02/1998	\$ 355,990	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	03/1998	03/1998	\$ 482,812	30			

Nombre Afiliado:

Carmen Silgado

Tipo y número documento:

CC 64,516,673

Fecha de actualización de información:

05/03/2024

B Semanas cotizadas en otras administradoras del Régimen Privado

Administradora de origen	Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
				Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	04/1998	04/1998	\$ 557,124	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	05/1998	05/1998	\$ 527,755	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	06/1998	06/1998	\$ 558,459	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	07/1998	07/1998	\$ 527,060	28			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	08/1998	08/1998	\$ 551,980	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	09/1998	09/1998	\$ 567,580	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	10/1998	10/1998	\$ 536,654	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	11/1998	11/1998	\$ 492,601	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	12/1998	12/1998	\$ 427,189	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	01/1999	01/1999	\$ 821,785	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	02/1999	02/1999	\$ 466,790	30			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	03/1999	03/1999	\$ 479,610	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	04/1999	04/1999	\$ 479,760	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	05/1999	05/1999	\$ 477,320	29			
COLFONDOS	NI	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	06/1999	06/1999	\$ 484,730	29			
Total de semanas cotizadas:										190.4

¿Si tu información está desactualizada o se deben realizar cambios?



Ingresa a www.porvenir.com.co/web/actualiza-tu-historia-laboral

Nombre Afiliado:

Carmen Silgado

Tipo y número documento:

CC 64,516,673



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
CC	64516673	CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS	07/1999	07/1999	\$ 585,360	30			
CC	64516673	CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS	08/1999	08/1999	\$ 499,812	30			
NIT	899999055	MINISTERIO DE TRANSPORTE	09/1999	09/1999	\$ 499,812	30			
CC	64516673	CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS	10/1999	12/1999	\$ 499,812	90			
CC	64516673	CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS	01/2000	01/2000	\$ 749,718	30			
CC	64516673	CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS	02/2000	02/2000	\$ 499,812	30			
CC	64516673	CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS	03/2000	03/2000	\$ 999,624	30			
NIT	800144331	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE P	04/2000	04/2000	\$ 49,981	3			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2000	09/2000	\$ 766,378	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2000	11/2000	\$ 499,812	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2000	12/2000	\$ 709,050	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2001	01/2001	\$ 545,945	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2001	02/2001	\$ 831,945	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2001	04/2001	\$ 546,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2001	05/2001	\$ 819,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2001	07/2001	\$ 546,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2001	08/2001	\$ 662,365	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2001	09/2001	\$ 560,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2001	10/2001	\$ 580,000	30			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2001	11/2001	\$ 605,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2001	12/2001	\$ 1,085,748	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2002	01/2002	\$ 625,378	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2002	02/2002	\$ 625,007	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2002	03/2002	\$ 625,378	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2002	04/2002	\$ 699,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2002	05/2002	\$ 1,035,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2002	06/2002	\$ 625,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2002	07/2002	\$ 699,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2002	08/2002	\$ 798,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2002	09/2002	\$ 784,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2002	10/2002	\$ 720,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2002	11/2002	\$ 625,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2002	12/2002	\$ 613,640	29			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2003	01/2003	\$ 625,017	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2003	04/2003	\$ 625,000	90			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2003	05/2003	\$ 937,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2003	06/2003	\$ 611,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2003	07/2003	\$ 625,016	30			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2003	11/2003	\$ 625,000	120			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2003	12/2003	\$ 625,032	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2004	01/2004	\$ 639,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2004	03/2004	\$ 666,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2004	04/2004	\$ 666,020	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2004	05/2004	\$ 998,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2004	11/2004	\$ 666,000	180			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2004	03/2005	\$ 702,000	120			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2005	04/2005	\$ 741,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2005	05/2005	\$ 1,111,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2005	06/2005	\$ 741,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2005	07/2005	\$ 850,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2005	08/2005	\$ 893,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2005	09/2005	\$ 823,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2005	10/2005	\$ 883,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2005	11/2005	\$ 1,137,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2005	01/2006	\$ 954,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2006	04/2006	\$ 1,001,000	90			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2006	05/2006	\$ 1,352,000	30			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2006	06/2006	\$ 1,130,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2006	07/2006	\$ 1,142,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2006	08/2006	\$ 1,001,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2006	09/2006	\$ 778,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2006	10/2006	\$ 886,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2006	11/2006	\$ 948,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2006	12/2006	\$ 778,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2007	01/2007	\$ 1,014,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2007	02/2007	\$ 778,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2007	03/2007	\$ 813,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2007	04/2007	\$ 948,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2007	05/2007	\$ 1,219,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2007	02/2008	\$ 813,000	270			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2008	04/2008	\$ 859,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2008	05/2008	\$ 1,289,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2008	06/2008	\$ 859,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2008	07/2008	\$ 1,139,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2008	08/2008	\$ 859,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2008	10/2008	\$ 1,106,000	60			

Nombre Afiliado:

Carmen Silgado

Tipo y número documento:

CC 64,516,673



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2008	11/2008	\$ 1,081,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2008	01/2009	\$ 1,106,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2009	02/2009	\$ 941,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2009	03/2009	\$ 1,240,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2009	04/2009	\$ 1,191,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2009	05/2009	\$ 1,590,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2009	07/2009	\$ 1,191,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2009	08/2009	\$ 1,031,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2009	09/2009	\$ 1,280,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2009	10/2009	\$ 1,175,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2009	11/2009	\$ 1,040,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2009	12/2009	\$ 1,230,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2010	01/2010	\$ 1,191,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2010	02/2010	\$ 1,167,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2010	04/2010	\$ 1,191,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2010	05/2010	\$ 1,687,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2010	06/2010	\$ 1,010,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2010	08/2010	\$ 1,191,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2010	09/2010	\$ 1,151,000	30			

Nombre Afiliado:

Carmen Silgado

Tipo y número documento:

CC 64,516,673



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2010	10/2010	\$ 1,215,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2010	11/2010	\$ 1,188,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2010	12/2010	\$ 1,213,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2011	01/2011	\$ 1,215,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2011	02/2011	\$ 1,133,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2011	03/2011	\$ 1,296,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2011	04/2011	\$ 1,208,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2011	05/2011	\$ 1,692,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2011	06/2011	\$ 973,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2011	07/2011	\$ 1,021,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2011	08/2011	\$ 975,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2011	03/2012	\$ 973,000	210			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2012	04/2012	\$ 1,149,533	29			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2012	05/2012	\$ 1,868,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2012	06/2012	\$ 1,702,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2012	07/2012	\$ 1,328,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2012	12/2012	\$ 1,245,000	150			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2013	01/2013	\$ 1,187,267	29			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2013	02/2013	\$ 1,148,467	28			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2013	03/2013	\$ 1,225,133	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2013	04/2013	\$ 1,245,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2013	05/2013	\$ 1,868,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2013	07/2013	\$ 1,288,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2013	08/2013	\$ 1,262,667	29			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2013	09/2013	\$ 1,288,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2013	10/2013	\$ 1,246,467	29			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	11/2013	11/2013	\$ 1,288,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2013	12/2013	\$ 2,972,995	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2014	01/2014	\$ 3,479,126	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2014	03/2014	\$ 1,803,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2014	04/2014	\$ 3,606,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2014	05/2014	\$ 2,434,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2014	06/2014	\$ 1,784,067	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2014	12/2014	\$ 1,803,000	180			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2015	01/2015	\$ 3,711,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2015	02/2015	\$ 4,588,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2015	03/2015	\$ 4,622,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2015	04/2015	\$ 4,729,000	30			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2015	05/2015	\$ 6,238,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2015	12/2015	\$ 2,418,000	210			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2016	01/2016	\$ 2,606,266	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2016	02/2016	\$ 5,024,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2016	04/2016	\$ 2,606,000	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2016	05/2016	\$ 3,518,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2016	06/2016	\$ 3,153,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2016	07/2016	\$ 2,637,000	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2016	12/2016	\$ 2,606,000	150			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2017	01/2017	\$ 5,387,957	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2017	02/2017	\$ 5,388,070	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2017	04/2017	\$ 2,782,404	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2017	05/2017	\$ 3,755,808	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2017	07/2017	\$ 2,782,070	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2017	08/2017	\$ 2,782,069	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2017	01/2018	\$ 2,782,070	150			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2018	02/2018	\$ 2,751,161	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2018	04/2018	\$ 2,923,678	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2018	05/2018	\$ 3,946,965	30			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2018	11/2018	\$ 2,923,678	180			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	12/2018	12/2018	\$ 2,923,679	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2019	01/2019	\$ 3,055,553	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2019	02/2019	\$ 2,981,214	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2019	04/2019	\$ 3,055,553	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2019	05/2019	\$ 4,124,465	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2019	12/2019	\$ 3,055,244	210			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2020	01/2020	\$ 3,211,494	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2020	02/2020	\$ 3,222,119	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	03/2020	04/2020	\$ 3,211,673	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2020	05/2020	\$ 4,335,759	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2020	07/2020	\$ 3,211,673	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2020	09/2020	\$ 3,211,674	60			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	10/2020	12/2020	\$ 3,211,673	90			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2021	04/2021	\$ 3,295,423	120			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2021	05/2021	\$ 4,736,384	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2021	06/2021	\$ 4,232,102	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2021	07/2021	\$ 4,023,534	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	08/2021	08/2021	\$ 3,295,423	30			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	09/2021	12/2021	\$ 3,295,498	120			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2022	03/2022	\$ 3,534,873	90			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	04/2022	04/2022	\$ 3,534,752	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2022	05/2022	\$ 4,771,915	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2022	12/2022	\$ 3,534,752	210			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	01/2023	01/2023	\$ 4,051,628	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	02/2023	04/2023	\$ 4,051,627	90			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	05/2023	05/2023	\$ 5,469,415	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	06/2023	06/2023	\$ 4,051,534	30			
NIT	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	07/2023	02/2024	\$ 4,051,533	240			
							Total de semanas cotizadas:		
							1246.5		

Para tus
solicitudes
consulta





SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
Relacion Historica de Movimientos Porvenir

Cédula	64516673	Nombre	CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS	Numero Cuenta	6527476
Dirección	KR 64 12 13 CS INDEPENDENCIA	Ciudad	BUENAVENTURA	Departamento	VALLE
Estado Afiliado	VIGENTE	SubEstado Afiliado	TRASLADO_ENTRADA	Fecha Generación Informe	2024/03/15
Fecha Afiliación	1999/05/31	Fecha Efectividad Afiliación	1999/07/01	Tipo de Vinculación	TRASLADO DE AFP

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2014/09/26	201107	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	30,638	0	15,318	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201107	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	117,444	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/26	201108	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,250	0	14,625	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201108	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	112,125	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201109	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,909	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201109	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,194	0	14,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201110	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,194	0	14,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201110	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,909	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/10/09	201111	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,909	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/10/09	201111	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,194	0	14,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201112	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,909	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/26	201112	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,194	0	14,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201201	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,909	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201201	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,194	0	14,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201202	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,909	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201202	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,194	0	14,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201203	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	29,194	0	14,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2014/09/26	201203	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	111,909	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/11/12	201204	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	132,193	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/11/12	201204	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	34,485	0	17,243	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201205	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	214,834	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/26	201205	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	56,044	0	28,022	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201206	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	195,716	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/26	201206	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	51,056	0	25,528	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/26	201207	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	152,734	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/26	201207	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	39,844	0	19,922	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201208	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,350	0	18,675	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201208	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	143,175	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2013/04/19	201209	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	(37,350)	0	(18,675)	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2013/04/19	201209	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	(143,175)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/17	201209	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	143,175	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/17	201209	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,350	0	18,675	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/17	201210	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	143,175	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2013/04/19	201210	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	(37,350)	0	(18,675)	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/17	201210	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,350	0	18,675	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2013/04/19	201210	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	(143,175)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/17	201211	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,350	0	18,675	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2013/04/19	201211	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	(37,350)	0	(18,675)	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/09/17	201211	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	143,175	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2013/04/19	201211	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	(143,173)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/17	201212	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	143,175	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/09/17	201212	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,350	0	18,675	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2013/04/19	201212	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	(143,172)	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2013/04/19	201212	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	(37,350)	0	(18,675)	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/10/09	201301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	35,620	0	17,809	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/10/09	201301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	136,540	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/11/12	201302	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	132,071	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/11/12	201302	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	34,453	0	17,227	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201303	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	140,894	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201303	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	36,755	0	18,377	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	142,577	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,194	0	18,597	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201306	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	38,644	0	19,322	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201306	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	148,134	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/02/21	201308	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	145,206	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/02/21	201308	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,880	0	18,940	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/01/20	201310	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	143,337	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/01/20	201310	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,392	0	18,697	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/01/20	201311	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	38,470	0	19,236	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/01/20	201311	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	147,471	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/04/23	201312	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	141,924	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/04/23	201312	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37,023	0	18,512	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/06/13	201312	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	53,400	0	26,700	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/06/13	201312	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	204,700	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/03/21	201401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	51,364	0	25,683	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/06/13	201401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	209,731	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/06/13	201401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,713	0	27,356	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2014/03/21	201401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	196,897	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/01/01	201401	800147502	BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS	0	0	0	2,365,006	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/01/01	201401	800147502	BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS	50,246,920	0	0	0	0	3,086	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/05/21	201402	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/05/21	201402	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/02/26	201403	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/02/26	201403	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/06/13	201404	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201404	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201404	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/06/13	201404	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201405	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	279,881	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201405	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	73,012	0	36,507	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/11/12	201406	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	53,521	0	26,761	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/11/12	201406	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	205,164	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201407	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201407	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/07	201408	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/07	201408	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/10/01	201409	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2014/10/01	201409	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/12/18	201410	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/12/18	201410	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/12/18	201411	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/12/18	201411	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2014/12/29	201412	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2014/12/29	201412	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/01/29	201501	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,094	0	27,047	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/01/29	201501	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	207,359	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/12/17	201501	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	57,243	0	28,623	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/17	201501	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	219,434	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/03/02	201502	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	263,782	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/12/17	201502	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	68,812	0	34,407	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/03/02	201502	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	68,812	0	34,406	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/17	201502	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	263,781	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/03/30	201503	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	265,794	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/12/17	201503	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	69,337	0	34,669	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/03/30	201503	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	69,337	0	34,669	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/17	201503	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	265,794	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/04/30	201504	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	265,794	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/12/17	201504	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,273	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/04/30	201504	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	69,337	0	34,669	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/17	201504	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,084	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/05/29	201505	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	93,563	31,200	46,781	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/17	201505	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	93,563	0	46,781	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/17	201505	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	358,656	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/05/29	201505	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	358,656	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/07/01	201506	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/07/01	201506	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/07/31	201507	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2015/07/31	201507	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/01	201508	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/09/01	201508	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/30	201509	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/09/30	201509	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/10/30	201510	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/10/30	201510	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/11/30	201511	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2015/11/30	201511	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/30	201512	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2015/12/30	201512	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/06/07	201601	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	5,643	0	2,822	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/01/29	201601	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/06/07	201601	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	21,635	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/01/29	201601	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/06/04	201602	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,719	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/02/26	201602	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,543	0	36,272	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/02/26	201602	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	278,085	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/06/04	201602	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,093	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/04/01	201603	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/04/01	201603	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/04/29	201604	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/04/29	201604	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/05/26	201605	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	404,585	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/05/26	201605	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	105,543	35,200	52,772	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2016/06/29	201606	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	362,610	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/06/29	201606	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	94,593	31,600	47,297	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/07/29	201607	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	79,107	0	39,553	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/07/29	201607	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	303,240	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/08/30	201608	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/08/30	201608	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/09/29	201609	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/09/29	201609	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/10/28	201610	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/10/28	201610	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/11/30	201611	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2016/11/30	201611	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/12/29	201612	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2016/12/29	201612	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/02/01	201701	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/06/04	201701	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,476	0	41,736	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/02/01	201701	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/06/04	201701	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	319,988	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/02/28	201702	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/06/04	201702	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,476	0	41,736	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/06/04	201702	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	319,988	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/02/28	201702	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/04/03	201703	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/11/16	201703	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	5,288	0	2,644	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/11/16	201703	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	20,268	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2017/04/03	201703	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/11/16	201704	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	20,268	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/05/02	201704	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	299,718	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/11/16	201704	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	5,288	0	2,644	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/05/02	201704	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	78,188	0	39,094	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/06/01	201705	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	404,657	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/06/01	201705	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	105,562	35,200	52,781	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/11/16	201705	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	7,126	2,400	3,563	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/11/16	201705	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	27,311	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/06/30	201706	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	319,986	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/06/30	201706	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,476	0	41,738	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/07/31	201707	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,476	0	41,738	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/07/31	201707	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	319,986	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/08/31	201708	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	5,569	0	2,784	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/08/31	201708	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	77,907	0	38,953	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/08/31	201708	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	298,640	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/08/31	201708	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	21,347	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/10/02	201709	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,476	0	41,738	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/10/02	201709	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	319,986	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/10/31	201710	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,476	0	41,738	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/10/31	201710	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	319,986	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/12/01	201711	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	36,169	0	18,084	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/12/01	201711	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	181,340	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/12/01	201711	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	138,647	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/12/01	201711	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	47,307	0	23,653	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2017/12/28	201712	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	277,293	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/12/28	201712	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	42,693	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2017/12/28	201712	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	72,338	0	36,169	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2017/12/28	201712	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	11,138	0	5,569	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/01/30	201801	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	319,986	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/01/30	201801	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,476	0	41,738	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/02/28	201802	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	75,131	0	37,566	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/02/28	201802	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	7,426	0	3,713	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/02/28	201802	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	28,461	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/02/28	201802	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	288,003	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/03/28	201803	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/03/28	201803	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/04/30	201804	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/04/30	201804	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/05/31	201805	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	118,426	39,600	59,213	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/05/31	201805	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	453,961	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/06/29	201806	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/06/29	201806	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/07/30	201807	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/07/30	201807	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/08/31	201808	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/08/31	201808	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/09/28	201809	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/09/28	201809	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/10/31	201810	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2018/10/31	201810	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/11/28	201811	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/11/28	201811	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/12/27	201812	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	46,781	0	23,391	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/12/27	201812	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	40,931	0	20,466	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2018/12/27	201812	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	157,003	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2018/12/27	201812	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	179,328	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/01/31	201901	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	235,391	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/01/31	201901	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	61,406	0	30,703	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/01/31	201901	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	100,911	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/09/05	201901	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	15,166	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/09/05	201901	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	3,956	0	1,978	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/01/31	201901	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	26,326	0	13,163	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/09/05	201902	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	3,676	0	1,838	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/09/05	201902	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	14,086	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/02/28	201902	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	37,375	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/02/28	201902	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	76,013	0	38,006	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/02/28	201902	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	291,481	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/02/28	201902	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	9,750	0	4,875	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/09/05	201903	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	3,956	0	1,978	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/04/01	201903	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/09/05	201903	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	15,166	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/04/01	201903	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/09/05	201904	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	3,956	0	1,978	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/09/05	201904	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	15,166	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2019/05/02	201904	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	87,713	0	43,856	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/05/02	201904	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	336,231	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/09/05	201905	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	5,326	1,800	2,663	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/06/04	201905	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	453,961	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/09/05	201905	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	20,411	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/06/04	201905	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	118,426	39,600	59,213	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/06/28	201906	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/06/28	201906	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/07/31	201907	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/07/31	201907	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/09/02	201908	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/09/02	201908	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/10/01	201909	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/10/01	201909	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/10/30	201910	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/10/30	201910	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/12/02	201911	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2019/12/02	201911	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/12/30	201912	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2019/12/30	201912	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/04/14	202001	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	4,687	0	2,344	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/02/03	202001	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	351,397	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/02/03	202001	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	91,669	0	45,834	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/04/14	202001	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	17,969	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/03/02	202002	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	6,113	0	3,056	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2020/03/02	202002	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	23,431	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/03/02	202002	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	327,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/03/02	202002	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	85,556	0	42,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/04/14	202002	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	19,191	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/04/14	202002	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	5,006	0	2,503	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/03/30	202003	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/03/30	202003	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/05/04	202004	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/05/04	202004	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/06/01	202005	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	498,669	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/06/01	202005	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	130,087	43,400	65,044	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/07/01	202006	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/07/01	202006	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/08/03	202007	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/08/03	202007	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/09/01	202008	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	209,300	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/09/01	202008	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	160,066	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/09/01	202008	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	41,756	0	20,878	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/09/01	202008	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	54,600	0	27,300	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/10/02	202009	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	320,131	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/10/02	202009	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	49,334	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/10/02	202009	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	12,844	0	6,422	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/10/02	202009	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	83,513	0	41,756	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/11/04	202010	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/11/04	202010	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2020/11/30	202011	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2020/11/30	202011	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/12/29	202012	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2020/12/29	202012	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/02/03	202101	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/02/03	202101	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202101	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	2,513	0	1,256	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202101	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9,631	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/03/01	202102	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,356	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202102	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9,631	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/13	202102	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	2,513	0	1,256	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/03/01	202102	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,366	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/13	202103	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9,631	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/13	202103	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	2,513	0	1,256	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/04/05	202103	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,357	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/04/05	202103	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,365	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/05/03	202104	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,357	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/05/03	202104	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,365	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/13	202104	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9,631	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/13	202104	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	2,513	0	1,256	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/06/01	202105	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	498,668	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/06/01	202105	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	130,088	43,400	65,044	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202105	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	12,019	4,000	6,009	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202105	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	46,072	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/07/01	202106	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	126,713	42,600	63,356	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2021/07/01	202106	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	485,731	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/13	202106	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	263	0	131	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202106	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	1,006	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/13	202107	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	750	200	375	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202107	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	2,875	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/08/02	202107	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	459,956	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/08/02	202107	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	119,963	40,200	59,981	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/08/31	202108	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	96,357	0	48,178	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202108	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	2,513	0	1,256	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/10/13	202108	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	9,631	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/08/31	202108	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	369,365	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/10/05	202109	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	378,997	0	0	0	0	74	0	309	Pen. Obli. Conservador
2021/10/05	202109	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	98,869	0	49,434	0	0	0	32	Pen. Obli. Moderado
2021/11/03	202110	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	98,869	0	49,434	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/11/03	202110	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	378,997	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/12/02	202111	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	378,997	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2021/12/02	202111	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	98,869	0	49,434	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/12/29	202112	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	98,869	0	49,434	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2021/12/29	202112	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	378,997	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/02/02	202201	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	98,869	0	49,434	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/05/16	202201	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	7,182	0	3,591	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/05/16	202201	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	27,527	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/02/02	202201	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	378,997	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/05/16	202202	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	7,182	0	3,591	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/05/16	202202	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	27,527	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2022/03/02	202202	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	378,997	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/03/02	202202	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	98,869	0	49,434	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/05/16	202203	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	27,527	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/04/01	202203	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	98,869	0	49,434	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/04/01	202203	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	378,997	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/05/16	202203	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	7,182	0	3,591	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/04/28	202204	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/04/28	202204	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/05/31	202205	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	548,837	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/05/31	202205	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	143,175	47,800	71,588	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/06/30	202206	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/06/30	202206	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/08/01	202207	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/08/01	202207	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/09/02	202208	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/09/02	202208	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/10/03	202209	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/10/03	202209	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/11/03	202210	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	53	Pen. Obli. Moderado
2022/11/03	202210	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	511	Pen. Obli. Conservador
2022/12/02	202211	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2022/12/02	202211	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/12/29	202212	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2022/12/29	202212	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/02/02	202301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	77,775	0	38,888	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2023/02/02	202301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	28,275	0	14,138	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/10/12	202301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	15,506	0	7,753	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/02/02	202301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	298,137	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/10/12	202301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	59,441	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/02/02	202301	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	108,487	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/10/17	202302	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	59,441	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/03/01	202302	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/03/01	202302	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/10/17	202302	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	15,506	0	7,753	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/11/14	202303	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	59,441	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/04/03	202303	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	106,051	0	53,025	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/11/14	202303	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	15,506	0	7,753	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/04/03	202303	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	406,524	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/12/11	202304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	59,441	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/05/02	202304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	13,584	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/12/11	202304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	15,506	0	7,753	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/05/02	202304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	393,041	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/05/02	202304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	102,506	0	51,253	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/05/02	202304	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	3,544	0	1,772	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/12/15	202305	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	80,212	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/06/01	202305	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	143,175	47,800	71,588	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/06/01	202305	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	548,837	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/12/15	202305	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	20,925	7,000	10,463	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/07/04	202306	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/07/04	202306	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Fecha Movimiento	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Fondo
2023/08/02	202307	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/08/02	202307	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/09/04	202308	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/09/04	202308	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/10/02	202309	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/10/02	202309	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/11/02	202310	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/11/02	202310	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2023/12/01	202311	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2023/12/01	202311	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2024/01/03	202312	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2024/01/03	202312	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2024/02/01	202401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	89,138	0	44,569	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2024/02/01	202401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	124,273	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2024/02/01	202401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	32,418	0	16,209	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado
2024/02/01	202401	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	341,693	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2024/03/01	202402	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	465,966	0	0	0	0	0	0	0	Pen. Obli. Conservador
2024/03/01	202402	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	121,556	0	60,778	0	0	0	0	Pen. Obli. Moderado

Saldo actual de la cuenta

Fecha de Generación	Saldo Obligatorio	Saldo Voluntario Empleador	Saldo Voluntario Afiliado
15/03/2024	182,840,700	6,773	0

USUARIO: PVLFLOREZG01

LAURA
XIMENA
FLOREZ
GONZALEZ

14 de Marzo de 2024

[Registrar
servicio](#)

Buscar en Wiki SIAFP



A partir del 01 de noviembre, se encuentra disponible en la página del SIAFP el Servicio de Atención al Empleador - SAE, para atender las reclamaciones de los empleadores.

• Afiliados • Personas • Aportantes • Pagos • Entrega HL al RPM • Documentación • Usuarios • Administrador de Tareas

Consulta de viabilidad

Hora de la Consulta : 1:58:07 PM

Los resultados obtenidos de la consulta son:

Identificación :	CC 64516673
Apellidos :	SILGADO TAPIAS
Nombres :	CARMEN YADIRA
Certificado por :	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Fecha de certificación :	2022/10/10
Código de vigencia :	00 VIGENTE
Novedad de respuesta :	015 Afiliado a la misma AFP
Lugar de expedición :	SAN ONOFRE
Fecha de expedición :	1981/02/17
Género :	F
Fecha de nacimiento :	1959/06/13
Edad :	64
Indicador fecha de nacimiento verificada :	Si
Nacionalidad :	
Fecha de traslado al RPM :	
Entidad del RPM :	
Entidad certificadora fecha de nacimiento :	ANI

Los cálculos sobre la viabilidad del traslado por edad, los cuales hacen referencia con que al afiliado le falten diez o menos años para pensionarse se realizaron con la fecha certificada en Siafp

[Imprimir](#)[Regresar](#)

A partir del 01 de noviembre, se encuentra disponible en la página del SIAFP el Servicio de Atención al Empleador - SAE, para atender las reclamaciones de los empleadores.

[Afiliados](#) [Personas](#) [Aportantes](#) [Pagos](#) [Entrega HL al RPM](#) [Documentación](#) [Usuarios](#) [Administrador de Tareas](#)

Historial de vinculaciones

Hora de la consulta : 1:58:34 PM
Afiliado: CC 64516673 CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS [Ver detalle](#)

Afiliado presenta vinculaciones eliminadas Afiliado presenta vinculaciones inválidas

Vinculaciones para : CC 64516673							
Tipo de vinculación	Fecha de solicitud	Fecha de proceso	AFP destino	AFP origen	AFP origen antes de reconstrucción	Fecha inicio de efectividad	Fecha fin de efectividad
Traslado regimen	1994-08-19	2010/04/09	COLFONDOS	COLPENSIONES		1994-09-01	1999-06-30
Traslado de AFP	1999-05-31	2010/04/09	COLPATRIA	COLFONDOS		1999-07-01	2000-09-28
Cesion por fusión	2000-09-29	2013/10/04	HORIZONTE	COLPATRIA		2000-09-29	2013-12-31
Cesion por fusión	2014-01-01	2013/12/28	PORVENIR	HORIZONTE		2014-01-01	

4 registros encontrados, visualizando todos registros.
1

Vinculaciones migradas de Mareigua para: CC 64516673						
Fecha de novedad	Fecha de proceso	Código de novedad	Descripción	AFP	AFP involucrada	
1994-08-19	1996-06-13	01	AFILIACION	COLFONDOS		
1999-05-31	1999-06-10	79	TRASLADO AUTOMATICO	COLPATRIA	COLFONDOS	
2000-09-29	2000-09-29	30	CESION	COLPATRIA	HORIZONTE	

3 registros encontrados, visualizando todos registros.
1

SOLICITADO POR

FECHA Y HORA

ENTIDAD

mhomunza 172.27.6.1

19/03/2024 09:49:56

SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - OFICINA DE BONOS PENSIONALES LIQUIDACION



LA NACION NO PARTICIPA EN EL BONO PENSIONAL

DATOS AFILIADO

Documento	C 64516673	Género	FEMENINO	Fecha Nacimiento (DD/MM/AAAA)	13/06/1959
AFP Solicitante	PORVENIR	Tipo Bono-Modalidad/Versión	A /1	AFP Afiliado	PORVENIR (3)
Fecha Afiliación RAI (DD/MM/AAAA)	19/08/1994	Fecha Selección Régimen (DD/MM/AAAA)	20/08/1994		

ORIGEN DE NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
Solicitud	SILGADO	TAPIAS	CARMEN	YADIRA
Documento Alterno No.				

DATOS SOLICITUD

Fecha Última Solicitud (DD/MM/AAAA)	27/02/2024	Consecutivo	34	Número Liquidación	33	Fecha Proceso (DD/MM/AAAA)	27/02/2024	Tipo Solicitud	Liquidación
Medio Recepción	Archivo			Solicitado por	MARIA ROCIO CORTES				
Cargo		Teléfono	3393000 EXT.75421	Archivo	SA03316620240227.003166			Registro	12165
Motivo reproceso									
Archivo Respuesta	RAOA0320240227.003166			Fecha Respuesta (DD/MM/AAAA)		27/02/2024			

HISTORIA LABORAL



HISTORIA NO VALIDA PARA BONO

HISTORIA LABORAL MASIVO ISS/COLPENSIONES POSTERIOR A 1994

NIT/PATRONAL	NIT: 800215809				NOMBRE EMPLEADOR	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
--------------	----------------	--	--	--	------------------	--------------------------	--

Novedad	Fecha Desde	Fecha Hasta	SS	IVM	Salario	Errores/Observaciones
LABORAL	18/12/1995	31/12/1995	S	S	\$ 135,436	3081,3032,3830,3830.

NIT/PATRONAL	NIT: 800215807				NOMBRE EMPLEADOR	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
--------------	----------------	--	--	--	------------------	----------------------------	--

Novedad	Fecha Desde	Fecha Hasta	SS	IVM	Salario	Errores/Observaciones
LABORAL	01/02/2007	28/02/2007	S	S	\$ 778,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/03/2007	31/03/2007	S	S	\$ 813,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/04/2007	30/04/2007	S	S	\$ 948,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/05/2007	31/05/2007	S	S	\$ 1,219,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/06/2007	29/02/2008	S	S	\$ 813,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/03/2008	30/04/2008	S	S	\$ 859,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/05/2008	31/05/2008	S	S	\$ 1,289,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/06/2008	30/06/2008	S	S	\$ 859,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/07/2008	31/07/2008	S	S	\$ 1,139,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/08/2008	31/08/2008	S	S	\$ 859,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/09/2008	31/10/2008	S	S	\$ 1,106,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/11/2008	30/11/2008	S	S	\$ 1,081,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/12/2008	31/01/2009	S	S	\$ 1,106,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/02/2009	28/02/2009	S	S	\$ 941,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/03/2009	31/03/2009	S	S	\$ 1,240,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/04/2009	30/04/2009	S	S	\$ 1,191,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/05/2009	31/05/2009	S	S	\$ 1,590,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/06/2009	31/07/2009	S	S	\$ 1,191,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/08/2009	31/08/2009	S	S	\$ 1,031,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/09/2009	30/09/2009	S	S	\$ 1,280,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/10/2009	31/10/2009	S	S	\$ 1,175,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/11/2009	30/11/2009	S	S	\$ 1,040,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/12/2009	31/12/2009	S	S	\$ 1,230,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/01/2010	31/01/2010	S	S	\$ 1,191,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/02/2010	28/02/2010	S	S	\$ 1,167,000	3081,3032,3830,3830.

LABORAL	01/03/2010	30/04/2010	S	S	\$ 1,191,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/05/2010	31/05/2010	S	S	\$ 1,687,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/06/2010	30/06/2010	S	S	\$ 1,010,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/07/2010	31/08/2010	S	S	\$ 1,191,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/09/2010	30/09/2010	S	S	\$ 1,151,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/10/2010	31/10/2010	S	S	\$ 1,215,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/11/2010	30/11/2010	S	S	\$ 1,188,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/12/2010	31/12/2010	S	S	\$ 1,213,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/01/2011	31/01/2011	S	S	\$ 1,215,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/02/2011	28/02/2011	S	S	\$ 1,133,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/03/2011	31/03/2011	S	S	\$ 1,296,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/04/2011	30/04/2011	S	S	\$ 1,208,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/05/2011	31/05/2011	S	S	\$ 1,692,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/06/2011	30/06/2011	S	S	\$ 973,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/07/2011	31/07/2011	S	S	\$ 1,021,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/08/2011	31/08/2011	S	S	\$ 975,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/10/2011	31/10/2011	S	S	\$ 973,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/12/2011	31/12/2011	S	S	\$ 973,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/03/2012	31/03/2012	S	S	\$ 973,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/05/2012	31/05/2012	S	S	\$ 1,868,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/06/2012	30/06/2012	S	S	\$ 1,702,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/07/2012	31/07/2012	S	S	\$ 1,328,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/09/2012	31/12/2012	S	S	\$ 1,245,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/07/2013	31/12/2013	S	S	\$ 1,288,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/01/2014	31/01/2014	S	S	\$ 1,772,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/02/2014	28/02/2014	S	S	\$ 1,803,000	3081,3032,3830,3830.
LABORAL	01/04/2014	30/04/2014	S	S	\$ 1,803,000	3081,3032,3830,3830.

REPORTADO POR CETIL

NIT/PATRONAL		NIT: 899999067				NOMBRE EMPLEADOR	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Novedad	Fecha Desde	Fecha Hasta	SS	IVM	Salario	Errores/Observaciones	
LABORAL	04/10/1988	02/04/1991	S	N	\$ 0	3618, 130.14 semanas.	
CAMBIO SALARIO	02/04/1991			N	\$ 111,281	3776,	

CONVENCIONES DE ERRORES/OBSERVACIONES

ERROR/OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN
3032	ERROR:EL AFILIADO NO EXISTE EN TABLA DE AFILIADOS REPORTADA POR EL ISS/COLPENSIONES. SOLUCION: LA AFP DEBE REPORTAR LA INCONSISTENCIA AL ISS/COLPENSIONES
3081	OBSERVACION: HISTORIA REPORTADA POR COLPENSIONES INDICANDO QUE YA REALIZO LA DEVOLUCION DE APORTES. NO ES VALIDA PARA BONO
3618	INCONSISTENCIA: HISTORIA LABORAL CON APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL NO CUMPLE CON EL MINIMO DE SEMANAS REQUERIDAS 150.
3776	OBSERVACIÓN: LA NOVEDAD LABORAL QUE SOPORTA EL SALARIO ES INVALIDA. SOLUCIÓN: LA AFP DEBE VERIFICAR EL MENSAJE QUE PRESENTA LA VINCULACION QUE SOPORTA EL SALARIO
3830	OBSERVACIÓN: NOVEDAD DE HISTORIA LABORAL ISS/COLPENSIONES O NO ISS/COLPENSIONES POSTERIOR A LA FECHA DE CORTE NO SE TIENE EN CUENTA PARA BONO PENSIONAL .

INFORMACION PRESTACIONES ISS/COLPENSIONES

DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	ORIGEN INFORMACION	TIPO SEGURO	NUMERO AFILIACION ISS	EXCLUIDO ISS/COLPENSIONES	FECHA INGRESO NOMINA ISS/COLPENSIONES
INDICIOS PRESTACIONES. LA INFORMACION REGISTRADA COMO INDICIO NO ESTA CERTIFICADA POR LA ENTIDAD PENSIONANTE. ESTA INFORMACION DEBE SER CONFIRMADA Y VERIFICADA POR LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES QUE CONSULTAN LA APLICACION DE BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECTAMENTE CON LA ENTIDAD PENSIONANTE O LA FUENTE DE INFORMACION.									

DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	ORIGEN INFORMACION
INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN CERTIFICADA POR LA AFP					
DOCUMENTO	NIT PENSIONANTE	NOMBRE PENSIONANTE	TIPO PRESTACIÓN	FECHA PRESTACIÓN (DD/MM/AAAA)	CERTIF

LIQUIDACION BONO

Tipo Bono	A	Modalidad		Versión	1
Fecha Base (DD/MM/AAAA)		Tiempo Válido Para Bono (sin traslajos)	0(días) , 0(semanas)	Tiempo Total Trabajado	0
Salario Base	\$0	Empleadores Salario Base			

Fecha Corte (DD/MM/AAAA)	20/08/1994	Fecha Redención Normal (DD/MM/AAAA)	13/06/2019	Tasa Interés (%)	4.0
Fecha Siniestro(DD/MM/AAAA)		Causal Redención			
Valor Bruto A F.C.	\$0	Valor Emi, Reco o Red en Versión Ant. a F.C.		Valor Neto Versión A F.C.	\$0
Valor Cupones Emitidos por la Nación a F.E.	\$0				

CUOTAS PARTES

TIPO	NIT / NOMBRE	ESTADO CUPON	DIAS A CARGO	VALOR BRUTO CUPON	VALOR CUPON VERSION ANTERIOR	VALOR FECHA CORTE	PORCENTAJE	VALOR EMISION	VALOR REDENCION	VALOR NETO PAGADO	REINTEGRO A F. PAGO
TOTALES						0		0	0	0	0

[HISTORIA LABORAL CUOTA PARTE](#)

[HISTORIA LABORAL SIN TRASLAPOS](#)

[DETALLE CALCULO](#)

[MOSTRAR ENTIDADES ASUMIDAS](#)



Señores
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.
E. S. D.

Referencia: Solicitud traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida.

Afiliada: Carmen Yadira Silgado Tapias-C.C. No. 64.516.673

LUIS ANTONIO FUENTES ARREDONDO identificado con la **Cédula de Ciudadanía No. 84.084.606** expedida en Riohacha, y portador de la T.P. No. 218.191 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección electrónica para notificaciones: luisfuentes1614@gmail.com, en mi condición de apoderado de la señora **CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS**, identificada con C.C. No. 64.516.673 expedida en San Onofre-Sucre, quien es perjudicada directa, concuro a esta entidad con el fin de solicitar el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida conforme los siguientes:

HECHOS

1. La señora **CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS**, nació el día 13 de junio de 1959.
2. En la actualidad cuenta con 63 años.
3. La señora **CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS** empezó a cotizar al régimen de prima media con prestación definida desde el año de 1976.
4. Los aportes para riesgos de I.V.M. antes de entrar en vigencia los fondos de pensiones privados fueron girados al régimen de prima media con prestación definida administrados por el Estado.
5. En este momento, mi poderdante no ha podido radicar los documentos para el estudio de la pensión justa ante **COLPENSIONES**, por encontrarse afiliada a **PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS**. Sin ningún fundamento legal y jurídico. A causa de la mala información brindada por los asesores de los fondos privados.
6. Por la información obtenida es claro que el consentimiento estuvo viciado por falta de información, y no pago al sistema individual de pensiones, y sobre las consecuencias adversas que traería su afiliación a **PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS**.
7. Así las cosas, **PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, está perjudicando enormemente a mi poderdante por haber aceptado el traslado a dicho fondo pensional, Toda vez que los ofrecimientos económicos nunca llegaron por la aplicación indebida de la norma jurídica.

8. Que al hacer los respectivos cálculos actuariales de la pensión ante los dos fondos de pensiones es claro que le favorece más el brindado por **COLPENSIONES**. Por ajustarse más a la realidad de mi salario devengado
9. En este momento mi poderdante se encuentra desprotegida toda vez que con esa actitud de **PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS.**, no obtendrá una pensión sobre su salario real. **TODA VEZ QUE** nunca le proporcionaron una información completa y comprensible sobre una elección de régimen pensional, a fin de ilustrarla en las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, en los dos regímenes pensionales existentes en nuestro país.
10. Así las cosas, ruego a **PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, hacer un análisis del caso en concreto teniendo en cuenta la fecha inicial en la que mi poderdante empezó a laborar y acceder al traslado de los aportes de mi poderdante del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación administrado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES**. La cual se debe consultar con **ASOFONDOS** sobre la vulneración de los derechos pensionales adquiridos e irrenunciables.

OMISIONES

Omitió **PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, dar una información clara, eficaz, transparente, honesta y necesaria para determinar los efectos que generaría el traslado de régimen pensional.

PETICIÓN ESPECIAL

1. **SE DECLARE** que el traslado que la señora **CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS** hizo o efectuó del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida administrado por el extinto ISS (hoy **COLPENSIONES**), al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la **AFP PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**, es NULO, INEFICAZ Y POR LO TANTO INEXISTENTE, por cuanto no hubo por parte del fondo de pensiones **PORVENIR** una información clara, eficaz, transparente, honesta y necesaria para determinar los efectos que esto generaría.
2. **SE DECLARE** que la señora **CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS**, al momento del traslado del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los agentes o promotores de **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, nunca le proporcionaron una información completa y comprensible sobre las consecuencias de elección de régimen pensional, a fin de ilustrarlo en las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, en los dos regímenes pensionales existentes en nuestro país.
3. Conforme lo anterior, se realice por parte de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, el traslado a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, la totalidad de lo ahorrado por la

demandante en su cuenta de ahorro individual, como lo son cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales a la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el Art. 1746 del Código Civil, esto es con los rendimientos que se hubieren generado.

DESCONOCIO:

- 1 La fecha de ingreso a laborar.
- 2 Que los contratos son de mutuo acuerdo y de libre disposición. Es decir:

Para que un contrato sea válido de reunir los siguientes requisitos según lo preceptuado por el artículo 1502 del código civil:

- a. Que las partes contratantes sean legalmente capaces.
- b. Que se exprese el consentimiento y este sea exento de todo vicio, los vicios del consentimiento son error, fuerza y dolo.
- c. Que el objeto del contrato sea lícito, es decir que el fin perseguido sea permitido por las normas.
- d. Y por último causa lícita que no es más, motivo que impulsa a las partes a suscribir un contrato.

El **error** es el falso conocimiento. Es la concepción no acorde con la realidad. Llega a causar la nulidad del acto (C. C.). Consiste en creer verdadero lo que es falso o en creer falso lo que es verdadero.

Que no se dio cumplimiento al decreto 1161 de 1994, artículo 3 inciso 6. Es decir: Cuando las administradoras efectúen procesos de promoción, deberán informar de manera clara y por escrito a los potenciales afiliados el derecho a **retractarse** de que trata el presente artículo.

De igual forma invoco como fundamento de la presente solicitud las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia:

ACERCA DE LA PORVENIR EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, CUANDO QUIERA QUE ESTOS SEAN AMENAZADOS O VULNERADOS POR LA ACCIÓN U OMISIÓN DE UNA AUTORIDAD (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad No. 57444, sentencia del 18 de marzo del 2020 MP Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO)

Debe insistir la Corte en que los funcionarios judiciales de la jurisdicción ordinaria están obligados a seguir la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia. Así lo imponen no solo razones de seguridad jurídica, buena fe, certeza y previsibilidad en la aplicación del derecho, sino también el derecho a la igualdad de trato, en cuya virtud los casos semejantes sometidos a consideración de los jueces deben resolverse del mismo modo a como lo definieron los máximos órganos de cierre de cada jurisdicción.

Es normal que los jueces puedan disentir de los criterios judiciales de sus superiores; sin embargo, ello no los autoriza a desatender las construcciones jurisprudenciales

trazadas por los órganos encargados por la Constitución de fijar, con carácter general, el sentido de los grandes dilemas jurídicos que suscita el Derecho en cada área. Si las percepciones, convicciones o divergencias de los juzgadores frente a una cuestión jurídica no pueden canalizarse a través de sólidos y persuasivos argumentos, estructurados acordes con la dimensión social de la Constitución Política de 1991, no es válido apartarse del precedente sentado por las Altas Cortes.

Cabe señalar que en este asunto las reflexiones del Tribunal no solo entran en conflicto con la jurisprudencia de esta Corte; también tienen un sentido contrario a los fines, principios y derechos reconocidos por la Constitución Política, en la medida en que bajo una aproximación de la culpa personal del afiliado, pretenden endilgarle a este la responsabilidad por el eventual menoscabo de su derecho pensional sin recabar en las obligaciones de los interlocutores que se encuentran en una posición más fuerte. Con tal raciocinio, los juzgadores olvidan que la legislación del trabajo y de la seguridad social, tiene un carácter fundamentalmente tuitivo de los trabajadores y afiliados; por tanto, antes que ser un ordenamiento represor o sancionatorio, procura proteger a los asociados, garantizándoles condiciones de vida justas.

ACERCA DEL TRASLADO DEL REGIMEN EN CUALQUIER TIEMPO (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Rad No.68852, sentencia del 03 de abril de 2019, MP Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO)

La Corte Suprema, mediante la Sentencia SL1452 del pasado 3 de abril de 2019, nos da la razón en el sentido de que hubo un engaño en el traslado de muchas personas del Sistema de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el ISS (hoy Colpensiones), a los Fondos Privados, ya que el criterio de libertad de escogencia se puede hacer efectivo en cualquier momento, y que no es necesario que la persona esté en el régimen de transición, para gozar de la pensión bajo el régimen de prima media con prestación definida.

Igualmente compartimos la Sentencia SL1452 del pasado 3 de abril de 2019, publicitada recientemente, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, establece el derecho a la libertad de traslado del régimen privado, en este caso, el fondo PORVENIR, al Régimen público, hoy Colpensiones, resolviendo desconocimientos, trabas y argucias jurídicas que los fondos privados de pensiones y sus administradoras exponen para detener la salida de los afiliados cotizantes que se dan cuenta del engaño sufrido en estos fondos.

No desdice la anterior conclusión, lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que "se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones", pues lo que se echa de menos es la falta información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña."

Conforme lo anterior es claro que debe mi prohijada regresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, por los vicios del contrato de traslado firmado con **PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS S.A.**



PRUEBAS

- a) Fotocopia de la cedula de ciudadanía.
- b) Poder legalmente conferido para actuar
- c) Copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la carrera 5 No 16-14 oficina 902 en la ciudad de Bogotá D.C. Tel. 5602066-3172419899.

Correo electrónico: luisfuentes1614@gmail.com

Atentamente,

LUIS ANTONIO FUENTES ARREDONDO.

C.C. No. 84.084.606 expedida en Riohacha La Guajira.

T.P. No. 218.191 del Consejo Superior de la Judicatura

ASOPENSIONES

104

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

Señor:

LUIS ANTONIO FUENTES ARREDONDO

Apoderado

luisfuentes1614@gmail.com

Ref. Rad. Porvenir: 0100222112988900
Afiliada: CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS
CC: 64516673
TN: 11330061
COR

Señor Fuentes, reciba un saludo cordial

En esta oportunidad damos respuesta a su comunicación radicada con el número citado en la referencia, en los siguientes términos:

A su petición Principal consistente en: “Se sirvan autorizar el traslado de mi representado de AFP PORVENIR (Sic) a la cual se encuentra la afiliada, con destino a COLPENSIONES administradora del Régimen de Prima Media con prestación Definida.”

Le manifestamos que Porvenir S.A. procederá al traslado de la totalidad de los dineros obrantes en la cuenta individual de ahorro pensional, (aportes pensionales más rendimientos financieros) una vez la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, notifique a Porvenir S.A. sobre la reactivación de la vinculación, a través de la herramienta tecnológica, “Mantis” o el medio que esa entidad disponga para el efecto.

Para tal fin, y con fundamento en la presente comunicación, le rogamos acudir a Colpensiones para adelantar los trámites pertinentes de reactivación de su vinculación.¹

FUNDAMENTOS DE ESTA DECISIÓN:

Las gestiones que antecedieron la afiliación fueron realizadas por Porvenir S.A. atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, y sus Decretos reglamentarios, veamos:

Al tenor de lo dispuesto en el literal b. del artículo 13 de la citada ley, la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, “Prima Media con Prestación Definida o Ahorro

¹ Decreto 19 de 2012, artículo 8º. **Prohibición de exigir actuación judicial previa para la decisión administrativa.** Se prohíbe exigir como requisito previo para obtener una decisión administrativa la interposición de una acción judicial y la presentación de la copia de la providencia que ordene el reconocimiento o adjudicación de un derecho.

Individual con Solidaridad” es libre y voluntaria por parte de la afiliada, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado.

En el mismo sentido, el artículo 6º del Decreto 228 de 1992 consagra que la elección de entidad Administradora de Fondos de Pensiones, se realiza mediante el diligenciamiento del formulario por parte de la afiliada frente al empleador o frente a la Administradora de Fondos de Pensiones.

Para el caso del traslado de régimen pensional, el artículo 15 del Decreto 692 de 1994, señala que se realizará mediante el diligenciamiento del formulario³

De las normas anteriores resulta de especial relevancia destacar entre otros los siguientes aspectos:

Las solicitudes de afiliación de quienes cumplían requisitos para seleccionar el RAIS no podían ser rechazadas.

La selección del régimen implicaba la aceptación de las condiciones propias (requisitos y prestaciones).

El formulario de afiliación era definido por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia.

Cuando el afiliado se traslade por primera vez del RPM al RAIS, en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones.

El formulario puede contener la leyenda preimpresa en este sentido.

Verificado el formulario de afiliación, se observa que fue suscrito de manera “libre voluntaria y sin presiones” como allí expresamente lo dejó consignado, cumpliendo de esta manera con los requisitos y procedimientos establecidos para su validez. En punto, merece la pena señalar que el referido formulario reúne las características de un contrato de adhesión⁴ cuyos derechos y obligaciones para cada una de las partes comprometidas en el acto o contrato, fueron previstas por el legislador en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, que son de público y amplio conocimiento y que no son objeto de negociación por los actores del Sistema General de Pensiones (Afiliados, Empleadores y Entidades Administradoras de Pensiones, entre otros), todo lo cual da cuenta que, Porvenir S.A. no vulneró o impidió el derecho de elección de régimen pensional o incumplió sus deberes en el proceso de vinculación, sino por el contrario dio aplicación estricta a las normas que se encontraban vigentes para el momento del traslado.

² Incorporado al Decreto Único Reglamentario del Sector Pensiones, 1833 de 2016, artículo 2.2.2.1.9.

³ Incorporado al Decreto Único Reglamentario del Sector Pensiones, 1833 de 2016. artículo 2.2.2.3.1

⁴ Ley 1328 de 2009, artículo 2º, literal f. **Contratos de adhesión:** Son los contratos elaborados unilateralmente por la entidad vigilada y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y previamente por los clientes, limitándose estos a expresar su aceptación o a rechazarlos en su integridad

En desarrollo del contrato de afiliación, la afiliada cumplió con una de sus principales obligaciones, consistente en el pago oportuno de sus aportaciones, lo que ratificó su voluntad de elección de régimen pensional y su ánimo de permanencia⁵. Por su parte Porvenir S.A. ha cumplido con las obligaciones a su cargo⁶ debiendo destacar la debida y adecuada administración de los aportes pensionales por valor de **\$61.238.435**, generando durante su permanencia rentabilidades por valor de **\$87.648.170**, (monto sujeto a variación por efecto de las fluctuaciones de los mercados de capitales), así como la cobertura de los riesgos de vejez, invalidez y muerte, estos dos últimos amparados por la póliza de seguro previsional contratada con Seguros de Vida Alfa S.A.



En lo que hace a las condiciones para retornar al régimen de prima media, es importante recordar que al momento de la solicitud de traslado de régimen pensional realizado en **agosto 1994**, no se encontraba prevista la restricción a la movilidad entre regímenes para los afiliados que estuvieran a diez (10) o menos años de cumplir la edad de pensión de vejez, pues dicha restricción fue impuesta por el legislador en el año 2003, con la expedición de la Ley 797, todo lo cual, hacía imposible para esta administradora suministrar asesoría en dicho sentido.

No obstante, y a pesar de que la ley es de público conocimiento, Porvenir S.A y en general las entidades administradoras de fondos de pensiones, informaron a sus afiliados las nuevas condiciones dispuestas legalmente para ejercer la opción de traslado de régimen pensional, cumpliendo de esta manera con su deber de información y atendiendo a las instrucciones impartidas por la entonces Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera⁷. Por otra parte, no puede desconocerse los deberes a

⁵ Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sentencia SL413-2018: *Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen...*

... Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado.

⁶ Decreto Ley 656 de 1994 artículo 14 y siguientes.

⁷ Circular Externa No. 001 del 8 de enero de 2004. Traslado entre regímenes pensionales de los afiliados a quienes al 28 de enero de 2004 les falte 10 años o menos para cumplir la edad que les permita tener derecho a la pensión de vejez...

cargo de los consumidores financieros y usuarios de productos y servicios⁸ contenidos entre otros en Ley 1328 de 2009 artículo 6º, literal b, Ley 1480 de 2011 artículo 3º, Ley 1748 de 2014 artículo 2 literal e. inciso segundo y de los cuales vale la pena destacar los siguientes:

“Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros.

Informarse respecto de la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo, conservación e instalación.

El afiliado podrá solicitar una proyección de su expectativa pensional a la Administradora en la que se encuentre afiliado. Para ello suministrará a la administradora respectiva la información adicional que requiera sobre su situación familiar y beneficiarios, entre otros factores necesarios para la estimación. La proyección de la expectativa pensional se calculará con base en las normas legales existentes...”

No sobra señalar que el deber de doble asesoría para determinar la conveniencia de pertenecer a uno u otro régimen pensional o el valor estimado de la mesada pensional, solamente fue instituida por el legislador en el año 2014, con la expedición de la Ley 1748, en la que se señaló:

“En desarrollo de lo anterior, las Administradoras del Sistema General de Pensiones deberán garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia.”

Adicionalmente para el momento del traslado de régimen pensional realizado en **agosto 1994** era imposible que el fondo de pensiones seleccionado determinara, cuáles serían las condiciones laborales del titular y por ende el monto posible de su pensión de vejez.

Pese a las consideraciones fácticas y jurídicas anotadas, es una realidad que La Corte Suprema de Justicia en doctrina reiterada⁹, ha manifestado que, frente a las afirmaciones efectuadas por los afiliados en el sentido de no haber recibido la asesoría necesaria, no es suficiente el formulario de afiliación, que como ya se dijo era el único requisito exigido en la ley al momento de su vinculación, sino que es necesario adicionalmente demostrar la asesoría brindada en los términos que usted requiere y que considera la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2011, aplicando de manera retroactiva la ley.

⁸ Ley 1328 de 2009, artículo 2º. **Consumidor financiero:** Es todo cliente, usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas.

⁹ Sentencia Rad. 33083 de 2011, Sentencia Rad. 462921 de 2014, Sentencia Rad. 68852 de 2019, Sentencia Rad. 1452 de 2019, Sentencia Rad. SL 731 de 2020, Sentencia Rad. SL 881 de 2020, entre otros pronunciamientos.

Al efecto en sentencia SL1574-2022 Radicado 88222 del 02 de mayo de 2022, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, señaló.

“PROCEDIMIENTO LABORAL > PRINCIPIOS > PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA > APLICACIÓN - Si se discute que la administradora de pensiones omitió brindar información veraz y suficiente en referencia a la afiliación o traslado de régimen pensional, le corresponde a ésta demostrar que cumplió con el deber de asesoría e información, puesto que invertir la carga de la prueba contra la parte débil de la relación contractual es un despropósito, cuando son las entidades financieras quienes tienen ventaja frente al afiliado inexperto”

Atendiendo sus afirmaciones, según las cuales la titular no fue debidamente asesorada al monto de solicitar el traslado de régimen pensional, encontramos procedente de una parte, dar aplicación al Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011¹⁰, el cual ofrece una alternativa que permite resolver por la vía administrativa, las diferencias originadas entre los afiliados al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad y las entidades administradoras de fondos de pensiones, incluyendo Colpensiones, y de otra, la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia y ante la ausencia de documentos probatorios en los términos que exige la misma C.S.J. consideramos, sin que por ello se entienda que inaplicamos la ley, que resulta procedente dar aplicación al principio consagrado en el inciso tercero, artículo 4º., de la mencionada ley, según el cual:

“Las normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más favorable al consumidor. En caso de duda se resolverá en favor del consumidor”¹¹

Ante la dificultad que representa controvertir las afirmaciones realizadas por la afiliada en relación con la demostración de la asesoría brindada en el proceso de afiliación, encontramos viable la aplicación de las normas del estatuto del consumidor, y por ende del principio según el cual “la duda se resuelve en favor del consumidor” dando lugar a la resolución de las controversias que se susciten entre el consumidor y el proveedor del bien o servicio, de manera favorable cuando no existan los medios de prueba necesarios y suficientes.

Para realizar sus consultas y trámites le invitamos a utilizar nuestros canales digitales o comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente marcando así:

¹⁰Artículo 2º. “son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual se aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta ley” (subrayas fuera de texto).

¹¹ Superintendencia Financiera de Colombia en concepto 2017107871- 001 del 20 de octubre de 2017

 Página Web www.porvenir.com.co Zona transaccional afiliado	 Línea de Servicio al Afiliado Bogotá 601 7447678 Cali 602 4857272 Medellín 604 6041555 Barranquilla 605 3855151 Resto del país 018000510800	 Línea de Servicio al Pensionado Bogotá 601 3906881 A nivel nacional sin costo 018000517170	 Oficinas Contamos con una red de 54 oficinas a nivel nacional
 Porvenir APP Descarga para Android en Play Store y para iOS en App Store	 Chat Porvenir www.porvenir.com.co canales de servicio Horarios de atención: lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm	 Andrea asistente virtual Chat de Facebook Messenger	 WhatsApp Porvenir 316 4091110

Si tiene la necesidad de acudir a nuestras oficinas o las sucursales aliadas, tenga presente tomar siempre las medidas de autocuidado. ^{i ii iii}

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.

JANIRE MARINA LORDUY BUSTOS

Dirección de Atención Integral a Clientes
JMLB/Lizeth R.

ⁱ No permita que un tramitador le cobre dinero, los trámites en Porvenir no tienen costo. Si tiene denuncias relacionadas con fraudes, cobros o ética de nuestros empleados, denuncie al 6017434441 Ext.77777 en Bogotá o ingresando a www.porvenir.com.co/web/acerca-de-porvenir/linea-etica.

ⁱⁱ Recuerde, su clave de internet es personal e intransferible no la comparta con nadie y cámbiela mínimo 2 veces al año así protegerá sus datos y transacciones, conozca más información en: <https://www.porvenir.com.co/web/seguridad/seguridad-en-internet>

ⁱⁱⁱ Nuestros afiliados cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Ana María Giraldo Rincón ubicado en la carrera 11 A N 96 51 oficina 203 en Bogotá, teléfono 601 6108161, correo defensoriaporvenir@legalcrc.com quien dará trámite a su queja de forma objetiva y gratuita.

104

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2023

Señor:

LUIS ANTONIO FUENTES ARREDONDO

Apoderado

luisfuentes1614@gmail.com

Ref. Rad. Porvenir: 0100222112989000

Afiliada: CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS

CC: 64516673

T.N: 11333361

COR

Señor Fuentes, reciba un saludo cordial.

De acuerdo con su solicitud en calidad de apoderada de nuestra afiliada CARMEN YADIRA SILGADO TAPIAS, relacionada con información de su cuenta individual y simulación pensional, le informamos lo siguiente:

La pensión de un fondo privado como Porvenir se calcula a partir de tres variables:

- ✓ La edad del pensionado y su grupo familiar, determinando la expectativa de vida de los beneficiarios en caso de una sustitución de pensión.
- ✓ El capital acumulado a la fecha de cálculo.
- ✓ La tasa de rentabilidad esperada del Fondo Especial de Retiro Programado a largo plazo.

La proyección pensional está basada en una suposición de que es soltero y sin hijos. Si desea una proyección pensional de acuerdo a su perfil por favor indicarnos la fecha de nacimiento de su conyugue y la de su hijo menor de 25 años.

A la fecha presenta en su cuenta individual del Fondo de Pensiones Obligatorias un valor de:

Datos de la cuenta de pensiones obligatorias				
No. Cuenta	Capital Actual			
	Obligatorio	Voluntario		TOTAL
		Afiliado	Empleador	
6,527,476	\$148,880,891	\$0	\$5,714	\$148,886,605

Esta liquidación es un cálculo provisional y no debe entenderse en ningún caso como una situación jurídica concreta y definitiva, ni como un derecho adquirido a favor del afiliado. En consideración a que los cálculos son efectuados a fecha presente y con base en tasas fluctuantes, las mesadas resultantes solamente constituyen aproximaciones basadas en los parámetros implícitos en los cálculos.

- Anexo a esta comunicación la simulación pensional a la fecha.
- Formulario de vinculación.
- Historia laboral y movimiento de cuenta.

Bajo esta perspectiva ponemos a su consideración las siguientes simulaciones:

- Resultado de la simulación pensional si no vuelve a cotizar y/o aportar en el Fondo de Pensiones Obligatorias (valor Presente):

Resultados Porvenir						
Edad	Capital			Semanas	Pensión	Tasa Reemplazo (Pensión/IBL)
	Cuenta Ahorro Individual	Bono Negociado	Total			
63 Años	\$148,886,605	\$0	\$148,886,605	1386	\$1,160,000	29.17%
64 Años	\$150,027,245	\$0	\$150,027,245	1386	\$1,160,000	29.17%
65 Años	\$154,677,869	\$0	\$154,677,869	1386	\$1,184,360	29.78%
66 Años	\$159,472,664	\$0	\$159,472,664	1386	\$1,209,232	30.41%

- Resultado de la simulación pensional Cotizando el 100% del tiempo:

Resultados Porvenir						
Edad	Capital			Semanas	Pensión	Tasa Reemplazo (Pensión/IBL)
	Cuenta Ahorro Individual	Bono Negociado	Total			
63 Años	\$148,886,605	\$0	\$148,886,605	1386	\$1,160,000	29.17%
64 Años	\$151,249,844	\$0	\$151,249,844	1398	\$1,160,000	29.31%
65 Años	\$160,885,251	\$0	\$160,885,251	1450	\$1,184,360	30.26%
66 Años	\$170,819,359	\$0	\$170,819,359	1501	\$1,209,232	31.25%

Para realizar sus consultas y trámites le invitamos a utilizar nuestros canales digitales o comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente marcando así:



Página Web
www.porvenir.com.co
Zona transaccional afiliado



Línea de Servicio al Afiliado
Bogotá 601 7447678
Cali 602 4857272
Medellín 604 6041555
Barranquilla 605 3855151
Resto del país 018000510800



Línea de Servicio al Pensionado
Bogotá 601 3906881
A nivel nacional sin costo 018000517170



Oficinas
Contamos con una red de 54 oficinas a nivel nacional



Porvenir APP
Descarga para Android en Play Store y para iOS en App Store



Chat Porvenir
www.porvenir.com.co
canales de servicio
Horarios de atención:
lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm



Andrea asistente virtual
Chat de Facebook Messenger



WhatsApp Porvenir
316 4091110

Si tiene la necesidad de acudir a nuestras oficinas o las sucursales aliadas, tenga presente tomar siempre las medidas de autocuidado.^{i ii iii}

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.

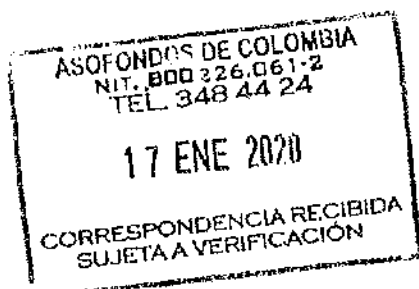
JANIRE MARINA LORDUY BUSTOS
Dirección de Atención Integral a Clientes
JMLB/Lizeth R.

ⁱ No permita que un tramitador le cobre dinero, los trámites en Porvenir no tienen costo. Si tiene denuncias relacionadas con fraudes, cobros o ética de nuestros empleados, denuncie al 6017434441 Ext.77777 en Bogotá o ingresando a www.porvenir.com.co/web/acerca-de-porvenir/linea-etica.

ⁱⁱ Recuerde, su clave de internet es personal e intransferible no la comparta con nadie y cámbiela mínimo dos (2) veces al año, así protegerá sus datos y transacciones, conozca más información en: <https://www.porvenir.com.co/web/seguridad/seguridad-en-internet>

ⁱⁱⁱ Nuestros afiliados cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Ana María Giraldo Rincón ubicado en la carrera 11 A N 96 51 oficina 203 en Bogotá, teléfono 601 6108161, correo defensoriaporvenir@legalcrc.com quien dará trámite a su queja de forma objetiva y gratuita.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



sfc Superintendencia
Financiera de Colombia

Radicación: 2019152169-003-000

Fecha: 2020-01-15 15:28 Sec. día 722

Anexos: No

Trámite: 116-CONSULTAS ESPECÍFICAS

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 410000-DELEGATURA PARA PENSIONES

Destinatario: 114 - 30-ASOFONDOS - ASOCIACION COLOMBIANA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y CE

Doctora

Clara Elena Reales

Vicepresidenta Jurídica

Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías ASOFONDOS

Calle 72 No. 8-24, Oficina 901

Bogotá D.C.

Número de Radicación : 2019152169-003-000
Trámite : 116 CONSULTAS ESPECÍFICAS
Actividad : 39 RESPUESTA FINAL E
Expediente : AFILIAC-PENS-DEV
Anexos :

Respetada doctora Clara Elena:

Con todo gusto damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, en la cual, después de realizar una breve alusión al marco normativo que regula lo concerniente a la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, plantea tres interrogantes sobre el trato que debe darse a los aportes pensionales cuando se configuran las situaciones reseñadas.

Al respecto, previo a dar respuesta a los interrogantes que se relacionan en su escrito este Despacho encuentra oportuno hacer las siguientes consideraciones en relación con la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, así:

El Sistema General de Pensiones (SGP), creado por la Ley 100 de 1993, integra dos regímenes pensionales excluyentes entre sí pero que coexisten, estableciendo, entre otras características, la posibilidad de trasladarse libremente entre estos atendiendo unos términos mínimos de permanencia y edad, así como la de sumar de las cotizaciones hechas en ambos para efectos de reunir las condiciones que dan derecho a las prestaciones que este Sistema otorga a sus afiliados.

No obstante, en cuanto a las prestaciones que se reconocen en uno y otro régimen, el legislador dispone reglas que no permiten que su resultado sea comparable, si bien su finalidad es en ambos casos la *"garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones"*¹, en el Régimen Solidario de Prima Média con Prestación Definida (RPM), los afiliados obtienen prestaciones cuyas condiciones y montos se encuentran definidos en la ley y en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) las pensiones y prestaciones que se reconocen dependen directamente de los valores ahorrados en la cuenta individual de los afiliados².

¹ Artículo 10 de la Ley 100 de 1993

² Sobre el tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-538 del 16 de octubre de 1996, destacó como principales diferencias las siguientes:

³ En el régimen de prima media con prestación definida los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas en la ley.

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

Conmutador: (571) 5 94 02 00 -- 5 94 02 01

www.superfinanciera.gov.co



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es importante considerar que el legislador en el diseño de la estructura de este Sistema tuvo en cuenta razones como *la viabilidad financiera, la falta de equidad y la baja cobertura del mismo*, las deficiencias administrativas, pero también se optó por un sistema que estimulara la libre competencia entre Regímenes y el ejercicio del derecho a elegir el régimen pensional y la administradora por parte de los afiliados, según sus intereses.

Sin embargo, las diferencias de origen legal entre los regímenes pensionales que pueden derivar en prestaciones de distintas cuantías generan inconformidades entre los afiliados que, después de cumplidos los años para pensionarse, encuentran un mejor beneficio en el régimen contrario, por lo que tienden a solicitar el traslado por fuera del término legal o la anulación de la afiliación.

En ese sentido, debe decirse que el marco legal³ para la procedencia de los traslados entre regímenes es claro y no da lugar a interpretaciones diferentes más allá del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas. Resulta evidente además que, en aras de salvaguardar los derechos de los afiliados, en distintas épocas desde la vigencia del Sistema General de Pensiones, se ha dado la posibilidad de regresar al régimen del cual se habían trasladado, sin contar que desde el inicio del SGP, una vez decidido el traslado, el afiliado tiene derecho al retracto.

El sistema dual acogido en el sistema pensional colombiano, es desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política, de allí que el legislador dentro de su libertad de creación normativa hubiese proferido la Ley 100 de 1993 para generar un correcto funcionamiento de la seguridad social con solidaridad, entendido este como un servicio público de carácter obligatorio, que se encuentra bajo la dirección y responsabilidad del Estado y que a su vez cuenta con la participación de los particulares, para de esta forma atender las prestaciones que se derivan de los riesgos del trabajo y de la necesidad de otorgar a las personas los medios para una subsistencia digna, cuando en razón de la edad ya no disponen de una adecuada capacidad de trabajo.

Quiere ello decir que no se podría a través de la Ley 100 de 1993 ni de sus decretos reglamentarios menoscabar las libertades individuales de las personas, entre ellas, la libertad de escogencia (libertad contractual), para lo cual es preciso revisar lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil, el cual reza:

"ARTICULO 1502. <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

- 1o.) que sea legalmente capaz.
- 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
- 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.
- 4o.) que tenga una causa lícita.

En este régimen son aplicables disposiciones vigentes para los sistemas de invalidez, vejez y muerte a cargo del I.S.S. y además las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley 100/93 (art. 31).

Dicho régimen se caracteriza porque los aportes de los afiliados y empleadores y sus rendimientos integran un fondo común de naturaleza pública, mediante el cual se garantiza el pago de las prestaciones a cargo de los recursos de dicho fondo, los gastos administrativos y las reservas, de acuerdo con la ley.

El administrador exclusivo de dicho régimen es el Instituto de Seguros Sociales, pues fue la única entidad que quedó autorizada para continuar afianzando trabajadores en lo sucesivo; por lo tanto, quedó planteada la competitividad entre dicha entidad y los administradores -fondos de pensiones- del sistema de ahorro individual de pensiones.

En el sistema de ahorro individual con solidaridad se incorporan y administran recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. Está basado en los recursos del ahorro, administrados en cuentas de propiedad individual de los afiliados, proveniente de las cotizaciones hechas por los empleadores y trabajadores, más los rendimientos financieros generados por su inversión y, eventualmente, de los subsidios del Estado.

(...) Evidentemente al comparar los dos sistemas de pensiones, encuentra la Corte las siguientes diferencias:

• Los requisitos para obtener la pensión de vejez en el sistema de prima media (art. 33) son: haber cumplido 55 años de edad si es mujer, o 60 años de edad si es hombre y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. El monto mensual de la pensión de vejez se determina así: por las primeras 1000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación; por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2% llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente (art. 34), que no podrá ser inferior al valor del salario mínimo mensual vigente y que tiene la garantía estatal a que alude el art. 138.

• En el sistema de ahorro individual con solidaridad, el derecho a la pensión de vejez, en las diferentes modalidades (renta vitalicia inmediata, retiro programado o retiro programado con renta vitalicia o cualesquiera otras autorizadas) se causa en favor del afiliado a la edad que cada uno de ellos escoge, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de expedición de la ley, o reajustado según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, o cuando opte por seguir cotizando, en las circunstancias descritas por el art. 64." (Subraya fuera de texto)

³ literales b y e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, Artículo 2.2.2.1. del Decreto 1833 de 2016 que incorpora el artículo 3° del Decreto 1161 de 1994. Parágrafo del artículo 2° del Decreto 1642 de 1995, Artículo 12 del Decreto 3995 de 2008

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.

Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01

www.superfinanciera.gov.co



El emprendimiento
es de todos

El emprendimiento
es de todos

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra."

En consonancia con lo anterior, podría decirse que dentro de lo que aquí se analiza, no es materia de discusión que el objeto y la causa en el traslado entre regímenes sean lícitas (existe todo un marco legal que así lo determina), ahora bien, en cuanto a que la persona sea considerada capaz debe verificarse que se den los presupuestos normativos dispuestos en los artículos 1503 y 1504 ibídem.

Respecto del consentimiento para obligarse al momento de suscribir el contrato de afiliación a los distintos regímenes, el numeral 2 del artículo 1502 señala que dicho consentimiento no debe adolecer de vicio alguno, los cuales son determinados en el artículo 1508 ibídem como error, fuerza y dolo, este, es sin dudas el punto crítico y de mayor problemática actualmente.

En relación con el consentimiento informado y libre, es decir, exento de vicios, considera este Despacho que se trata de un asunto meramente probatorio, que debe ser analizado y debatido en juicio, y que a su paso son los jueces de la república los responsables de valorar concienzudamente las pruebas aportadas tanto por administradoras como por afiliados, revisando además las posibles implicaciones financieras que conllevaría para el sistema, ordenar la nulidad de una afiliación, así como el traslado de regímenes.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia SU 062 de 2010 desarrolla la importancia de la prevalencia del orden económico, y al respecto indica: "La efectividad del derecho a cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y legal vigente depende de que éste pueda ser ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos obstáculos es precisamente impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos adicionales en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro individual sea inferior al monto del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media con prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los recursos necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a rendimientos diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido. Esto no sólo es necesario dentro del régimen general, sino también en los regímenes especiales con el fin de conciliar el ejercicio del derecho del interesado en acceder a la pensión y el objetivo constitucional de asegurar la sostenibilidad del sistema pensional." (subraya fuera de texto)

Como precedente de la anterior Sentencia de Unificación, el Alto Tribunal indicó en la Sentencia C-1024 de 2004, que "(...) el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudieran trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (...) Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...)" (Subraya fuera de texto)

En línea con lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, esta Superintendencia considera que, al momento de evaluarse las solicitudes y demandas de traslado de régimen pensional, debe adoptarse por los operadores administrativos y judiciales criterios tales como: i) el objetivo constitucional de estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional en el que con miras a proteger el orden económico del sistema no es viable efectuar traslados sin el monto de aportes necesarios en cada régimen, y ii) el mantenimiento del orden legal, que puede verse afectado al autorizar o conceder solicitudes de traslados sin el cumplimiento de los requisitos legales toda vez que se dejaría sin piso los criterios de interpretación a la normativa aplicable.



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En ese sentido, en consideración de este Despacho, la revisión que se hace a las solicitudes de traslado de régimen por vía judicial, debiera apoyarse en criterios técnicos en los que se determine que no se generará una afectación al Sistema General de Pensiones, atendiendo para ello los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

Respecto de los tres interrogantes, esta Superintendencia estima importante además señalar que la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación al Sistema General de Pensiones que se resuelva judicialmente, debe ser atendida por los actores en los términos que se disponga en los fallos judiciales correspondientes, teniendo en cuenta que, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011, esta Superintendencia no puede en desarrollo de sus funciones jurisdiccionales conocer de ningún asunto de carácter laboral.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta la relevancia del asunto consultado y las posibles implicaciones que tiene para el Sistema General de Pensiones, se emite el siguiente concepto con el alcance indicado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

a. Vinculación al Sistema General de Pensiones y destinación de los aportes.

Es necesario precisar que la vinculación al Sistema General de Pensiones se realiza a través de la suscripción del formulario de afiliación, este formulario hace las veces de contrato, en el que ambas partes se obligan de manera recíproca. Entre las principales obligaciones tenemos, por un lado, la de efectuar los aportes que correspondan legalmente y, por otro, recibir, administrar y conceder (ante el cumplimiento de los requisitos normativos) las prestaciones a que haya lugar.

Específicamente, en relación con las cotizaciones efectuadas en el Sistema General de Pensiones, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, determina la distribución que deben efectuar las administradoras del mismo, tanto en el Régimen de Prima Media con Solidaridad -RPM- como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-RAIS-, señalando entre otros lo siguiente:

"Artículo 20. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.*

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.

(...) Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993."

De allí, que el 3% de la cotización de los aportantes se destina a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento de los recursos pensionales en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-el literal d) del artículo 60 de la mencionada Ley 100, se establece que el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

constituye un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la Administradora.

De la misma manera, en el artículo 100 de la Ley 1003 se establece que, con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras invertirán los recursos de los fondos en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, que hoy se encuentra recogido en el Decreto 2555 de 2010.

Corresponde en este punto precisar que, en el Régimen de Ahorro Individual, los aportes de los afiliados que ingresan al fondo deben cumplir con los requisitos mínimos e invertirse en papeles y activos permitidos, tales como TES, bonos, CDT y acciones, entre otros. Es decir, el dinero que aporta un afiliado para su cuenta individual se encuentra representado en las inversiones que realiza el fondo, donde cada afiliado tiene una cuenta de ahorro individual que se ve representada en unidades de participación del fondo. Dichas inversiones deben ser valoradas diariamente por los Fondos de Pensiones y de Cesantía, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 expedida por esta Superintendencia.

Por lo tanto, las cuentas individuales de los afiliados varían no solo con los aportes y retiros que estos realizan, sino también, por las variaciones en el valor de mercado de las inversiones que conforman los portafolios, las cuales cambian de forma diaria como consecuencia de los cambios en las tasas de interés y de los precios de los diferentes títulos que conforman los citados portafolios; situaciones propias del mercado de valores que fluctúan por factores tanto internos como externos que originan caídas o subidas en los precios de los títulos y demás inversiones y que no dependen del control y gestión de las Administradoras de los Fondos de Pensiones y de Cesantía.

Ahora bien, tal y como se observa en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, las Sociedades Administradoras deben garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima en el manejo de los fondos que administran y, en caso de haber un incumplimiento a esta rentabilidad, la misma se garantiza con el patrimonio de dichas sociedades y con la reserva de estabilización. Esta reserva corresponde al 1% del valor del fondo administrado (pensiones obligatorias o cesantías) y debe estar invertida en las mismas condiciones que el correspondiente fondo.

Así mismo, en relación con el porcentaje destinado las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, se encuentra que dichos recursos son sufragados mensualmente, y destinados como lo ordena la norma a la aseguradora contratada, de esta forma el citado porcentaje como bien lo menciona en su oficio, permite a la aseguradora mantener la cobertura respecto del afiliado en relación con los riesgos asegurados (invalidez y muerte) durante la vigencia del seguro.

b. Traslado de recursos entre regímenes del Sistema General de Pensiones SGP

Vale la pena resaltar lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 en el cual, respecto del traslado de recursos entre regímenes del SGP, se establece lo siguiente:

"Artículo 7°. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.

Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.

Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, RPM, la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos.

Parágrafo. Con ocasión de la definición de la múltiple vinculación de sus afiliados y la determinación de las sumas a trasladar, las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones quedan facultadas para compensar, total o parcialmente, los saldos respectivos" (Subraya fuera de texto).

De esta manera, la normatividad existente permite inferir, que, en caso de resultar necesario un traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, lo procedente, además del traslado de la información correspondiente a la historia laboral del afiliado, es el traslado del valor de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos.

Conforme con lo expuesto, de decretarse la ineficacia del acto jurídico de cambio de régimen pensional y/o la nulidad de la afiliación alguno de los regímenes pensionales del SGP, lo que implica el traslado de recursos y de información de un régimen a otro, debe darse la aplicación de lo dispuesto en la norma atrás citada, respetando la destinación de los aportes pensionales realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora que genera los rendimientos que se trasladan a la administradora de destino.

En ese orden de ideas, frente a los interrogantes tenemos:

1. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y reconocer los gastos de administración a la administradora de pensiones, tal como establece el artículo 1746 del Código Civil, y solo se debe girar el valor de la cuenta de ahorro individual, con sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos?***

Teniendo en cuenta los argumentos atrás planteados, y sin perjuicio de lo que se haya ordenado en algunos de los fallos judiciales correspondientes, este Despacho considera que, al decretarse la nulidad e ineficacia de la afiliación procede el traslado de los saldos de la cuenta de ahorro individual del afiliado, que incluye lo correspondiente a los rendimientos generados como consecuencia de la administración de los recursos efectuada por la administradora, así como los porcentajes destinados a la garantía de la pensión mínima y sus respectivos rendimientos.

2. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y excluir las sumas que por concepto de prima de seguro previsional fueron sufragadas a favor del afiliado mientras estuvo vigente su afiliación, dado que la compañía aseguradora mantuvo la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte de su asegurado durante la vigencia del seguro, y además por cuanto operó la figura de la prima devengada?***

En igual sentido, en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la compañía aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado; sin perjuicio de la vinculación que a este tipo de procesos se haga a las aseguradoras que han sido contratadas para dichos fines, para que puedan ejercer la defensa de sus intereses.

3. ***Conforme al marco normativo vigente, ¿sería válido el siguiente tratamiento legal que han de recibir los aportes recibidos, cuando por virtud de la declaratoria judicial de nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, el afiliado debe retornar al RPM?***

Concepto	Devolución
Cuenta de Ahorro Individual (Aportes y Rendimientos)	Si
FGPM (aportes y rendimientos)	Si
Prima de Seguro Previsional	No
Comisión Administración	No




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este Despacho estima válido el tratamiento legal que se plantea en este interrogante, lo anterior, sin perjuicio de las decisiones adoptadas por los tribunales e inclusive por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre judicial, quienes cuentan las facultades legales para adoptar la posición que en derecho encuentren pertinente.

De esta manera dejamos atendido el objeto de su consulta, con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



LUIS FELIPE JIMENEZ SALAZAR
410000-DELEGADO PARA PENSIONES
DELEGATURA PARA PENSIONES

Copia a:

Elaboró:

JULIANA SIERRA MORALES

Revisó y aprobó:

--**JULIANA SIERRA MORALES**

DERLY JULIET ALARCON PARRA

DERLY JULIET ALARCON PARRA



270

1-15 BOG

CM N

JB

EL TIEMPO

VIERNES 16 DE ENERO DE 2004 1-15

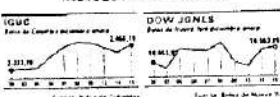
ECONÓMICAS

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

ACCIONES DE MAYOR MOVIMIENTO

Símbolo	Empresa	Precio	Var.	Vol.	Valor	Vol. Ex.	Valor Ex.
COPEL	Compañía de Papel	1.250	+10	1.200	1.500	1.200	1.500
COFIBOLSA	Compañía de Fomento	1.100	+5	1.100	1.210	1.100	1.210
COFIBOLSA	Compañía de Fomento	1.100	+5	1.100	1.210	1.100	1.210
COFIBOLSA	Compañía de Fomento	1.100	+5	1.100	1.210	1.100	1.210
COFIBOLSA	Compañía de Fomento	1.100	+5	1.100	1.210	1.100	1.210

INDICES ACCIONARIOS



MONEDAS

Moneda	Precio	Var.
Dólar	1.250	+10
Euro	1.100	+5
Libra	1.100	+5

FONDOS

Fondo	Precio	Var.
Fondo de Inversión	1.250	+10
Fondo de Inversión	1.100	+5
Fondo de Inversión	1.100	+5

FIDUCIARIAS

Fiduciaria	Precio	Var.
Fiduciaria	1.250	+10
Fiduciaria	1.100	+5
Fiduciaria	1.100	+5

El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del Mercado de Energía Mayorista

Que, en cumplimiento de la resolución de la Resolución 116 de 1993 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, anunció un programa de limitación del suministro de energía eléctrica a partir del día 17 de enero de 2004, en el horario comprendido entre las 18:00 y las 11:00 a.m., o las horas comprendidas en el horario nacional por la EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA S.A. E.S.P., entidad que actualmente se encuentra en mora de pago del incremento del 1.º de diciembre de 2003 con el Mercado de Energía Mayorista.

Los centros pertenecientes a los sistemas desconectables y los que son susceptibles de ser sometidos a limitación de suministro no serán afectados por el programa de limitación de suministro.

Los horarios en que se realizará el programa de limitación de suministro se encuentran en las siguientes tablas:

Horario	Centro	Horario	Centro
18:00 a 11:00	Centro de Energía	18:00 a 11:00	Centro de Energía
18:00 a 11:00	Centro de Energía	18:00 a 11:00	Centro de Energía
18:00 a 11:00	Centro de Energía	18:00 a 11:00	Centro de Energía

Si la empresa tiene vigente un programa de limitación del suministro, las horas por corte de energía publicadas en este aviso quedarán incluidas en el programa propio.

Asimismo, informo a todos los usuarios y a los terceros afectados por la limitación de suministro de energía eléctrica que los datos y personas ocasionados serán responsabilidad de la empresa misma.

TERCER AVISO REGIONAL Y NACIONAL
Viernes 16 de enero de 2004

IMPUESTO / POR CADA DÓLAR ENVIADO, SE DESCUENTAN 11 PESOS

4 por mil a remesas

La Dian aclaró que tanto las casas de cambio, como los bancos, deben retener este gravamen al momento de entregar el efectivo.



LA CASA DE CAMBIOS ya están cobrando el impuesto.

La conclusión que tenían las casas de cambio con tres potenciales devaluaciones no el cuatro por mil a los beneficiarios de las remesas, fue aclarada ayer por la Dian. La entidad aseguró que el impuesto se le debe retener a los receptores de los dineros, así lo recibió a través de una carta de cambio a través de un banco.

El mismo día, las casas de cambio de dinero que empezaron a cobrar este impuesto desde el primer de enero, pero los bancos explicaron que no lo cobraban porque lo acumulan ellos directamente.

Sin embargo, ayer la Dian aclaró que en un convenio de coordinación del 2003 estableció que en la operación de giro familiares se cobra directamente el impuesto a

ahorro en los que quieren que no les cobren el cuatro por mil. Por el contrario, los receptores de los dineros pueden abonarse del pago. Alfonso Garzón, presidente del gremio que reúne las casas de cambio, dijo que la aclaración de la Dian pone en igualdad de condiciones a los dos intermediarios.

Una fuente del sector bancario dijo que ellos de los impuestos se pagan a través de la casa de cambio y que no lo van a cobrar a sus usuarios.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Bancaria, Patricia Cardona, dijo que el sistema financiero no es partidario del gravamen a las transacciones bancarias y menos a las remesas.

Sobre la posición de la Dian en torno a quién debe pagar el impuesto comentó que se le debe pagar a quien hay que pagar con más detenimiento. Sin embargo, dijo que a la Dian lo que le debe interesar es que alguien lo pague.

Según los cálculos de Garzón, con el cinco por mil, por cada dólar enviado en una remesa, al usuario se le descuentan 11 pesos.

EMPALME Feria de contratos en fin de año

El contador general de la Nación, Jaime Alberto Cano, indicó ayer que aunque el empalme contable de fin de año se realizará en el 30 por ciento de las entidades públicas, así como en los alcaldías y gobernaciones la entidad nacional no discutirá en Medellín y en los departamentos del Valle y Cundinamarca.

En estos tres casos se detectó que si bien se hizo un corte de cuentas al 31 de diciembre del 2003, en la práctica seguían funcionando una cantidad de contratos por pago de honorarios y servicios en la cual se afectó la responsabilidad de pago de los funcionarios entrantes.

"Los compromisos que se adquieren en las tres entidades generan un déficit de 50.000 millones en el Valle, de 80.000 millones en Cundinamarca y de 100.000 millones de pesos en Medellín", dijo Cano.

Concretó que en el caso de la entidad antioqueña el monto al cual tuvo que recurrir a préstamos de Tesorería para hacer frente a la situación de liquidez.

COMUNICADO DE PRENSA

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantes abajo firmantes, atendiendo las normas vigentes y lo dispuesto por la Superintendencia Bancaria se permite informar a sus afiliados que:

- El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, establece que los afiliados al sistema de fondos de pensiones pueden trasladarse entre los regímenes que lo integran cada cinco (5) años, salvo que la fecha del año o menos para cumplir la edad para tener derecho a una pensión de vejez.
- Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, se fidejocomisó de gracia para aquellos a quienes al 28 de enero de 2004 les faltan diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, según el cual las autoridades a trasladarse por una única vez entre los regímenes del Sistema General de Pensiones, y sin perjuicio del plazo anterior, dentro de los cuales pueden ejercer hasta ocho (8) veces.
- El Gobierno Nacional actualizó el Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003, mediante el cual reglamentó el derecho a trasladarse en el caso de los afiliados que se encuentran en las etapas de edad de vejez.
- La Superintendencia Bancaria expidió la Circular Emisora 001 del 8 de enero de 2004, mediante la cual emitió instrucciones a las administradoras de pensiones del Sistema General de Pensiones y en virtud de la cual se publica este aviso.

En consideración de lo anterior, se informa:

- Supuesto beneficiario de la norma: A quienes al 28 de enero de 2004 les faltaban diez (10) años o menos para cumplir la edad de 55 años, si son mujeres; 60 años, si son hombres, y en perjuicio de lo que anteriormente consignaron normas especiales en relación con la edad de pensión o podrán trasladarse por una única vez entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS y el Régimen de Aporte Individual administrado por alguna APL o viceversa, a su libre elección, hasta ocho (8) veces.

El derecho de traslado a que se refieren las normas señaladas se aplica, igualmente, a toda persona que a la fecha de la emisión de este comunicado tiene más de 55 años, si es mujer, o 60 años, si es hombre, en la medida en que no tengan la calidad de pensionados, no hayan solicitado la vejez, o respecto de los mismos no se haya presentado un sueldo que haya dado o dé lugar al retiro de las prestaciones del Sistema General de Pensiones.

Igualmente, el derecho de traslado dentro del plazo indicado, puede ser ejercido por toda persona en las condiciones de edad señaladas, que se encuentren en situación de múltiples vinculaciones, eligiendo el régimen al que prefieren estar vinculados, en los términos del artículo 2º del decreto 3800 de 2003 y la Circular Emisora 001 de 2004 de la Superintendencia Bancaria.

El ejercicio del derecho a trasladarse de régimen. Para efectos de ejercer el citado derecho, los afiliados deben verificar con sus empleadores o el administrador y régimen se realice el pago de la última cotización a pensiones con el fin de verificar si están conformes con ese hecho.

Verificada la información anterior y evaluada la decisión que corresponde, los afiliados que optan por seleccionar un régimen deberán al cual se haya trasladado en el último periodo, deberán proceder a suscribir los formularios de traslado que corresponden a la nueva administradora y régimen elegida, hasta el 28 de enero de 2004.

Consecuencias del silencio administrativo. En caso de que el afiliado opte por no tomar acción alguna y guardar silencio, se entenderá que ha consentido con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 3800 de 2003, que su decisión es permanecer vinculada a la administradora y régimen a la que se encuentra cotizando a 28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última cotización para pensiones antes de dicha fecha.

Disposiciones adicionales para los beneficiarios del régimen de transición. Transidas de los afiliados en las condiciones de edad señaladas, que según la cantidad de beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, estos, aquellas personas que al 1º de abril de 1994 hubieran cumplido 35 o más años de servicios prestativos o nominales, que no hubieran trasladado al ISS, y que al 28 de enero de 2004, se encuentren cotizando a régimen y no haber ejercido el derecho de transición, podrán ejercer ese derecho hasta el 28 de enero de 2004.

Para hacer uso del derecho a trasladarse hasta el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS, debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, esto es que al salir de la cuenta de ahorro no se le realice el traslado al ISS, y que este ahorro no sea inferior al monto total del aporte que debió efectuarse en caso de que hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media.

Los afiliados interesados en ejercer el derecho de traslado, deben dirigirse a la Superintendencia Bancaria o a la Superintendencia de Pensiones, para obtener la información necesaria y los formularios de traslado.

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantes abajo firmantes, se comprometen a brindar el apoyo necesario para que los afiliados puedan ejercer el derecho de traslado de régimen de manera oportuna y sin inconvenientes.

Por lo anterior, se permite informar a los afiliados que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 3800 de 2003, se les permite ejercer el derecho de traslado de régimen de manera oportuna y sin inconvenientes.

CASA EDITORIAL EL TIEMPO
Departamento de Redacción

COMUNICADO DE PRENSA

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías abajo firmantes, atendiendo las normas vigentes y lo dispuesto por la Superintendencia Bancaria se permiten informar a sus afiliados que:

1. El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden trasladarse entre los regímenes que lo integran cada cinco (5) años, salvo que le falten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a una pensión de vejez;

Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, señaló período de gracia para aquellos a quienes al 28 de enero de 2004 les faltan diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, según el cual les autoriza a trasladarse por una única vez entre los regímenes del Sistema General de Pensiones, y sin cumplir el plazo anotado, derecho que pueden ejercer hasta dicha fecha;

2. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003, mediante el cual reglamentó el derecho a trasladarse en el caso de los afiliados que se encuentren en la situación de edad descrita;

3. La Superintendencia Bancaria expidió la Circular Externa 001 del 8 de enero de 2004, mediante la cual impartió instrucciones a las administradoras de pensiones del Sistema General de Pensiones y en virtud de la cual se publica este aviso;

En consideración de lo anterior, se informa:

a. Sujetos beneficiarios de la norma. A quienes al 28 de enero de 2004 les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad de 55 años, si son mujeres, ó 60 años, si son hombres, - y sin perjuicio de lo que expresamente consagren normas especiales en relación con la edad de pensión - podrán trasladarse por una única vez entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS y el Régimen de Ahorro Individual gestionado por alguna AFP o viceversa, a su libre elección, hasta dicha fecha.

El derecho de traslado a que se refieren las normas señaladas se aplica, igualmente, a toda persona que a la fecha de la solicitud cuente con más de 55 años, si es mujer, ó 60 años, si es hombre; en la medida en que no tengan la calidad de pensionados, no hayan solicitado la referida pensión, o respecto de los mismos no se haya presentado un siniestro que haya dado o dé lugar al reclamo de las prestaciones del Sistema General de Pensiones.

Igualmente, el derecho de traslado dentro del plazo indicado, puede ser ejercido por toda persona en las condiciones de edad señaladas, que se encuentre en situación de múltiple vinculación, eligiendo el régimen al que prefieren estar vinculados, en los términos del artículo 2º del decreto 3800 de 2003 y la Circular Externa 001 de 2004 de la Superintendencia Bancaria.

b. Ejercicio del derecho a trasladarse de régimen. Para efectos de ejercer el citado derecho, los afiliados podrán verificar con sus empleadores a qué administradora y régimen se realizó el pago de la última cotización a pensiones con el fin de verificar si están conformes con ese hecho.

Verificada la información anterior y evaluada la decisión que corresponda, los afiliados que opten por seleccionar un régimen diferente al cual se haya cotizado en el último período, deberán proceder a suscribir los formularios de traslado que correspondan ante la nueva administradora y régimen elegidos, hasta el 28 de enero de 2004.

c. Consecuencias del silencio del afiliado. En caso de que el afiliado opte por no tomar acción alguna y guardar silencio, se entenderá de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 3800 de 2003, que su decisión es permanecer vinculado a la administradora y régimen a la que se encontrará cotizando a 28 de enero de 2004 ó a aquella que recibió la última cotización para pensiones antes de dicha fecha;

d. Requisitos adicionales para los beneficiarios del régimen de transición. Tratándose de los afiliados en las condiciones de edad indicadas, que tengan la calidad de beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, aquellas personas que al 1º de abril de 1994 hubieran cumplido 15 ó más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que se hubieran trasladado hacia el Régimen de Ahorro Individual, si deciden cambiarse de régimen y recuperar los efectos de la transición, podrán ejercer ese derecho hasta el 28 de enero de 2004.

Para hacer uso del derecho a trasladarse hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003; esto es que el saldo en la cuenta de ahorro individual se traslade al ISS, y que este ahorro no sea inferior al monto total del aporte que debió efectuarse en caso de que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media.



Bogotá D.C,



Radicado: 2-2021-059078

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2021 12:37

Señores Magistrados
Corte Constitucional
Honorable Magistrados
Sala Plena
Ciudad.

Referencia: Respuesta a las preguntas remitidas a través del Auto 583 de 2021.

Honorable Magistrados:

JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO en mi condición de Ministro de Hacienda y Crédito Público, respetuosamente me permito dar repuesta a los interrogantes remitidos por la H. Corte Constitucional mediante Auto 583 de 2021; explicaciones que corresponden a lo expuesto en la audiencia que ante ese honorable Sala se adelantó el pasado 28 de octubre del año en curso.

PRIMER EJE TEMÁTICO

a. *¿Cuál es el monto y la destinación de los aportes que mensualmente los afiliados del Sistema General de Pensiones realizan a las diferentes administradoras de los dos regímenes de pensiones, y las diferencias relevantes en la administración de los recursos así obtenidos entre cada uno de dichos regímenes?*

El Sistema General de Pensiones contempla dos regímenes excluyentes entre sí, pero que coexisten. En este sistema dual, tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado pueden elegir libremente entre cualquiera de estos dos regímenes según lo consideren más conveniente.

Ahora bien, como primera diferencia encontramos que, en la etapa de cotización, los aportes realizados tienen un destino diferente en cada uno de los regímenes, como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:

IBC	Cotización RPM	Fondo Común de vejez	% administración y aseguramiento	FSP**	IBC	Cotización RAIS	Cuenta de Ahorro individual	% administración y seguro Previsional	FGP*	FSP**
< 4 SM	16%	13%	3.0%	0%	< 4 SM	16%	11.5%	3.0%	1.5%	0%
4 SM a 16 SM	17%	13%	3.0%	1%	4 SM a 16 SM	17%	11.5%	3.0%	1.5%	1%
16SM A 20 SM	17% - 18%	13%	3.0%	1.2% - 2%	16SM A 20 SM	17% - 18%	11.5%	3.0%	1.5%	1.2% - 2%

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia
Código Postal 111711
Commutador (57 1) 381 1700
www.minhacienda.gov.co

*FGP. Fondo de Garantía de Pensión Mínima
**FSP. Fondo de Solidaridad Pensional

Así las cosas, en un caso típico en donde el afiliado no devenga más de 4 salarios mínimos, se puede observar que en el Régimen de Prima Media (en adelante RPMPD o RPM, indistintamente), del 16% de la cotización, el 13% de la misma se acredita en el fondo Común de Colpensiones, en tanto el 3% restante sirve para pagar a Colpensiones la comisión que recibe por la administración del régimen y para abonar a los fondos comunes de invalidez y sobrevivencia.

Por el contrario, en el Régimen de Ahorro Individual (en adelante RAIS), del 16% de cotización, el 11.5% se destina a la cuenta de ahorro individual pensional del afiliado, un 1.5% es destinado a alimentar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en tanto el 3% restante se emplea para pagarles a las administradoras de pensiones los costos de administración del régimen y para pagar los seguros previsionales de los afiliados, que los cubren a ellos y a sus familias contra las contingencias derivadas de la invalidez y la muerte.

En este punto es preciso recordar que, mientras los recursos recaudados en el Régimen de Prima Media alimentan los fondos comunes de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de Colpensiones, y sirven para el pago de las prestaciones de los actuales pensionados del Régimen de Prima Media, los recursos que recibe cada afiliado de Régimen de Ahorro Individual se acreditan en una cuenta que le pertenece exclusivamente al afiliado y cuyos recursos serán los que se tengan en cuenta para determinar valor de la pensión de vejez en ese régimen.

Ahora bien, cada uno de los Regímenes del Sistema General de Pensiones cuenta con sus propias condiciones, requisitos y beneficios, lo cual implica que las prestaciones a las que pueden acceder los afiliados pueden variar según la elección del régimen al cual cotizan y por el cual se pensionan, tal como se presenta, de forma general, en el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICA	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES																									
	RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL																								
Destino de los aportes	El 13% de la cotización se destina al fondo de naturaleza común, en el cual se reciben las cotizaciones y con esos recursos se financian las pensiones de todos los pensionados del Régimen de Prima Media y sus beneficiarios.	El 11.5% de la cotización se destina a la cuenta de ahorro individual del afiliado. Con estos recursos se financia exclusivamente la pensión del afiliado y sus beneficiarios.																								
Costos de Administración y coberturas de invalidez y muerte	3% de la cotización para gastos de administración y fondos comunes de invalidez y sobrevivencia. De este 3%, Colpensiones tiene una cuota de administración de 1.09% y un 1.91% se destina a capitalizar los fondos de invalidez y sobrevivientes, pues con ellos se financian las pensiones de invalidez y sobrevivencia de los afiliados que incurran en alguna de estas contingencias, siempre que cumplan las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha del siniestro y demás requisitos legales. <table><tr><th>Administradora</th><th>% Administración</th><th>% Reservas invalidez /Sobrevivencia</th></tr><tr><td>Colpensiones</td><td>1.09%</td><td>1.91%</td></tr></table>	Administradora	% Administración	% Reservas invalidez /Sobrevivencia	Colpensiones	1.09%	1.91%	3% de la cotización se emplea para el pago de la cuota de administración y de la prima del seguro previsional. Este porcentaje se distribuye de forma diferente en cada administradora, así: <table><tr><th>Administradora</th><th>% Administración</th><th>% Aseguramiento</th></tr><tr><td>Old Mutual</td><td>0.90%</td><td>2.10%</td></tr><tr><td>Protección</td><td>0.97%</td><td>2.03%</td></tr><tr><td>Porvenir</td><td>1.03%</td><td>1.97%</td></tr><tr><td>Colfondos</td><td>0.80%</td><td>2.20%</td></tr><tr><td>Colpensiones</td><td>1.09%</td><td>1.91%</td></tr></table> <p>En el RAIS los pagos del seguro previsional garantizan al afiliado que haya cumplido las 50 semanas de cobertura en los tres años anteriores a la fecha de siniestro y demás requisitos legales, que la aseguradora COMPLETE el</p>	Administradora	% Administración	% Aseguramiento	Old Mutual	0.90%	2.10%	Protección	0.97%	2.03%	Porvenir	1.03%	1.97%	Colfondos	0.80%	2.20%	Colpensiones	1.09%	1.91%
Administradora	% Administración	% Reservas invalidez /Sobrevivencia																								
Colpensiones	1.09%	1.91%																								
Administradora	% Administración	% Aseguramiento																								
Old Mutual	0.90%	2.10%																								
Protección	0.97%	2.03%																								
Porvenir	1.03%	1.97%																								
Colfondos	0.80%	2.20%																								
Colpensiones	1.09%	1.91%																								

¹ El porcentaje máximo del 3% destinado a los gastos de administración y al pago del seguro previsional, va variando en el tiempo, sin exceder del 3%, según el valor de mercado que las compañías de seguros asignan al seguro previsional. La información presentada en el cuadro corresponde a la información del año 2021. Al respecto, es pertinente indicar que la información sobre los costos de administración y pago de la prima del seguro previsional son publicados de manera periódica por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

		capital que sea necesario para financiar su pensión o la de sus beneficiarios de invalidez o sobrevivencia.
Requisitos para obtener la pensión de Vejez	1300 semanas cotizadas	Contar con el capital suficiente para financiar una pensión de por lo menos el 110 % de una renta vitalicia de un SMLMV, que cubra al afiliado y su núcleo familiar.
Edad de Pensión de Vejez	62 Hombres - 57 Mujeres	62 Hombres - 57 Mujeres o antes si cuenta con el capital suficiente para pensionarse anticipadamente.
Requisitos para obtener la Garantía de pensión mínima de vejez.	1300 semanas cotizadas y contar con la edad mínima de 57 años y 62 años según el caso.	1150 semanas cotizadas, y contar con la edad mínima de 57 o 62 años según el caso.
Monto de la pensión	Corresponde a un monto fijo establecido en la norma según formula porcentual, que se calcula sobre el promedio del ingreso base de cotización de los últimos 10 años.	El valor de la pensión no es fijo y depende del capital ahorrado, de tal manera que la mesada corresponderá al valor del ahorro realizado con sus respectivos rendimientos, más el bono pensional si a él hay lugar, dividido por el número de meses que vivirán el afiliado y sus beneficiarios.
Requisitos para obtener la pensión de invalidez y sobrevivencia, monto y financiación.	<p>Invalidez: Tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.</p> <p>Sobrevivencia: Fallecer por causas de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de la muerte.</p> <p>Monto: Entre el 45% - 75% del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, según grado de invalidez y número de semanas cotizadas.</p> <p>Financiación: Esta pensión se financia con el Fondo común de invalidez o sobrevivencia, según corresponda, administrado por Colpensiones.</p>	<p>Invalidez: Tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.</p> <p>Sobrevivencia: Fallecer por causas de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de la muerte.</p> <p>Monto: Entre el 45% - 75% del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, según grado de invalidez y número de semanas cotizadas.</p> <p>Financiación: Estas pensiones se financian con los recursos acreditados en la cuenta del afiliado, y el capital que aporta la Aseguradora Previsional, para COMPLETAR el capital que sea necesario para financiar una pensión al afiliado y sus beneficiarios.</p>
Prestaciones sustitutivas, en caso de no cumplir requisitos de pensión.	<p>Indemnización sustitutiva:</p> <p>Corresponde a los aportes ajustados por inflación.</p>	<p>Devolución de saldos:</p> <p>Corresponde a los aportes ajustados por inflación + rendimientos reales.</p>
Administradora	Colpensiones (Entidad pública).	Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos (Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía de naturaleza privada).

Fuente: DGRESS – MHCP.

Como se puede observar, en el Sistema General de Pensiones existen diferencias sustanciales entre los dos regímenes pensionales, tanto en la etapa de cotización, como en la etapa de reconocimiento pensional. Así las cosas, el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), es un sistema en el que los afiliados o eventuales beneficiarios obtienen un beneficio pensional del sistema (pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización sustitutiva) cuyo monto se encuentra previamente definido por la Ley. En este régimen, los aportes y los rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se pagan las prestaciones de los pensionados y sus beneficiarios.

Por otra parte, encontramos el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el cual los aportes efectuados por los afiliados durante su vida laboral y los rendimientos generados por las cotizaciones se capitalizan en una cuenta de ahorro individual del afiliado; estos dineros le permiten al afiliado obtener el pago



de la prestación que corresponderá al valor ahorrado en su cuenta pensional. **En el RAIS, el monto de la prestación por vejez es variable** a partir de una cotización definida. En el monto de la prestación inciden aspectos como: los recursos acumulados en la cuenta, la edad a la cual el afiliado desea pensionarse, la modalidad de la pensión elegida, las semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados en la cuenta pensional.

- b. Cuál ha sido la evolución de la legislación en materia de traslados de un régimen de pensiones a otro? ¿Cuáles son las razones de (i) política económica y (ii) garantía del derecho constitucional a la seguridad social en pensiones que determinaron las reglas vigentes sobre traslados de un régimen a otro?**

Inicialmente, en la Ley 100 de 1993², se estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones podían escoger libremente el régimen de pensiones que prefiriesen. Sin embargo, una vez efectuada la selección, sólo podrían trasladarse de régimen cada tres (3) años.

Es de señalar que esta disposición fue regulada a través del Decreto 692 de 1994, en el que expresamente se indicó: (i) la selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias del régimen elegido (artículo 11), (ii) la selección de uno cualquiera de los regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado (artículo 11), (iii) cuando se trate de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar (artículo 11), (iv) **las personas que decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora** (artículo 11), (v) **si el afiliado se traslada por primera vez del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en el formulario debe quedar consignado que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, para tal efecto el formulario puede contener la leyenda pre-impresa en este sentido** (artículo 11) y (vi) efectuada la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior (artículo 15).

Así mismo, por el mismo año de 1994, se expidió el Decreto 1161, hoy compilado en el Decreto 1833 de 2016, en el que se consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario.

Posteriormente, el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 (norma que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico), siendo regulado a través del Decreto 3800 de 2003, indicando que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden escoger el régimen de pensiones que prefieran. Sin embargo, una vez efectuada la selección, sólo pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial.

También, establece esta disposición, que desde el 29 de enero de 2003 y hasta el 28 de enero de 2004, los afiliados podían trasladarse en cualquier momento, dándoles un periodo de gracia de un año. Sin embargo, indicó la norma que, a partir del 29 de enero del 2004, ningún afiliado puede trasladarse de régimen cuando se encuentre a diez (10) años o menos para cumplir la edad de pensión de vejez.³

Ahora bien, con el fin de dar claridad sobre las razones de garantía del derecho constitucional a la seguridad social en pensiones que determinaron las reglas vigentes sobre traslados de un régimen a otro, es preciso indicar que el periodo de carencia de los últimos 10 años introducido con la Ley 797 de 2003, no vulnera el

² Literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

³ e. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.



derecho pensional de ningún afiliado, en la medida que: (i) si bien, en ambos regímenes las prestaciones a obtener tienen parámetros diferentes, por ejemplo, en el RAIS, la garantía de pensión mínima de pensión se obtiene con 1150 semanas de cotización, mientras que en Colpensiones se obtiene con 1300 semanas cotizadas), los dos regímenes garantizan a quien cumpla los requisitos allí establecidos la obtención de las prestaciones que permitan la cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y muerte; (ii) no atenta contra el derecho de selección del afiliado de someterse a uno u otro régimen porque esa decisión es libre y voluntaria hasta que empiezan los 10 años de restricción, (iii) genera como efecto positivo incentivar la responsabilidad individual y social en cabeza de los afiliados de escoger oportunamente el régimen que deseen, (iv) la modificación normativa, que impulsó dicha restricción, contempló un periodo de gracia de un año para que los afiliados pudieran trasladarse en caso de haberse visto perjudicados por la disposición y (v) fue inaplicable para las personas que reunían las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no se hayan regresado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, quienes pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-.

Adicionalmente, frente a las razones de política económica, se observa que la norma tiene como objeto: (i) garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema general de pensiones, al controlar el fenómeno denominado "riesgo moral" de los afiliados que, con decisiones oportunistas (es decir a menos de 10 años de pensionarse), generan un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media, (ii) lograr una adecuada planeación financiera y presupuestal del sistema pensional, en esta medida se debe tener una fecha de corte para poder hacer las estimaciones actuariales y financieras del sistema, pues si se permitiera el traslado en el último año antes de pensionarse, es posible que en vez de pagar por 1.500.000 pensionados en un año, el régimen administrado por Colpensiones tuviese que pagar 1.700.000 pensionados, sin que se hubieran efectuado las provisiones presupuestales para tal efecto; y por último (iii) adecuar los pagos del sistema pensional a cargo de la Nación conforme al marco fiscal de mediano plazo que también se proyecta a 10 años, permitiendo que el sistema guarde su equilibrio financiero y la Nación su equilibrio fiscal, al poder determinar cuáles son las obligaciones futuras tanto de Colpensiones como del Estado para este periodo de tiempo.

De igual manera, como complemento de la respuesta anterior, es preciso tener en cuenta las consideraciones de la Honorable Corte Constitucional que, al estudiar la exequibilidad del periodo de carencia, concluyó, mediante Sentencia C-1024 del 20 de octubre de 2004, emitida por el Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, lo siguiente:

1. El periodo de carencia previsto en la norma no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, en la medida en que ***"... el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales."*** (negrilla fuera de texto)
2. El periodo de carencia, conforme al cual el afiliado no puede trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, es razonable y proporcional, en la medida en que ***"... el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad..."*** (negrilla fuera de texto)
3. El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia es el de ***"... evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y***



su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes. No sobra mencionar en este punto, que el sustento actuarial es el que permite asumir los riesgos que se encuentran involucrados con el sistema y que, en ese orden de ideas, su falta de ajuste con la realidad económica del país, simplemente podría llegar a poner en riesgo la garantía del derecho pensional para los actuales y futuros pensionados. (negrilla fuera de texto)

4. En la medida en que el Régimen de Prima Media se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse arbitre el sistema y se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, **“... resulta contrario al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), y al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar ‘el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior”.** (negrilla fuera de texto)
 5. El periodo de carencia evita que se impongan otros mecanismos legales más gravosos para los afiliados para conservar la sostenibilidad financiera del sistema, tales **“... como, por ejemplo, la reducción del número de mesadas pensionales pagaderas en un año o la imposición de un porcentaje que reduzca el valor de la pensión a cancelar”.**
 6. La norma NO puede ser aplicada a las personas que reúnen **las condiciones del régimen de transición** previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no se hayan regresado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, quienes pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Sentencia SU-062 de 2010, esto es que: (i) el afiliado tenga a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, es decir el 1º de abril de 1994, quince (15) años de servicios cotizados para la pensión de vejez, equivalentes a setecientos cincuenta (750) semanas, (ii) se traslade a Colpensiones todos los aportes pensionales (ahorro) que haya acumulado en su cuenta de ahorro individual, (iii) el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual, incluidos sus rendimientos y el valor correspondiente del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del referido régimen, no sea inferior al monto total que habría obtenido en caso que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media, (iv) en caso de que el valor a trasladar del RAIS al RMPD sea inferior al que se hubiera efectuado en Colpensiones, el afiliado deberá pagar con sus propios recursos el valor diferencial, para poder completar el traslado.
- c. **¿Cuándo se materializa un traslado del Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media, ¿qué valores se trasladan de la cuenta de cada afiliado, o qué montos son los que se entregan a la nueva administradora? ¿Estos valores son equivalentes a lo que se hubieren aportado o generado en caso de haber estado afiliado siempre al RPM? En caso negativo, ¿cómo se explica esa diferencia?**

Como se indicó en el literal a) del presente cuestionario, para los afiliados a un Fondo de Pensiones, el aporte mensual para acrecentar el ahorro pensional corresponde al 16% del salario (para los dependientes el 12% lo asume el empleador y el 4% lo aporta el afiliado). Si el salario es mayor o igual a 4 SMMLV el afiliado realiza un

aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional, este porcentaje depende del salario y va desde 1% al 2% (del salario).

IBC	Cotización RAIS	Cuenta de Ahorro individual	% administración y seguro Previsional	FGP	FSP
< 4 SM	16%	11.5%	3.0%	1.5%	0%
4 SM a 16 SM	17%	11.5%	3.0%	1.5%	1%
16SM A 20 SM	17% - 18%	11.5%	3.0%	1.5%	1.2% - 2%

En este punto es de recordar que, el valor límite de los costos de administración y el pago del aseguramiento de invalidez y sobrevivencia es del 3% para todas las administradoras del sistema, el cual, en todo caso puede distribuirse internamente en cada administradora de forma diferente, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Administradora	% Administración	% Aseguramiento
Old Mutual	0.90%	2.10%
Protección	0.97%	2.03%
Porvenir	1.03%	1.97%
Colfondos	0.80%	2.20%
Colpensiones	1.09%	1.91%

Ahora bien, en un traslado normal los valores que se entregan a la nueva administradora (en este caso, Colpensiones), corresponden a: (i) el capital ahorrado en la cuenta individual más los rendimientos generados, (ii) los aportes realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima también con sus rendimientos.

No es objeto de traslado el valor del bono pensional, en la medida en que no se ha efectuado su pago o con el bono pensional tipo A pagado al RAIS no se financian las pensiones del RPMPD, pues el fundamento normativo que da lugar a la expedición del bono, resulta ser precisamente la pertenencia a uno u otro régimen. Tampoco se traslada el valor de los costos de administración, en la medida en que se consumieron en las actividades de la administradora como son la creación de la cuenta, la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en mora, la administración financiera de recursos, la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y los pagos de la nómina de pensionados, entre otros.

Tampoco es objeto de traslado el porcentaje de los recursos destinados al pago de los seguros previsionales, pues con ellos se le pagó a la aseguradora la prima que protege al afiliado y sus beneficiarios, por el periodo de cobertura, de las contingencias derivadas de la invalidez y la sobrevivencia. En este punto es de recordar, que, si una persona se traslada de régimen, posteriormente es calificada por la nueva administradora, y la Fecha de Estructuración de la Invalidez (FEI) es anterior a la fecha de traslado, corresponderá conocer del trámite de pensión de invalidez a la administradora de pensiones en la que se encontraba afiliada dicha persona al momento en que ocurre el siniestro, pues fue esa entidad la que recibió el pago del aseguramiento.

Por otra parte, en un traslado por recuperación de régimen de transición, el traslado es diferente en la medida en que, si el ahorro en el RAIS no fuera equivalente al que se hubiera efectuado en el RPMPD, el afiliado debe pagar la diferencia entre lo ahorrado entre el Régimen de Ahorro Individual y el monto total del aporte legal correspondiente, en caso que hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media, lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por la jurisprudencia constitucional ya reseñada. Además de lo anterior, debe efectuarse el

traslado del capital ahorrado y del aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con sus respectivos rendimientos.

Finalmente, frente a la pregunta de si los valores trasladados del RAIS al RPMPD son equivalentes a los que se hubieren aportado o generado en caso de haber estado afiliado siempre al Régimen de Prima Media, es necesario aclarar que esta regla solo se aplica por mandato particular de la Corte Constitucional, frente a los beneficiarios del régimen de transición, para quienes si es posible que en un periodo determinado de tiempo, los recursos cotizados en el RAIS no sean equivalentes a lo que hubieran ahorrado en el RPMPD, debido a las fluctuaciones del mercado, evento en el cual debe hacerse uso de la regla consagrada en la Sentencia SU-062 de 2010.

d. ¿En qué tipo de gastos de administración o asociados, -de seguros, por ejemplo-, incurre una entidad administradora de cada uno de los regímenes a lo largo de la permanencia de un afiliado y/o pensionado, que deban ser considerados al momento de ordenar un traslado?

La distribución del 3% de los gastos de administración y aseguramiento actual en las administradoras del RAIS y Colpensiones, es la siguiente:

Administradora	% Administración	% Aseguramiento
Old Mutual	0.90%	2.10%
Protección	0.97%	2.03%
Porvenir	1.03%	1.97%
Colfondos	0.80%	2.20%
Colpensiones	1.09%	1.91%

Como se indicó en la repuesta anterior, con el porcentaje establecido para los costos de administración, las administradoras de pensiones, incluida Colpensiones, pagan la creación de la cuenta, la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en mora, la reconstrucción de la historia laboral para bono pensional, la administración financiera de recursos (mesa de dinero o mesa de inversión), la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y los pagos de la nómina de pensionados, entre otros,

Por otra parte, el porcentaje destinado al aseguramiento del afiliado frente a los riesgos derivados de la invalidez y la sobrevivencia, que en Colpensiones corresponde a un 1.91%, se destina a capitalizar los fondos de invalidez y sobrevivientes, pues con ellos se financian las pensiones de invalidez y sobrevivencia de los afiliados que incurran en alguna de estas contingencias, siempre que cumplen las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha del siniestro y demás requisitos legales. Mientras que en el Régimen de Ahorro Individual ese porcentaje se emplea para pagar a las aseguradoras del mercado, la prima del seguro previsional, mediante el cual se garantiza al afiliado que haya cumplido las 50 semanas de cobertura en los tres años anteriores a la fecha de siniestro y demás requisitos legales, que la aseguradora COMPLETE el capital que sea necesario para financiar su pensión de invalidez o sobrevivencia.

Ahora bien, al momento del traslado, los valores relacionados con los seguros (que ya fueron cubiertos) y gastos por administración (por los periodos transcurridos), no forman parte del monto ahorrado para la pensión, y, por tanto, estos valores no deben considerarse recursos a trasladar, pues tuvieron como objeto sustentar la operación de las administradoras y la financiación de las pensiones de invalidez y muerte.

SEGUNDO EJE TEMÁTICO



- a. ***¿Cuáles son los datos de litigiosidad judicial en materia de anulación de traslado de régimen pensional para obtener la pensión de vejez? Tener en cuenta como criterios relevantes (i) casos iniciados antes de pensionarse y después de haberse pensionado; (ii) caracterización del sujeto que pretende el traslado -edad, género, diferencia estimada en el monto de la pensión, y acceso a la pensión en cada régimen (por ej. beneficiarse de régimen de transición, entre otras)-; y (iii) casos en los que el litigio se inició faltando 10 años o menos para pensionarse y aquellos en los que restaba un lapso superior para adquirir la pensión.***

Conforme a los datos remitidos por Colpensiones, a esta cartera ministerial, encontramos, con corte a agosto de 2021, alrededor de 43.277 demandas de afiliados por nulidad de traslado, de las cuales han finalizado aproximadamente 11.104 procesos, con un porcentaje de sentencia desfavorable para Colpensiones del 92.3% (10.248). Sin embargo, conforme a los datos de las AFPS, los procesos llegan a ser poco más de 50.000, de los cuales miles de ellos no le han sido notificados a Colpensiones.

Con respecto a las demandas de pensionados, teníamos entendido que ascendían a 1200 aproximadamente, que han venido creciendo exponencialmente (1900), como consecuencia de las nuevas sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y de algunos tribunales y jueces de instancia.

Es importante señalar en este punto que esta cartera ministerial conoce los datos generales de litigiosidad reportados por Colpensiones. Sin embargo, los datos exactos de edad, género, diferencia estimada en el monto de la pensión entre regímenes, régimen de transición y los casos en los que el litigio se inició faltando 10 años o menos para pensionarse, y aquellos en los que restaba un lapso superior para adquirir la pensión, deben ser suministrados por las administradoras de pensiones directamente.

No obstante lo anterior, de las bases de datos con las que fueron realizadas las proyecciones del efecto fiscal, se encuentra que no todos los afiliados son afiliados lego⁴. La gran mayoría de los afiliados que hoy están demandando, devengan entre 4 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y son los que generan el 82.2% del déficit fiscal de la nulidad de afiliación, es decir, aproximadamente 29 billones de pesos del total de 35 billones.

De otra parte, al estudiar algunas casuísticas de la solicitud de ineficacia y nulidad de afiliación, se encuentra que la mayoría de demandantes son personas con cargos importantes en la empresa privada o en el sector público, quienes difícilmente pueden alegar la falta de información como excusa para no haberse traslado antes del periodo de carencia. En este punto es preciso recordar que, entre los demandantes hay congresistas, secretarios generales de entidades públicas, jueces, funcionarios públicos de nivel directivo del sector nacional, gerentes y trabajadores de los fondos de pensiones, agentes comerciales de las AFP, gerentes de bancos, entre otros.

Por lo anterior, resulta inequitativo que se haya trasladado la carga de la prueba al Fondo de Pensiones, en la medida en que los afiliados no son afiliados lego, pero además pudieron haber solicitado la información necesaria para efectuar su traslado de régimen en tiempo, y no lo hicieron, haciendo creer que toda la responsabilidad recae en el fondo de pensiones, cuando en realidad no hicieron el menor esfuerzo para informarse de un régimen u otro, y esperaron el último momento para saber cuál era la opción que más les beneficiaba, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del fondo común de Colpensiones.

- b. ***Teniendo en cuenta las anteriores cifras, (i) ¿cuáles son las valoraciones de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que se estiman frente al eventual traslado de régimen pensional, por anulaciones judiciales decretadas en favor de personas a las que les resta menos de 10 años para pensionarse y de aquellas que ya están gozando de la pensión? Explicar las fuentes, formulas y demás criterios relevantes para la comprensión del diagnóstico; y (ii) ¿cuál es el efecto diferencial***

⁴ Entiéndase por afiliado lego la caracterización de aquellas personas que no tienen conocimiento ni experiencia sobre un tema particular.

que el impacto fiscal podría tener sobre grupos económica o socialmente vulnerables (por ejemplo, efecto diferenciado por rangos salariales y género)?

1. Impacto por procesos judiciales en curso vs sffiados a los que les falta menos de 10 años para cumplir la edad mínima

En el siguiente cuadro se presenta una proyección del impacto por efecto de los procesos judiciales en curso, a partir de la información reportada por Colpensiones, con corte a agosto de 2021, versus el impacto estimado si la jurisprudencia vigente se extendiera a un porcentaje de la población que está afiliada al RAIS y que le faltan menos de 10 años para pensionarse.

	Impacto estimado 43.277 procesos	Total de la población afiliados al RAIS que les faltan menos de 10 años para pensionarse: 478.000	Efecto fiscal
Número de demandas	43.277 presentadas	223.306 Proyectadas que se presentarían	
Número demandas con sentencia desfavorable, ordenado nulidad de afiliación al RAIS	39.941 (Porcentaje de pérdida 92.4%)	223.306 (Porcentaje de pérdida es del 100%)	
Número de personas que se trasladan por efecto de la sentencia, que se pensionarían en Colpensiones	23.565	131.751	
Valor de los ingresos a Colpensiones por trasladado de las cuentas individuales (\$Billones)	5,3	29,4	Disminuye el déficit de la Nación
Valor del menor pasivo por bonos pensionales Tipo A anulados netos por los traslados (\$Billones)	1,8	9,9	Disminuye el déficit de la Nación
Valor del pasivo pensional de las pensiones reconocidas en el RPM, por efecto de los traslados (\$ Billones)	12,8	71,8	Aumenta el déficit de la Nación
Valor de las indemnizaciones sustitutivas de afiliados trasladados al RPM (\$ Billones)	0,4	2,5	Aumenta el déficit de la Nación
Valor del impacto fiscal neto (\$ Billones)	6,3	35,0	Total del déficit para la Nación

Elaborado por MHCP, DGRESS. Fuentes: Colpensiones, Superintendencia Financiera.

El impacto fiscal neto estimado por efecto de los procesos judiciales en curso es de \$6,3 billones en valor presente de 2021 y representa un 18% del impacto total estimado que puede llegar a ser de \$35,0 billones de considerarse un aproximado de223.305 demandantes.

También es de anotar que el impacto fiscal de estos traslados está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben, en la medida en que, en el escenario presentado, el conjunto de los afiliados con aportes de más de 4 SML hasta 25 SML, que representan el 25,5% de la población demandante, es decir alrededor de 55.826 de un total de demandantes de 223.305, recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es 29 billones del total del déficit de la Nación aquí calculado.

A continuación, se hace una explicación de las fuentes, las fórmulas y los principales criterios y variables aplicados:

Fuentes

La fuente de estadísticas de afiliados y pensionados del RAIS y de Colpensiones es la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de la información anonimizada de las entidades que supervisa.

La fuente de la información estadística de procesos judiciales en curso es Colpensiones.

Fórmulas

Las siguientes fórmulas fueron utilizadas para la estimación del impacto del traslado de afiliados. .

En particular, la siguiente fórmula se utiliza para estimar el pasivo total por efecto de la pensión de un **afiliado** que se traslada a Colpensiones y se proyecta que va a reunir los requisitos para pensión:

$$\text{Pasivo total} = \text{Ingreso Base} * \text{Tasa de remplazo proyectada} * \text{Factor actuarial}$$

Ahora bien, el traslado extemporáneo implica a su vez la anulación del bono pensional si el afiliado tenía derecho al mismo y al traslado del valor acumulado de la cuenta de ahorro individual hacia Colpensiones, incluyendo, además, los aportes efectuados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de manera que para obtener el pasivo neto a cargo de Colpensiones al pasivo total deben restársele estos conceptos:

Pasivo Neto pensión

$$= \text{Pasivo total} - \text{Bono pensional anulado} - \text{Saldo de la cuenta individual}$$

En donde el saldo positivo del pasivo neto es el subsidio a cargo de Colpensiones. Es importante precisar que todos estos montos se presentan en valor presente al momento de cumplir la edad mínima para obtener la pensión.

En el caso de una persona que se traslada y no alcanza a reunir las semanas para pensionarse, Colpensiones reconoce una indemnización sustitutiva, de manera que el efecto fiscal es:

Pasivo Neto indemnización

$$= \text{Devolución de saldos} - \text{Bono pensional anulado} \\ - \text{Saldo de la cuenta individual}$$

En este caso de la indemnización, el pasivo neto puede ser negativo, lo que significaría un efecto fiscal a favor de Colpensiones.

La suma de los valores individuales de pasivo neto así obtenidos corresponde al impacto fiscal de las personas incluidas en la estimación.

Por otra parte, en el caso de los **pensionados** que se trasladan del RAIS a Colpensiones, en las respuestas a las tutelas se utiliza la información reportada en los antecedentes presentados para estimar los subsidios generados de cada caso individual. Para el cálculo global del traslado de pensionados, al no contarse con información individualizada, el impacto se calcula de manera global y aplicando promedios a partir de las estadísticas publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este caso el subsidio a cargo de Colpensiones por las mesadas posteriores al traslado se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Subsidio pensionado} = (\text{Mesada Colpensiones} - \text{Mesada RAIS}) * \text{Factor actuarial}$$

En donde el saldo positivo representa el subsidio a cargo de Colpensiones. Si se aplica lo dispuesto en un fallo reciente del Juzgado 3° Laboral del Circuito de Cali, a este subsidio habría que restarle los valores de las mesadas ya pagadas, el valor adicional que hubiera tenido la pensión al ser reconocida en Colpensiones y el traslado del saldo disponible en la cuenta individual del pensionado en el RAIS, de manera que se aplicaría la siguiente fórmula:

$$\text{Subsidio neto} = \text{Subsidio pensionado} - \text{traslado de saldo cuenta} - \text{mesadas anteriores}$$

En donde el saldo positivo representaría el subsidio a cargo de Colpensiones y los valores se presentan en valor presente a la fecha en que se hace efectivo el traslado de la pensión. Por tanto, el contenido de esta fórmula puede variar dependiendo de las exigencias de los fallos presentados.

Criterios y/o variables aplicados o tenidos en cuenta

Como puede verse en las fórmulas anteriormente expuestas, las variables aplicadas incluyen:

Ingreso Base: Se toma la información disponible de ingreso de los últimos 10 años reportada en la base de datos.

Tasa de remplazo proyectada: Se estima a partir del número de semanas cotizadas reportado en la base de datos y del número de semanas que se espera aporte en adelante la persona, a partir de su comportamiento histórico de cotización. Se aplica la fórmula de tasa de remplazo que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

Factor actuarial: Se puede entender como capital necesario, medido en número de mesadas, que con los rendimientos a la tasa proyectada alcanza a cubrir los pagos de la pensión durante la vida esperada de los beneficiarios. En este caso se calcula a partir de las tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera de Colombia, suponiendo que al morir cada pensionado tiene un cónyuge que lo sustituye en el disfrute de la pensión. Para los hombres el cónyuge se supone 5 años menor y para las mujeres se supone 5 años mayor.

Bono pensional anulado: El valor del bono pensional reportado en la base de datos es actualizado hasta la fecha esperada de corte del cálculo y se supone que es un valor inicialmente previsto que la Nación ya no debe pagar por efecto del traslado del afiliado a Colpensiones.

Saldo de la cuenta individual: Corresponde al monto acumulado en la cuenta individual del afiliado por efecto de los aportes que ha efectuado al RAIS y sus respectivos rendimientos financieros, además de los recursos aportados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El total de estos recursos es trasladado a Colpensiones al hacerse efectivo el traslado del afiliado.

Finalmente, en cuanto a los criterios aplicados para definir la población que se incluye en la estimación del impacto por los traslados, cabe referirse a las premisas expuestas en el literal a) del eje temático 2. **Impacto fiscal por el traslado de afiliados que ya se han pensionado en el RAIS**

En el caso de los pensionados hay cuatro diferentes casuísticas, de las cuales se procede a hacer un breve resumen y exponer sus efectos sobre el Sistema General de Pensiones y su equilibrio:

1. Mediante providencia número SL373-2021, la Corte Suprema indica que no procede la nulidad de traslado, en la medida en que *el pensionado se encuentra en una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones. (...).*

Sin embargo, acto seguido el Alto Tribunal indica que, en todo caso, *“... el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.”*

Con lo anterior, la Corte Suprema desconoce el precedente de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C-086 de 2002, mediante la cual indica, que *“no puede haber desconocimiento del derecho*



*a la igualdad en el caso de las normas acusadas pues la Ley 100 de 1993 contiene una regulación diferente para cada uno de los regímenes pensionales, apoyada en el principio de la libre elección que permite a los afiliados escoger el subsistema que más se ajuste a sus necesidades, de tal suerte que el futuro pensionado se somete por su propia voluntad a un conjunto de reglas diferentes para uno y otro régimen, y **simplemente se hará acreedor a los beneficios y consecuencias que reporte su opción.*** (negrilla fuera de texto)

Ahora bien, en la medida en que mediante la sentencia anteriormente referenciada se generaliza la idea de que la falta de información genera un daño por culpa, desconoce por una parte la máxima según la que la Ley es de público conocimiento y por otra parte, el deber de diligencia y responsabilidad propia del afiliado, así como la normatividad vigente para la época del traslado sobre la información a entregar por parte de las administradoras en relación con el sistema, ignorando el hecho de que los demandantes en la mayoría de los casos no corresponden a afiliados o pensionados lego, sino profesionales con altos cargos en la empresa privada o en el sector público, incluso asesores del sector pensional, que mal pueden alegar la falta de información como excusa para no haberse trasladado antes del periodo de carencia.

Como consecuencia se puede observar que los pensionados y los afiliados, con base en esta sentencia, han iniciado una cantidad considerable de demandas buscando la indemnización por daños y perjuicios, con el agravante de que el hecho causante no debe probarse, pues conforme con la decisión del Alto Tribunal, el solo hecho de no haber recibido asesoría en las condiciones normativas actuales, y no bajo las normas vigentes en su momento, resulta prueba suficiente de la culpa de la Administradora de Pensiones, desconociendo que el afiliado en razón de sus libertades individuales pudo haber acudido, antes del inicio del periodo de carencia, a cualquier instancia dentro de la AFP, como el defensor de consumidor financiero, o fuera de ella (por ejemplo al Ministerio de Trabajo o la Superintendencia Financiera de Colombia), para informarse de las condiciones pensionales en uno u otro régimen o pudo haber empleado herramientas diferentes como la opción de retracto o incluso el propio traslado antes de ingresar en el periodo de carencia.

Ahora bien, en caso de generalizarse esta práctica, se pondría en riesgo la estabilidad del Sistema General de pensiones, pues, en el caso hipotético de la liquidación de las AFP estaríamos ante un sistema puramente de prestación definida, lo que llevaría a la Nación a niveles de endeudamiento similares a los que tenía antes de la Ley 100 de 1993, además de amparar un sistema pensional inequitativo, en donde las personas de mayores ingresos reciben la mayor parte de los subsidios, como se verá más adelante.

2. En la segunda casuística que hemos conocido, se puede observar que el juez ordena a la AFP que pague el valor de la mesada pensional que el afiliado hubiera tenido en el RPPD, de haberse pensionado en ese régimen.

Esta sentencia, desconoce que los regímenes pensionales son diferentes y las prestaciones son diferentes, vulnerando el precedente contenido en la sentencia C 086 de 2002, ignorando las diferencias en la construcción financiera y actuarial de la prestación, y los postulados legales establecidos en la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, dado que en la cuenta de ahorro individual del pensionado solo se encuentran los saldos para reconocer la pensión que le fue reconocida, el resto de recursos para pagar la pensión que hubiera tenido en el RPMPD, deberán provenir de la administradora, lo que generará la posible liquidación y quiebra de las AFP, y, por tanto, el desequilibrio total del Sistema General de Pensiones, en la medida en que, como se indicó anteriormente, con la desaparición de los Fondos de Pensiones, la Nación volvería a niveles de endeudamiento similares a los de antes de Ley 100 de 1993.

- Como tercera casuística, encontramos reciente sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala de Decisión Laboral⁵, en la que, en el caso de una pensionada bajo la modalidad de renta vitalicia, el fallo indica que la aseguradora previsional debe devolver a Colpensiones el total de la suma que la fue trasferida para pagar la pensión reconocida en el RAIS, con el fin de que Colpensiones asuma la nueva pensión. Lo anterior, desconociendo la jurisprudencia vigente sobre régimen de transición y sobre la sentencia de la Corte Suprema en la que indica que las personas que están pensionadas ya no pueden ser objeto de nulidad de afiliación, dado que el pensionado se encuentra en "*...una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*", e igualmente, desconociendo las normas propias de los esquemas de aseguramiento y la forma en la que se diseña el amparo y cobertura de los riesgos, obligando a la devolución de unos recursos que ya fueron entregados a título de prima, y, que, por lo tanto, fueron invertidos por la aseguradora en la constitución de las reservas propias del sector asegurador.
- Finalmente, encontramos la cuarta sentencia en la que el Juzgado Laboral N°3 del Circuito de Cali, mediante fallo de enero de 2020, ordena: (i) que la AFP devuelva a Colpensiones el valor de las mesadas pagadas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS); (ii) que se traslade a Colpensiones del saldo de la cuenta de ahorro individual (CAI) del pensionado; (iii) que Colpensiones pague retroactivamente la diferencia entre la pensión otorgada en el RAIS y la pensión que se estima hubiera obtenido el afiliado en caso de pensionarse en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) administrado por Colpensiones; y (iv) que Colpensiones asuma el costo futuro de la pensión que se debe reconocer el RPMPD y por ende de los subsidios que se requerirían para hacer efectivo el pago de estas pensiones en ese régimen.

Ahora bien, si se aplican las sentencias de las casuísticas 3 y 4 a la totalidad de las pensiones de Retiro Programado y de Rentas Vitalicias reconocidas en el RAIS, se evidencia que la población potencial que podría demandar es de 55.587 personas pensionadas en Retiro Programado y 9.315 personas pensionadas en Renta Vitalicia.

En ese sentido, de "normalizarse" la jurisprudencia que permite la nulidad de afiliación de los pensionados en las Modalidades de Retiro Programado y Renta Vitalicia, se puede observar los siguientes efectos sobre el Sistema General de Pensiones:

		Retiros programados	Rentas vitalicias	Total	Efectos sobre el Sistema General del Pensiones
1	Número estimado de demandas	55.587	9.315	64.902	
2	Número de demandas con sentencia desfavorable, ordenando nulidad de afiliación al RAIS	55.587	9.315	64.902	Por la evolución de la Jurisprudencia actual, asumimos que el porcentaje de pérdida es del 100% de los procesos.

⁵ RADICACIÓN 76001310501720170003501.



3	Valor de los ingresos a Colpensiones por el pago que deben hacer las AFP a Colpensiones de las mesadas pensionales que ya le fueron pagadas al pensionado	\$10,8 Billones	\$1,6 Billones	\$12,4 Billones	<ul style="list-style-type: none">• La liquidación y quiebra de las AFP y aseguradoras, con las consecuencias que esto puede traer para la marcha y la estabilidad del Sistema General de Pensiones, que regresaría a niveles de endeudamiento similares a los de antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.• El precedente que representaría para el sistema financiero y el sector empresarial colombiano.
4	Valor de los ingresos a Colpensiones por el traslado del saldo de las cuentas individuales	\$17,6 Billones	\$2,7 Billones	\$20,3 Billones	En el corto plazo aliviaría la presión fiscal actual del fondo común de Colpensiones.
5	Valor del pasivo pensional de las pensiones inicialmente reconocidas en el RAIS, por efecto de las mesadas retroactivas que debe reconocer Colpensiones frente a esos pensionados	\$10,4 Billones	\$1,6 Billones	\$12,0 Billones	Déficit a cargo de la Nación.
6	Valor del pasivo pensional de las pensiones futuras en el RPM, por efecto de los traslados	\$23,6 Billones	\$3,2 Billones	\$26,8 Billones	Déficit a cargo de la Nación.
7	Valor del impacto fiscal neto (Sin incluir el punto 3.)	\$16,4 Billones	\$2,1 Billones	\$18,5 Billones	

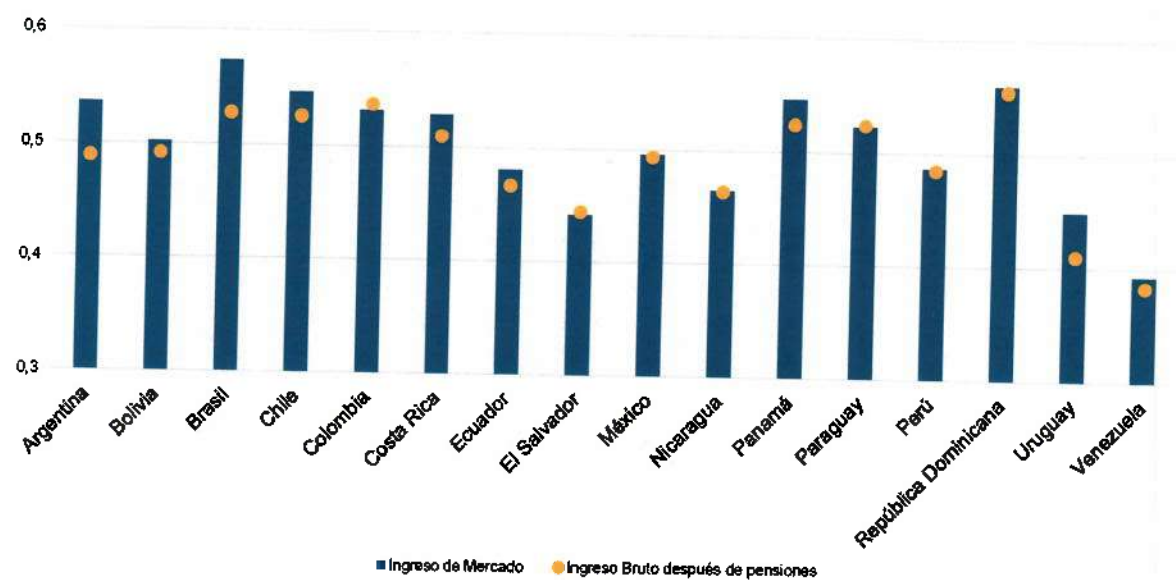
Es de señalar que el valor actualizado de \$10,8 billones de pesos que deberían pagar las AFP y los \$1,6 billones que deberían pagar las aseguradoras, a Colpensiones, por las mesadas pensionales que ya le fueron pagadas al pensionado en el RAIS, no fue incluido como alivio al déficit de la Nación, en la medida en que no van a poder pagarlo e implicaría la quiebra de las AFP, con las consecuencias que esto puede traer para la marcha y la estabilidad del Sistema General de Pensiones y el precedente que representaría para el sistema financiero y el sector empresarial colombiano.

Ahora bien, debe considerarse que estas proyecciones no toman en consideración las pensiones en la modalidad de retiro programado causadas con posterioridad a 2020, ni las reconocidas en la modalidad de renta vitalicia a las que hace referencia la tercera casuística antes mencionada, las cuales, dependiendo de la evolución que tenga la jurisprudencia, podrían también generar un impacto adicional muy significativo, sobre las finanzas del estado, las administradoras de Fondos de Pensiones y las aseguradoras de rentas vitalicias.

(ii) ¿cuál es el efecto diferencial que el impacto fiscal podría tener sobre grupos económica o socialmente vulnerables (por ejemplo, efecto diferenciado por rangos salariales y género)?

Para contestar este punto cabe considerar que en Colombia la desigualdad en la distribución de los ingresos golpea de manera importante a la población en edad de pensión. En efecto, debido al diseño legal e institucional actual del Sistema Pensional, la distribución de subsidios no contribuye a mejorar este problema. Al respecto en el siguiente gráfico, elaborado por la CEPAL, puede verse una comparación del caso colombiano con respecto a otros países de Latinoamérica:

Gráfico - Coeficiente Gini antes y después de transferencias pensionales



Fuente: CEPAL

Al respecto, Colombia y el Salvador son los únicos países en los que la distribución del ingreso, medida a partir del coeficiente Gini, se hace más desigual después del pago pensiones, en la medida en que la redistribución favorece a las personas de más altos ingresos al obtener mayores subsidios implícitos en las pensiones reconocidas en el RPMPD:



Cálculos DGRESS-MHCP

Lo anterior, se puede ver de manera más detallada en el siguiente cuadro, que muestra cómo los subsidios que constituyen cerca del 45% del Presupuesto General de la Nación, no están correctamente focalizados en algunos sectores. En especial, en el sector pensional, los subsidios benefician a los grupos de mayores ingresos, agravando la desigualdad en lugar de disminuirla, incluso al incluir los beneficiarios del Programa Colombia Mayor, que actualmente tiene una cobertura cercana a 1,7 millones de adultos mayores de menores ingresos:

Cuadro - Distribución de subsidios sociales por quintil de ingreso

Sector	Magnitud subsidio (% PIB)	Focalización				
		1	2	3	4	5
Educación	2,97%	25,7%	23,4%	21,4%	18,1%	11,4%
Pensiones (Con Colombia Mayor)	2,31%	4,3%	7,8%	13,7%	23,4%	50,8%
Salud	1,85%	33,7%	23,6%	19,7%	15,1%	8,0%
Servicios públicos	0,66%	21,8%	23,2%	22,9%	20,4%	11,7%
Atención a la pobreza	0,46%	33,4%	23,0%	15,0%	17,2%	11,5%
Atención a la primera infancia	0,42%	32,0%	27,2%	22,1%	15,4%	3,22%
Vivienda	0,22%	11,3%	22,5%	29,6%	26,6%	10,0%
Otros	0,16%	48,7%	35,7%	7,5%	5,4%	2,6%
Distribución total	9,0%	22,4%	19,9%	18,8%	18,8%	20,2%

Fuente: MHCP; DNP; 2015

Como puede verse, con las normas actuales, el 50,8% de los subsidios transferidos por parte del Sistema Pensional está focalizado al quintil 5, es decir, que beneficia al 20% de la población con mayores ingresos de personas en edad de pensión, en tanto que el quintil 1, que es el de menores ingresos, recibe apenas el 4,3% de los subsidios, siendo en su mayoría un subsidio de menor valor como los del programa Colombia Mayor.

Ahora bien, volviendo al tema de los traslados extemporáneos, cabe anotar que, con la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, se agrava el problema de la focalización regresiva de los subsidios de la Nación a la población en edad de pensión. Entonces, la pregunta que debemos planteamos en este punto es: ¿A qué población le conviene la nulidad o ineficacia de afiliación?

Así las cosas, la posibilidad de efectuar traslados extemporáneos **no favorece a los afiliados que tienen la expectativa de pensionarse con una mesada de un salario mínimo**, ya que ellos obtendrán el mismo monto de mesada en cualquier régimen. De hecho, a estos afiliados, les conviene pensionarse en el RAIS con 1150 semanas y no con 1300 semanas exigidas en el RPMPD.

Tampoco **favorece, al grupo de afiliados sin expectativa de pensionarse**, pues en el RAIS obtendrán una devolución de ahorro con rendimientos, mientras que en el RMPPD recibirán una indemnización sustitutiva que es la devolución de cotizaciones indexadas con el IPC, siendo, por tanto, una indemnización de menor valor.

Por el contrario, **favorece a los afiliados que en Colpensiones recibirán un subsidio implícito en sus pensiones, en especial a los afiliados con salarios superiores a 4 millones pesos**, quienes recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es, \$29 billones del total de \$35 billones de déficit fiscal de la Nación.

Es importante anotar que el sesgo regresivo de los subsidios se replica también al interior de la población que se traslada. Para ilustrar este punto se muestra el impacto fiscal estimado y los respectivos subsidios ocasionados por estos traslados extemporáneos, tal como se presentan al separar los beneficiarios por nivel de ingresos:

Rango Salarial	Valor Presente pensiones e indemnizaciones	Saldos trasladados hacia Colpensiones	Flujo Neto de Bonos pensionales	Valor Presente Impacto fiscal	Distribución % de los subsidios	N° estimado de traslados con expectativa de pensión	N° estimado de traslados sin expectativa de pensión	N° estimado Total de traslados	Distribución % de las personas trasladadas
	(\$Bills)	(\$Bills)	(\$Bills)	(\$Bills)					
1 a 2 SML	11,7	-7,7	-3,2	0,8	2,3%	53.496	62.259	115.755	51,8%
2 a 3 SML	7,2	-3,4	-1,1	2,8	7,9%	22.928	10.169	33.097	14,8%
3 a 4 SML	5,4	-2,3	-0,7	2,4	6,9%	12.239	5.173	17.412	7,8%
4 a 5 SML	4,8	-1,9	-0,6	2,3	6,4%	8.358	3.277	11.635	5,2%
5 a 10 SML	19,1	-6,7	-2,1	10,2	29,1%	21.147	7.092	28.239	12,6%
10 a 25 SML	26,2	-7,4	-2,2	16,5	47,3%	13.583	3.585	17.168	7,7%
TOTAL	74,4	-29,4	-9,9	35,0	100%	131.751	91.555	223.306	100%

En este sentido, se reitera que en el escenario presentado, el conjunto de los afiliados con aportes entre 1 SML y 4 SML, que son el 74,5% del total (223.306), solo reciben el 17,2% de los subsidios que generan el impacto fiscal proyectado por este ministerio (35 billones), es decir, recibirán solo \$6.0 billones; en tanto que los afiliados con aportes entre 4 y 25 SML, que son el restante 25,5% de los afiliados (es decir unos 55.826 de un total de demandantes de 223.305), recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es \$29 billones del déficit fiscal de la Nación.

Lo anterior, demuestra la regresividad de los subsidios generados por la ineficacia o nulidad de afiliación⁶, considerando adicionalmente que las personas que se pretenden trasladar no han contribuido a la financiación y estabilidad del régimen del que ahora pretenden beneficiarse.

Finalmente, pero no menos importante, la ineficacia o nulidad de afiliación **desfavorece a las personas que van a ser más vulnerables en la edad de pensión**, porque con el déficit creado por la nulidad de traslados de **\$53.5 billones de pesos** (costo fiscal por afiliados y pensionados) **se podrían cubrir a 733.000 nuevos beneficiarios de Colombia Mayor** (adicionales a los 1.700.000 beneficiarios actuales) y el valor para todos los beneficiarios se incrementaría de **\$80.000 a \$145.000** que corresponde a la línea de pobreza extrema definida por el DANE para el año 2020.

Así las cosas, a los afiliados que les conviene un traslado al RPMPD, es a los afiliados que en Colpensiones obtendrán un subsidio implícito en sus pensiones, siendo los más beneficiados las personas de mayores ingresos y no los afiliados que pertenecen a las poblaciones que van a ser más vulnerables en la edad de pensión.

c. *¿Existe un impacto fiscal y financiero diferencial entre las anulaciones de traslados que operan sobre las personas a las que les falta menos de 10 años para pensión y las que se encuentran pensionadas?*

⁶ Cabe anotar que este escenario supone que se trasladan hacia Colpensiones:
 -El 90% de los afiliados con salario mayor a 1,6 SML.
 -El 45% de los afiliados con salario inferior a 1,6 SML.
 -El 30% de los afiliados que tienen salario a 1 SML y no tiene expectativa de pensión.

	Procesos de Pensionados	Procesos de afiliados
Número de demandas proyectadas	64.902	223.306
Número de demandas con sentencia desfavorable	64.902	223.306
Déficit fiscal	\$18,5 billones	\$35 billones
Pago anual promedio a en los primeros 5 años	\$739,000 millones	\$250.000 millones

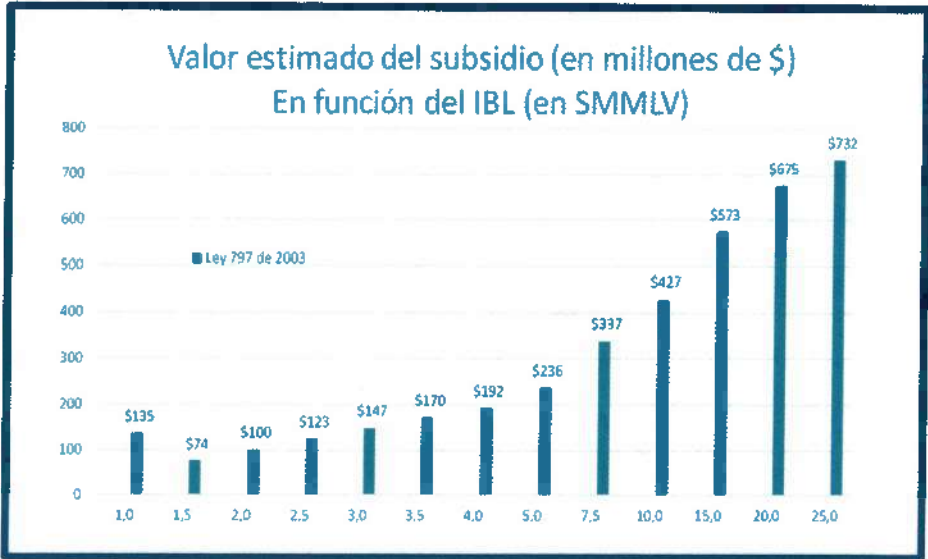
La diferencia en el flujo de pagos a partir del 2022 se debe al momento en que se hace efectivo el pago de las mesadas en cada uno de los dos casos. Al respecto, el impacto financiero y fiscal del traslado de personas ya pensionadas, tiene un efecto fiscal mediato, precisamente en la medida en que se trata de pensiones cuyas mesadas pasarían a pagarse inmediatamente en el Régimen de Prima Media.

Por el contrario, en el caso de las personas a las que les faltan menos de 10 años, los pagos de mesadas van ocurriendo solo a medida que se cumplen las edades de pensión y se completan las semanas requeridas, lo que da un plazo cercano a 10 años para llegar al nivel máximo de pagos pensionales de este grupo.

En todo caso, ambos grupos generarían a partir del 2022 una presión adicional sobre el fondo común de Colpensiones, de \$990 mil millones de pesos adicionales.

d. *¿Cómo valora la anulación judicial de traslados de régimen objeto de discusión, en términos de accesibilidad y adecuación del derecho a la pensión de vejez?*

- La restricción de los últimos 10 años antes de la edad de pensión para trasladarse de régimen, es una disposición que ya ha sido evaluada por la Corte Constitucional, que no afecta el derecho pensional, ni la libertad de elección de los afiliados, enmarcándose en la amplia potestad de configuración legislativa que le asiste al legislador en la materia y que fue expedida en defensa del equilibrio financiero del Sistema General de Pensiones.
- Ahora bien, con respecto a la población que le conviene la nulidad o ineficacia de afiliación, es necesario reiterar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no favorece a la población que en la vejez será más vulnerable, sino que beneficia a las personas que devengan más de 4 salarios mínimos, lo cual genera mayor inequidad en el sistema, en la medida en que esa población obtendrá mayores subsidios implícitos en sus pensiones, sin haber contribuido en los últimos 10 años a la financiación del régimen de prima media del que pretenden beneficiarse, veamos:





En ese sentido, como se puede observar en las repuestas de este cuestionario, el conjunto de los afiliados con aportes entre 1 SML y 4 SML, que son el 74,5% del total, solo reciben el 17,2% de los subsidios que generan el impacto fiscal proyectado por este ministerio (35 billones), es decir recibirán solo 6.02 billones, en tanto que los afiliados con aportes entre 4 y 25 SML, que son el restante 25,5% de los afiliados, recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es 29 billones. Esto demuestra la regresividad de los subsidios generados por la nulidad de afiliación, agravada por el hecho de beneficiar a personas que al no haber estado afiliadas en los últimos 10 años antes de pensionarse al RPM, no han contribuido a su financiación ni sostenibilidad, pero si pretenden beneficiarse de dicho régimen.

3. Ahora bien, si bien, en virtud del reparto de cargas públicas, la Nación tiene unas responsabilidades como lo son emitir las normas, los reglamentos y las circulares para el adecuado comportamiento de los actores del sistema, así como asumir el pasivo pensional que le sea asignado por Ley, los afiliados también tienen la responsabilidad de mantenerse informados en virtud de las libertades individuales y del artículo 95 de la Constitución Política que establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución **implica responsabilidades**, por lo cual los afiliados al Sistema General de Pensiones deben asumir las consecuencias de sus actos u omisiones.

En ese sentido, si el afiliado al RAIS por 15 años o más, en todo el tiempo que tuvo para madurar su decisión, no hizo lo posible por informarse acerca de las diferencias entre un régimen u otro, a través de los diferentes canales que tenía a su disposición, como por ejemplo, el defensor del consumidor financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, los Ministerios de Trabajo o Hacienda, ni ejerció el derecho a retractarse de la afiliación, ni intentó devolverse en los 5, 10 o 15 años siguientes a la afiliación, ni hizo uso del periodo de gracia otorgado por la Ley 797 de 2003, no es posible que corresponda a la Nación, que generó reglas claras y comprensibles del sistema, asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por los afiliados ni responder por sus omisiones o inacción.

Entonces, en la medida en que cada afiliado es responsable de mantenerse informado, no le es dable alegar el desconocimiento de las normas como excusa para iniciar un litigio que le permita incumplirlas. Tal afirmación riñe con la presunción legal *juris ignorantia non prodest* consagrada en el artículo 1509 del Código Civil y con lo prescrito en el artículo 9 ibídem según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa.

4. Conforme con lo anterior, la inversión de la carga de la prueba que exonera al afiliado del deber de probar sus afirmaciones, no tiene justificación cuando el afiliado si está en posibilidad de probar (i) que buscó asesoría y no se la brindaron, o (ii) que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión acertada, pues dirimir la discusión jurídica sin que el afiliado que alega la ineficacia o la nulidad compruebe por lo menos que hizo uso los recursos a su alcance para poderse informar debidamente resulta inequitativo, máxime si se tiene en cuenta que no todos los afiliados son legos; por el contrario, la gran mayoría de los afiliados que hoy están demandando, devengan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, son profesionales e incluso ejercen altos cargos en la empresa privada o en el sector público, entre ellos hay congresistas, secretarios generales de entidades públicas, magistrados, jueces, funcionarios públicos de nivel directivo del sector nacional, y de los fondos de pensiones, funcionarios de organismos de supervisión, agentes comerciales de las AFP, gerentes de bancos, entre otros, de quienes se puede suponer un nivel educativo e intelectual suficiente para comprender los efectos de las decisiones adoptadas.



En este sentido, la inversión de la carga de la prueba que obliga a la administradora a probar que no lo engañó, siendo insuficiente probar que otorgó la información correspondiente según las exigencias de la normativa vigente para la época del traslado, viola el derecho a la tutela efectiva que tiene la demandada, toda vez que le impone una carga excesiva, además, porque son deberes de la persona y del ciudadano según lo prescribe la Constitución Política, *“colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia”*.

En razón de lo anterior, en los procesos de anulación o ineficacia de afiliación, se debe lograr, en razón de la dinamización de la carga de la prueba, que cada uno de los contendientes contribuya a que el juez conozca la verdad de los hechos debatidos aportando las pruebas a su alcance, con lo cual el afiliado debe demostrar que buscó asesoría y no se la brindaron, que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión o que en la misma se entregó información falsa o errónea. El afiliado, también debería estar en capacidad de demostrar que hizo uso de los servicios del Defensor del Consumidor Financiero o que elevó derechos de petición ante las AFP, Colpensiones, la Superintendencia Financiera o los Ministerios de Trabajo o de Hacienda, con el fin de conocer las diferencias entre régimen, pero no obtuvo respuesta, pues eso permitirá a los jueces y tribunales laborales, estudiar los casos con base en las pruebas que obren en el expediente..

5. Ahora bien, no puede descartarse que, a pesar de la diligencia del afiliado, pudo no haber sido debidamente asesorado en su traslado al Régimen de Ahorro Individual, que ningún beneficio podía ofrecerle, como es el caso de quien tenía derecho al régimen de transición, o había reunido los requisitos para la pensión o estaba muy cerca de obtenerla por haber cotizado en el RPM el 75% (975 semanas) o más de las semanas necesarias para obtener una pensión en dicho régimen, pues, estos afiliados tenían la expectativa legítima de pensionarse en él, por lo cual nunca debieron trasladarse al Régimen de Ahorro Individual, casos que deben ser analizados a la luz de la jurisprudencia existente en materia de régimen de transición y otros pronunciamientos aplicables.
6. Con respecto a los pensionados bajo cualquier modalidad, ya sea en retiro programado o a través de renta vitalicia, se estima adecuada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de indicar que los pensionados ***“...se encuentran en una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, los intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones...”***. Por ello, bajo ninguna circunstancia debería operar la nulidad o ineficacia de la afiliación en ninguna de las dos modalidades de pensión.

Sin embargo, nos apartamos de sus consideraciones sobre la posibilidad de iniciar procesos indemnizatorios por daños y perjuicios en contra de las AFP, en la medida en que las pensiones fueron reconocidas por solicitud propia del afiliado, quien antes de pensionarse firmó su historia laboral, negoció su bono pensional, escogió la modalidad de pensión y desplegó otra serie de acciones que no permitían inferir que en aquel momento estuviera inconforme con la pensión otorgada por el RAIS o que estuviera desinformado, pues todas sus acciones conducían a lograr la pensión en aquel régimen.

7. Finalmente, en materia de la orden de devolución de recursos que imparte el juez como consecuencia de la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado, en concepto de este Ministerio solo cabe trasladar los recursos acreditados en la cuenta de ahorro individual del afiliado más sus rendimientos y el 1,5% de cotización al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, más sus rendimientos.

No deben ser objeto de traslado el valor de los bonos pensionales que se encuentren acreditados en la cuenta de ahorro pensional del afiliado, porque éstos deben ser reintegrados a sus emisores



conforme las disposiciones que rigen la materia, por dos motivos: (i) porque con bonos A se financian pensiones del RAIS no del RPMPD y (ii) de darse lugar a la nulidad o ineficacia del traslado, tampoco se produce el fundamento fáctico del bono pensiona tipo A⁷, esto es la afiliación al RAIS.

Tampoco pueden ser objeto de traslado los recursos de los gastos de administración porque esos fueron utilizados para la operación normal de la administradora, y son los que hacen posible que los saldos devueltos por el RAIS al RPMPD, incluyan rendimientos. En el mismo sentido, no pueden ser trasladados los recursos empleados para el pago de las primas del seguro previsional, porque ellas ya fueron entregadas a las aseguradoras del mercado y no se encuentran en poder de la AFP, siendo destinadas al cubrimiento del riesgo asegurado.

Téngase en cuenta que las prestaciones que se deriven del acaecimiento de los riesgos de invalidez y muerte deben ser solicitadas ante la entidad administradora a la cual se encontraba afiliado el solicitante a la fecha de ocurrencia de la muerte o de la estructuración de la invalidez. Y en este evento la entidad administradora de pensiones de la cual queda retirada la persona y la compañía de seguros del previsional, tienen a su cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de las prestaciones derivadas de la invalidez y muerte por el periodo pagado, siempre que el afiliado cumpla con los requisitos de semanas cotizadas antes de la fecha siniestro (50 semanas en los tres años anteriores) y demás requisitos legales correspondientes.

CUARTO EJE TEMÁTICO

- a. **Desde la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100 de 1993): (i) ¿ha existido una política pública para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional?; (ii) ¿cuáles han sido sus etapas de acuerdo con la legislación vigente en cada momento?; y (iii) ¿cuáles han sido las responsabilidades y/o competencias asumidas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria), en esta materia?**

Política pública para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional y etapas de acuerdo con la legislación vigente en cada momento

El deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que éstos puedan adoptar una decisión libre sobre su futuro pensional, ha tenido una progresiva evolución desde la expedición de la Ley 100 de 1993, como resultado de una política tendiente a intensificar los deberes de las administradoras del Sistema Pensional para facilitar al afiliado o usuario la toma de una decisión responsable. En esta evolución se pueden distinguir varias etapas según la legislación aplicable.

1. **La primera etapa** se enmarca en lo dispuesto por los artículos 13, literal b), y 271, de la Ley 100 de 1993.

En esta etapa la legislación del Sistema General de Pensiones dispuso que “[l]a selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado”.

Indicando igualmente, que, el empleador, y, en general, cualquier persona natural o jurídica, que impidiese o atentara en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e

⁷ Definiciones del artículo 1 del Decreto 1748 de 1994:

“Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el Decreto ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se trasladen al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.”

“Tipo B (Bonos Pensionales): Designación dada a los regulados por el Decreto ley 1314 de 1994 que se expiden a servidores públicos que se trasladen al ISS en o después de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.”



instituciones del sistema de seguridad social integral, *"se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario."*

Por su parte, no se dispuso en la ley medida alguna referente a la obligación de las administradoras de suministrar información a usuarios y afiliados para facilitar la escogencia del régimen de sus preferencias, ni relativa a la realización de simulaciones pensionales.

Sin embargo, dada la naturaleza de las administradoras de fondos de pensiones, como entidades que hacen parte del sector financiero, es importante indicar que estas se encuentran sometidas a las disposiciones del Decreto 663 de 1993, *«Estatuto Orgánico del Sistema Financiero»*, que, para la fecha, imponía a las entidades vigiladas el deber de *"suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"*.

Al respecto, cabe anotar que el Decreto 663 de 1993 si bien no es una norma que regule específicamente las administradoras de pensiones, cubre a la totalidad de entidades financieras, por lo que los deberes de información impuestos en el citado artículo son deberes generales para garantizar la transparencia de las operaciones financieras de las entidades vigiladas, incluidas dichas entidades administradoras.

Atendiendo el significado de las palabras utilizadas, *"suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"*, se puede evidenciar que, tratándose de administradoras de pensiones en el RAIS, el deber que les asistía contemplaba comunicar al afiliado que buscaba un traslado de régimen, entre otros aspectos, el esquema y características del Régimen de Ahorro Individual, su funcionamiento, y las obligaciones y derechos que adquirirían con su afiliación, las ventajas generales que ofrece este Sistema, la posibilidad que tienen de optar por una pensión a una edad anticipada siempre y cuando cuenten con capital suficiente que les permita financiar una pensión superior al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente al año de 1993, tal como lo establece el artículo 64 de la Ley 100 de 1993; la figura de la Garantía de Pensión Mínima de Vejez a la que tienen derecho en el evento de no cumplir con el capital requerido para acceder a la pensión de vejez, siempre y cuando cumpliera con los requisitos de edad y semanas exigidos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 (1150 semanas de cotización); la posibilidad de obtener unos excedentes de libre disponibilidad; el factor herencia del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual a falta de beneficiarios de Ley, que son los elementos de juicio objetivos y generales que pueden determinar la decisión de optar por la selección del RAIS. A su turno, la conveniencia de la decisión no era para entonces del resorte de la administradora sino responsabilidad del cliente quien, de acuerdo con sus circunstancias, sopesaba, a la luz de la información recibida, la mejor decisión. No le era exigible entonces a la administradora hacer predicciones sobre el futuro pensional del interesado y mucho menos cuantificar el monto definitivo de la pensión, pues ello no solamente excedía el deber de información, sino que en todos los casos dependía de variables aleatorias según las circunstancias del afiliado, ajenas a la administradora.

Por su parte, en el año 1994 se expide el Decreto 692, que regula el derecho de información para las afiliaciones al RAIS, en cuyo artículo 11 dispone cómo debe diligenciarse la selección y vinculación a este régimen; cuál debe ser el contenido del formulario previsto para el efecto por la entonces Superintendencia Bancaria, so pena de no tener validez; y la exigencia de que *"Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora"* y que *"Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda pre-impresa en este sentido."*



En el mismo año se expide el Decreto 1161 que, en materia de traslado de regímenes, con el objeto de proteger la libertad de escogencia dentro del Sistema General de Pensiones, permitió el retracto del afiliado en todos los casos de selección, de una administradora de cualquiera de los regímenes o de un plan o fondo de pensiones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual haya manifestado por escrito la correspondiente selección, dándole espacio a las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, hubieren seleccionado expresamente un régimen de pensiones, quienes podrían ejercer el derecho de retracto dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la vigencia de éste.

Se impuso igualmente el deber de las administradoras de que cuando efectúen procesos de promoción, informen de manera clara y por escrito a los potenciales afiliados el derecho a retractarse.

De manera que, antes del 2009 se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección del régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguno previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez en cada uno de los regímenes como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar orientada a indicar al interesado la conveniencia o inconveniencia del traslado según una valoración de su situación personal y particular, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada, diferente a los formularios que debía suscribir el afiliado, y en los que la normatividad permitió la existencia de leyendas pre-impresas para validar la voluntariedad de la afiliación.

De forma tal que la evaluación sobre la conveniencia del traslado era responsabilidad del interesado, quien tenía el deber de informarse a sí mismo en la medida de sus capacidades, y valorar adecuadamente según su situación personal actual y proyecciones laborales futuras, cual resultaba ser el régimen que mejor respondía a sus intereses.

Es incuestionable que este sistema de información bien pudo dar lugar a decisiones equivocadas, como en los eventos de aquellas personas que, sin advertirlo, perdieron el régimen de transición, o que ya contaban con los requisitos para tener acceso al derecho pensional en el marco del régimen de transición o estaban próximos a cumplirlos, eventos que ya han sido solventados por la jurisprudencia constitucional, al establecer que las personas cobijadas por el régimen de transición pueden en cualquier momento optar por retornar al Régimen de Prima Media, cumpliendo los requisitos ya mencionados.

Por otra parte, en todo caso, es importante considerar que, a juicio de esta cartera, a menos que se determine probatoriamente que la situación era evidente para la administradora y que esta indujo en error o vicio al afiliado, se tendría que probar la falla en la actuación de la administradora, el vicio del consentimiento por parte del afiliado, y/o la información errónea que se le suministro y que el afiliado con el conocimiento propio de la Ley y las alternativas de protección previstas por la norma, para ese momento, como la misma posibilidad de traslado o el retracto, no pudo enfrentar, y que generó lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, para poder alegar que fue engañado o inducido a error por la omisión en la información que era relevante, pues esto pondría en práctica la dinamización de la carga de la prueba.

2. La segunda etapa se inicia con Ley 795 de 2003, continúa con la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010.

Es preciso recordar que, desde la Ley 795 de 2003 se formalizó la figura del defensor del consumidor y se estableció de forma obligatoria para todas las entidades vigiladas por la entonces Superintendencia Bancaria, y se modificó la redacción del EOSF en cuanto a la información a los usuarios, norma que fue desarrollada por el Decreto 690 de 2003.

Ahora bien, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, expedidos en protección de los consumidores financieros, reglamentan ampliamente los derechos de los consumidores, señalan los principios y el contenido básico de la información y establecen expresamente el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones, lo que evidencia la intención del legislador de fortalecer el deber de información, y de darle un alcance diferente, profundizándolo y estableciendo nuevos requerimientos frente a su alcance y forma de asesoría.

Al respecto, en la exposición de motivos de la Ley 1328, se expresó:

“La consagración de un régimen especial dentro del proyecto de reforma financiera, obedece al propósito claro de consolidar la protección al consumidor financiero, entendiendo por este toda persona natural o jurídica que accede a cualquiera de los productos y servicios ofrecidos por las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera. (...) “En tal sentido, efectuada la revisión de las disposiciones que consagran el mencionado régimen, se considera que si bien se ha avanzado, es necesario desarrollar aún más una cultura de protección al consumidor financiero adoptando a nivel legal una compilación breve, pero concisa, de derechos de los consumidores y de los deberes de las entidades. “El régimen propuesto se basa en tres pilares esenciales: El suministro de información, que debe ser entendido como el primer nivel de una verdadera protección ya que propicia la adecuada selección y manejo de servicios financieros, la debida diligencia en la prestación de servicios y la consolidación de la Defensoría del Cliente como institución orientada a la protección del consumidor financiero”.

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009, se expidió el Decreto 2241 de 2010, por el cual se reglamentó el Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General de Pensiones. En sus considerandos se señaló:

“Que para la protección de los afiliados al Régimen General de Pensiones, tanto en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad como en el de Prima Media con Prestación Definida, es fundamental definir claramente sus derechos y deberes para su ejercicio” y “Que las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones deben actuar con profesionalismo para la promoción y prestación de sus servicios, brindando para el efecto la asesoría e información suficiente que permita a los consumidores tomar decisiones”.

Desde entonces se impuso a las administradoras la obligación de realizar una asesoría, bajo el presupuesto de la “información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras (...). Este deber fue expresamente consagrado a partir del 1º de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010, y, en consecuencia, solo a partir de ese momento se hace exigible tal información a las Administradoras de Fondos de Pensiones, pues anterior a ello, aunque les asistía el deber de información no era bajo esas premisas.

El deber de asesoría y buen consejo, con el alcance indicado, nace entonces con la legislación del 2010 y es distinta a la anterior obligación de informar. Así, la obligación de informar impone el deber de comunicar objetivamente los datos relevantes del régimen con el objeto de que el afiliado decida sopesando sus circunstancias cual es la mejor opción; el deber de asesoría y consejo va más allá, porque impone la orientación sobre la conveniencia de la decisión exponiéndole al interesado las ventajas y beneficios, los riesgos, desventajas y consecuencias de una u otra selección, según las circunstancias subjetivas del afiliado. La selección del afiliado sigue siendo libre y voluntaria, pero se toma previo un asesoramiento subjetivo, calificado e imparcial de su conveniencia o inconveniencia, sin que ello implique que se elimina la responsabilidad en cabeza del afiliado, de seleccionar de manera libre y voluntaria, como el único sujeto que conoce la totalidad de las condiciones y preferencias personales, que lo llevan a optar por uno u otro régimen pensional.

En este sentido, la distinción entre un deber y otro consiste en que, mientras el deber de información se cumple suministrando a la parte interesada los datos y circunstancias necesarios para que tome una decisión libre y voluntaria, el deber de consejo implica orientarlo y asesorarlo sobre la conveniencia o inconveniencia del negocio jurídico, valorando los riesgos y beneficios y explicándole las alternativas que tiene para elegir entre un sistema u otro. La decisión sigue siendo completamente libre del afiliado, pero es una decisión orientada mediante la opinión motivada del asesor que puede llegar a ser incluso una advertencia disuasiva, dadas las eventuales consecuencias que podría afrontar el afiliado.

3. La tercera etapa surge con la expedición de la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015, el Decreto 1813 de 2020 que adicionó el artículo 2.2.2.1.18. al Decreto 1833 de 2016 y las Circulares Externas Nos. 016 de 2016 y 024 de 2018 de la Superintendencia Financiera.

En esta nueva etapa el derecho a la información se intensificó en aras de lograr un asesoramiento imparcial y objetivo de los actores del Sistema. Hoy el afiliado que esté interesado en trasladarse de régimen puede obtener *“asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia”*. Es decir que recibe una doble asesoría por parte tanto del RPMPD como del RAIS, lo cual le permite conocer de parte y parte cuáles son, en su caso particular, las ventajas y desventajas de una selección u otra, y cuáles son las consecuencias jurídicas del traslado de uno de los regímenes pensionales al otro.

La Ley 1748 de 2014, adiciona la Ley 1328 de 2009, prescribiendo que las Administradoras del Sistema General de Pensiones deben garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales *reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes*.

El Decreto 2071 de 2015 reitera el deber del buen consejo que tienen las administradoras del Sistema General de Pensiones, y dispone que las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones *deberán garantizar que los afiliados que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, esto es del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media y viceversa, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado*.

Señala adicionalmente que, como mínimo, la información conforme a la competencia de cada administradora del Sistema General de Pensiones debe contener: 1. *Probabilidad de pensionarse en cada régimen*. 2. *Proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, lo anterior frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente*. 3. *Proyección del valor de la pensión en cada régimen*. 4. *Requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada régimen*. 5. *Información sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro de la legislación*. 6. *Las demás que la Superintendencia Financiera de Colombia establezca*.

Por otra parte, a partir de la Circular Externa 016 de 2016, las administradoras deben mantener a disposición de la Superintendencia Financiera los documentos que soporten las solicitudes de traslado presentadas *con el propósito de que en cualquier momento se pueda verificar el cumplimiento del deber de asesoría, así como las instrucciones que en tal sentido se encuentran contenidas en la citada circular*.

Es relevante anotar que antes de la expedición de la Circular Externa 016 de 2016, a pesar de existir el deber de información y asesoría a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, no existía norma alguna que estableciera esta obligación de preservación de la documentación relacionada con la asesoría, cuya firma por parte del afiliado en el respectivo formulario de afiliación asegura que sí recibió la información y la asesoría y que comprendió los efectos legales así como los potenciales riesgos y beneficios de su decisión.

En resumen, solo a partir de la Ley 1328 de 2009, el Decreto 2241 de 2010 y más tarde de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen el deber de realizar, con el alcance indicado en cada una de las disposiciones reseñadas, el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo, sin perjuicio de que, en todo caso, la decisión continua recayendo en cabeza del afiliado.

Pero también es importante señalar que esta evolución legal del entendimiento y alcance que debe tener el deber de informar, no implica que de manera previa existiera una vulneración del derecho pensional ni una desprotección absoluta del afiliado, pues es claro que desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 los afiliados tenían otros esquemas y con ello tuvieron varias oportunidades para regresar al Régimen de Prima Media haciendo uso, por ejemplo, de la facultad de retracto consagrada en el Decreto 1161 de 1994, que establece el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, o haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que permitía trasladarse de régimen pensional cuando se hubiese permanecido en el mismo durante 3 años, sin la existencia de un periodo de carencia alguno relacionado con la edad de pensión (periodo señalado antes de la modificación de la Ley 797 de 2003, disposición original de la Ley 100 de 1993 que no incorporaba la restricción de los 10 años o menos de la edad de pensión).

Adicionalmente, también pudieron optar por regresar al RPMPD en el periodo o año de gracia otorgado por el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, que dispuso que *"las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha, prerrogativa ampliamente publicitada por las Administradoras de Fondos de Pensiones."*

También, pudieron haber efectuado un traslado voluntario, en su periodo de afiliación al RAIS, de manera previa a entrar en la restricción ya mencionada, de forma tal que en los aproximadamente más de 20 años de vigencia del nuevo sistema pensional, el afiliado ha contado con un sinnúmero de oportunidades para ejercer la libre elección de régimen pensional, antes de entrar en la restricción de los 10 años mencionada anteriormente.

Finalmente, todos los afiliados tuvieron acceso en cualquier momento al servicio del Consumidor Financiero, o pudieron hacer uso del derecho de petición para indagar ante la propia administradora, la Superintendencia Financiera de Colombia, los Ministerios de Trabajo (antiguo Protección Social) o el Ministerio de Hacienda los efectos de sus decisiones de selección de régimen.

Responsabilidades y/o competencias asumidas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria), en esta materia

La responsabilidad y competencias en materia de información en el Sistema General de Pensiones, puede verse desde dos puntos de vista. Por una parte, el diseño de políticas públicas, y por otra, la vigilancia y control de las administradoras sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Desde el primer punto de vista, corresponde a los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público formular las políticas públicas en materia de seguridad social en pensiones, y el derecho a la información de afiliados y usuarios, en el marco de los parámetros dados por el legislador, a quien por voluntad constitucional corresponde el diseño y pautas de funcionamiento del sistema.

En este sentido, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, los mencionados Ministerios han cumplido con esta función y han promovido una profundización y mejora constante de los deberes de información de las administradoras, a través de la colaboración en la expedición de leyes en este sentido, y de la expedición de



decretos reglamentarios que desarrollaron en cada una de las etapas normativas ya referidas este derecho de los ciudadanos.

Los regímenes pensionales diseñados por la Ley 100 de 1993 son diferentes, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y esa dualidad, como lo ha considerado la Corte Constitucional,⁸ estimula la competencia entre los administradores de los sectores público y privado, y genera responsabilidad individual y social en cabeza de los afiliados de escoger el régimen que mayores ventajas les represente, así como la oportunidad para trasladarse dentro de las limitaciones que imponen las leyes, siendo ello un reflejo de otros postulados constitucionales, como el respecto al libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la autonomía personal.

Gracias a las políticas progresivas diseñadas, hoy el consumidor financiero del Régimen General de Pensiones no solamente tiene el derecho de recibir información general, sino también de obtener la asesoría del buen consejo, y adicionalmente de recibir una doble asesoría de los representantes de las administradoras de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado, lo cual, sin dejar de preservar la libre elección, le facilita al afiliado información para que pueda tomar una decisión acerca del régimen pensional al cual quiere pertenecer. Sin que esta evolución del derecho a la información desconozca en momento alguno, que en todo caso, las disposiciones del sistema están establecidas en normas de rango legal, y, que, por ende, resultan de público conocimiento.

Desde el segundo punto de vista, la vigilancia y control de las administradoras del Régimen General de Pensiones, compete a la Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia Bancaria) autoridad que tenía la supervisión y vigilancia del desaparecido ISS y hoy como autoridad de supervisión de la actividad financiera y aseguradora es el organismo vigilante de Colpensiones y de los Fondos de Pensiones y Cesantías, instituciones pertenecientes al sistema financiero. De manera que es su responsabilidad velar por el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas, lo referente al derecho de información del consumidor financiero.

- b. Particularmente desde la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100 de 1993) y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, hasta la entrada en vigencia de las leyes 1328 de 2009 y 1748 de 2014, ¿qué acciones en concreto desplegaron las administradoras de pensiones y qué tipo de información suministraban a la persona interesada, para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional? Explicar el alcance de sus actuaciones y precisar si, a partir de las modificaciones normativas, desde 1993, han existido variaciones en la rigurosidad de este deber.***

Como se indicó en la respuesta al punto anterior, antes del 2009 se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección del régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguno previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez en cada uno de los regímenes, como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar documentada, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada.

De esta manera, las distintas administradoras de pensiones realizaron una asesoría bajo el presupuesto de la información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que, bajo estos elementos, los consumidores financieros tomaron la decisión de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras.

Es así como podemos observar que el deber de asesoría e información de parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones ha tenido un desarrollo en la normatividad durante las últimas dos décadas de

⁸ Sentencia C -1024 de 2004.

funcionamiento del sistema, no siendo razonable ni jurídicamente válido que de manera alguna se les imponga a las administradoras deberes de información que no estaban previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento en que se generó el traslado de régimen, pues exigir el cumplimiento de normas aun no promulgadas desvirtuaría el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y las normas propias de la aplicación de las leyes en el tiempo.

Como se mencionó anteriormente, desde la vigencia de la Ley 100 de 1993, se entregaba información general del funcionamiento del sistema y las particularidades propias del régimen pensional en el que se pretendía afiliarse el ciudadano y los afiliados tuvieron varias oportunidades y diferentes herramientas para modificar su decisión y regresar al Régimen de Prima Media haciendo uso de la facultad con que contaban para hacerlo en virtud de lo establecido en el Decreto 1161 de 1994, que consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, o también haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que permitió trasladarse de régimen pensional cuando ha permanecido en el mismo durante 3 años⁹, sin limitación de edad.

De la misma manera, también pudieron optar por regresar al RPMPD en el periodo o año de gracia otorgado por el artículo 1° del Decreto 3800 de 2003, que dispuso que *“las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha...”*, prerrogativa ampliamente publicitada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en medios de amplia circulación.

Adicionalmente, es de señalar que las AFPS han adelantado campañas de comunicación para darles a conocer a sus afiliados las características del Régimen de Ahorro Individual y sus diferencias con el Régimen de Prima Media, incluso en el caso de una AFP en particular, se tiene conocimiento de un trabajo desarrollado mediante el cual, contactaban a los afiliados y les explicaban, antes de que cumplieran 47 o 52 años de edad, cuales eran las diferencias entre las prestaciones reconocidas en cada régimen, informándole que una vez cumplida esa edad entraban en el periodo de carencia de los últimos 10 años y no podían trasladarse de nuevo al RPMPD.

Finalmente, es de recordar que durante todo el tiempo de existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones ha existido la figura del Defensor del Cliente (artículo 98 del EOF), conocida desde la Ley 795 de 2003 como defensor del Consumidor Financiero, al que cualquier afiliado pudo acudir si hubiese considerado que la entidad financiera no le prestó el servicio adecuadamente, no cumplió con lo acordado en la prestación de un servicio o proporcionó información que le resultara insuficiente para tomar una decisión.

Así las cosas, la teoría desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, en la que indica que la información entregada por las AFP conforme a las normas que regían la materia en su momento (antes de la Ley 1748 de 2014), es insuficiente y ello *per se*, se constituye en una causal válida para declarar la ineficacia o nulidad de afiliación, no es congruente con los principios de irretroactividad de ley y de confianza legítima de las administradoras de Pensiones y de la Nación.

Cordial saludo,

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Revisó: OAJ/ Subdirección Jurídica
Elaboró: Natalia Guevara Rivera/Gonzalo Casas Monsegny

⁹ Período señalado antes de la modificación de la Ley 797 de 2003.

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación interna: 2476

Número único: 11001030600020220006200

Referencia: Giro de recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con ocasión del traslado de los afiliados

El Gobierno Nacional, por conducto del ministro del Trabajo, consulta al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sobre el «giro de los recursos del fondo de garantía de pensión mínima al régimen de prima media, con ocasión del traslado de los afiliados del régimen de ahorro individual».

I. ANTECEDENTES

El ministro del Trabajo, en la solicitud de concepto elevada ante la Sala, expuso:

El numeral 2° del artículo 2.2.2.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, «[p]or medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones», respecto del *traslado de régimen pensional*, dispone:

Artículo 2.2.2.3.1. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de cualquiera de los regímenes pensionales mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido cinco años contados desde la fecha de la selección anterior.

Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y de éste al de prima media se aplicará lo siguiente:

1. Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales.

2. Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida se le acreditarán en éste último el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso.

Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se haya efectuado al momento del traslado se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado. [Se enfatiza].

A juicio del consultante, lo anterior significa que, desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 hasta la de entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de enero de 2003), el traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS) al Régimen de Prima Media (en adelante RPM) implicó: *i)* trasladar a «Colpensiones» el saldo que «exista» en la cuenta de ahorro individual del afiliado, por parte de la *administradora del fondo de pensiones*, y *ii)* que el ISS acreditara el número total de semanas cotizadas en el Régimen de Ahorro Individual que le hubieran sido reportadas por la *administradora de fondo de pensiones*.

La Ley 797 de 2003 creó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual «se alimenta» de un porcentaje de los aportes que hacen los afiliados a las administradoras de dicho régimen, así:

Artículo 7°. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Sin embargo, afirma el consultante, que el precitado artículo 7 (modificatorio del artículo 20 de la Ley 100 de 1993) *no fue reglamentado* oportunamente y, por tal razón, no se sabe cuáles son los recursos que debían «remitir» las administradoras de fondos de pensiones cuando los afiliados al Régimen de Ahorro Individual solicitaban su traslado al Régimen de Prima Media, durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008.

Agrega que, por la falta de reglamentación del artículo 7 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en que el cotizante solicitó traslado de régimen pensional durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008 (fecha de expedición del Decreto 3995 de ese año), las administradoras de fondos privados de pensiones trasladaron a «Colpensiones» los saldos registrados en la cuenta de ahorro individual de los afiliados, sin incluir los aportes que estaban destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Como consecuencia de lo anterior, manifiesta el consultante, se han generado inconsistencias en las historias laborales de quienes se trasladaron del RAIS al RPM en el periodo señalado, toda vez que existe una diferencia entre las semanas acreditadas con los aportes efectuados al régimen privado y las que han debido acreditarse en el evento de haber cotizado al régimen público.

Por lo tanto, Colpensiones «acreditó en semanas solo el número que correspondía al valor trasladado y no el total de semanas totales cotizadas por el trabajador».

En todo caso, relata el ministerio del Trabajo, las administradoras del RAIS, pese a que destinaron al Fondo de Garantía de Pensión Mínima los porcentajes correspondientes de las cotizaciones de sus afiliados, al hacer los traslados del RPM en el periodo comprendido entre la fecha de promulgación de la Ley 797 de 2003 y la de expedición del Decreto 3995 de 2008, reportaron a Colpensiones la totalidad de las semanas por las cuales se hicieron aportes a pensión.

No obstante, el consultante cita que el artículo 7 del Decreto 3995 de 16 de octubre de 2008, compilado en el artículo 2.2.2.4.7 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, es la norma que precisa que los traslados del RAIS al RPM deben incluir los aportes efectuados al fondo de garantía de pensión mínima, a nombre del trabajador, pero no cobija a quienes se trasladaron previo a su expedición:

Artículo 7°. Traslado de recursos. [...]

[...]

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.

[...]

Por otro lado, en la consulta se hace mención del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual establece «que para la liquidación de las pensiones reconocidas por el Sistema General de Pensiones solo se pueden tener en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiese efectuado cotizaciones».

Por último, explica el ministro la finalidad por la cual acude a la Sala, así:

[...] solicitamos concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el fin de establecer la procedencia de la inclusión de los aportes realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima al realizar el traslado de los recursos de la cuenta de ahorro individual del afiliado trasladado del RAIS al RPM, al igual que el número de semanas a acreditar con o sin el traslado de dichos aportes.

En atención a los argumentos, los hechos y las consideraciones expuestas, el ministro del Trabajo formula a la Sala las siguientes

PREGUNTAS:

1. «¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado únicamente, sin incluir el porcentaje que del valor de los aportes realizados fue girado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), a pesar de, como quedó dicho anteriormente, que el registro muestra una notoria diferencia en el número de semanas acreditadas en el RPM frente a las reportadas en el RAIS?».
2. «¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado, sin incluir los aportes realizados con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), y que en el Régimen de Prima Media RPM se acredite el número total de semanas cotizadas en el RAIS, sin que se perciba una diferencia entre los dos registros y sin que sea necesario solicitar el giro del porcentaje correspondiente al aporte remitido al FGPM?».
3. «En virtud de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, ¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del

Decreto 3995) del RAIS al RPM, las Administradoras del Régimen de Ahorro Individual deben remitir a Colpensiones la totalidad de los recursos pagados por el afiliado incluidos los acreditados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y por consiguiente Colpensiones debe acreditar la totalidad de semanas registradas en el RAIS por el mismo periodo cotizado sin que se presente diferencia alguna?

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico de la consulta

De acuerdo con lo expuesto por el ministro del Trabajo, el problema jurídico de la consulta es:

¿El traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en el lapso comprendido entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995), implica el traslado de todos los aportes efectuados a nombre del cotizante, incluyendo aquellos destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima?

Como cuestión derivada de lo anterior, debe establecerse si ¿al generarse el traslado de régimen pensional, en los términos señalados en el párrafo precedente, deben acreditarse en el RPM el número total de semanas cotizadas en el RAIS, sin que se perciba una diferencia entre los dos registros? O si, como consecuencia de la diferencia que exista en el monto trasladado, ¿es posible registrar en el RPM un número menor de semanas cotizadas?

Para solucionar tales problemas jurídicos, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: *i)* el Sistema de Seguridad Social Integral en materia pensional; *ii)* los regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993 -principales características y diferencias-; *iii)* la forma como se reparten los aportes en ambos regímenes pensionales; *iv)* el Fondo de Garantía de Pensión Mínima; *v)* el traslado de régimen pensional y los inconvenientes generados por la Ley 797 de 2003; *vi)* la tesis de la Corte Suprema de Justicia cuando se declara la nulidad del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de ahorro individual con solidaridad; *vii)* la naturaleza de los recursos destinados a pagar las pensiones; y *viii)* el principio de favorabilidad como criterio de interpretación en el análisis de casos que involucren la protección del derecho a la seguridad social.

Con base en lo anterior, la Sala procederá al análisis y solución de los problemas jurídicos expuestos.

1.1. El Sistema de Seguridad Social Integral en materia pensional

El artículo 48 de la Constitución Política regula a la Seguridad Social como un instituto jurídico de doble naturaleza o condición: derecho fundamental irrenunciable y servicio público de carácter obligatorio, que puede ser prestado, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, por entidades públicas o privadas, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 48 constitucional, la Ley 100 de 1993 organizó *el sistema de seguridad social integral* y lo definió como el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, así como de normas y procedimientos que tienen por objeto «garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten», cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado.

La Corte Constitucional señala que el concepto de *seguridad social* hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar general de la población en relación con la protección y cobertura de unas necesidades socialmente reconocidas. Para esa Corporación, el carácter fundamental de esta institución «encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de este, resulta posible que las personas afronten con dignidad [...] las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos».

Recién expedida la Ley 100 de 1993, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el concepto de seguridad social integral, así:

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

El sistema de seguridad social integral comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen

normativamente en el futuro (artículo 1º inciso 2º Ley 100 de 1993).

Ahora bien, el artículo 8 de la Ley 100 de 1993 señala que el sistema social de seguridad social integral está conformado, principalmente, por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud y riesgos laborales.

Respecto del *sistema general de pensiones*, tema que ocupa la atención de la Sala, el artículo 10 de la Ley 100 de 1993 lo define como aquel que tiene por objeto «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones».

1.2. Los regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993 -principales características y diferencias-

La Ley 100 de 1993 instituyó dos regímenes pensionales, que son excluyentes, pero que coexisten, los cuales se denominan: Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

En términos generales, el RPM se caracteriza por ser aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión o una indemnización, previamente definidas, independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con los requisitos legales. El RAIS está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, así como en la solidaridad, a través de las garantías de pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad.

Para la Corte Constitucional, la coexistencia de los dos regímenes pensionales responde al interés del Legislador en establecer un sistema dual, conformado por subsistemas que operen cada uno en forma autónoma, independiente y, además excluyente; en el que se permita la competencia entre el sector público y privado, en pro de la materialización del derecho fundamental comprometido, y de la eficacia y la eficiencia de los servicios asociados a la seguridad social en materia pensional.

Las características comunes a estos los dos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, según el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, son:

i) Obligatoriedad de la afiliación y de efectuar los aportes correspondientes;

ii) Libertad del afiliado para seleccionar el régimen pensional al cual quiere vincularse y la posibilidad de traslado por una sola vez cada tres años, contados a partir de la selección inicial o del cambio;

iii) Igualdad de trato para trabajadores dependientes e independientes, y

iv) Derecho al reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes, y las demás prestaciones establecidas, una cumplidos los requisitos previstos en la ley.

Por su parte, las principales características de cada régimen son:

1.2.1. El Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)

El régimen solidario de prima media con prestación definida es aquel «mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas».

En este régimen, los aportes de los trabajadores y empleadores constituyen un fondo común, del cual se extraen los recursos necesarios para cubrir la pensión de todos los afiliados, prestación a la cual se accede siempre y cuando el afiliado cumpla con unos requisitos preestablecidos, los cuales están expresados en edad y tiempo o semanas cotizadas. Su administración corresponde, hoy en día, a Colpensiones y, excepcionalmente, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que subsistan (artículo 52 *ibidem*).

La doctrina ha identificado las características principales del RPM, así:

a) Las cotizaciones se asemejan a un seguro que garantiza la pensión.

b) Como sistema de aseguramiento, el régimen solo garantiza la pensión si se cumplen los requisitos legales. Ello implica la presencia simultánea de las condiciones de cotización y de edad del afiliado.

c) De no acreditarse los requisitos legales para obtener la pensión, el sistema no devuelve primas o cotizaciones. Quien no cumpla dichos requisitos tendrá derecho a una indemnización sustitutiva.

d) El derecho a la pensión no depende de la cantidad de dinero depositada en el fondo ni de sus rendimientos, sino del cumplimiento de los requisitos de

edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas.

1.2.2. El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)

Respecto del RAIS, el artículo 59 de la Ley 100 de 1993 prescribe:

Artículo 59. Concepto. El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título.

Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados [...]. [Destaca la Sala].

La doctrina define al RAIS como un sistema de capitalización individual administrado por particulares, que se caracteriza, como todo esquema de capitalización, por unas condiciones que dependen de: *i)* la acumulación de los aportes o cotizaciones que realice el afiliado y el empleador, los cuales se administran en una cuenta individual para cada persona; *ii)* el capital ahorrado, y *iii)* la rentabilidad que produzca dicho capital.

El RAIS se caracteriza, principalmente, por lo siguiente:

- a) Los aportes o cotizaciones no se destinan a un fondo común, sino que se depositan en una cuenta pensional de ahorro individual. La sumatoria de dichos recursos conforman los fondos de pensiones que manejan las entidades administradoras, pero son independientes de su propio patrimonio. Con el saldo de los aportes depositados en la cuenta y sus rendimientos financieros, se financia cada pensión.
- b) Como sistema de capitalización, el derecho a obtener la pensión no depende del tiempo de cotizaciones ni de la edad del afiliado, sino de la cantidad de dinero acumulada en la cuenta de ahorro individual.
- c) En caso de no obtenerse la pensión, por insuficiencia del capital acumulado, el sistema prevé mecanismos para la devolución de saldos, pues el único titular del capital es el afiliado.
- d) Una parte de los aportes mencionados en el literal anterior se capitaliza en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destina al

pago de las primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, a la asesoría para la contratación de una renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y a cubrir el costo de administración del régimen.

Visto lo anterior, es claro que entre el RPM y RAIS existen notorias diferencias, respecto de lo cual la Corte Constitucional se ha expresado así:

El primero de ellos [RPM], hace referencia al sistema de financiación de pensiones administrado por [Colpensiones], en el que los aportes de cada afiliado integran un fondo común con el cual se financian todas las pensiones. En este régimen el derecho a la pensión se obtiene únicamente cuando el afiliado cumple los requisitos de edad y tiempo de cotizaciones previsto en la ley. El segundo [RAIS], a diferente [sic] del anterior, corresponde a un sistema en el que las pensiones se financian a través de una cuenta de ahorro individual, administrada por la AFP a la cual se encuentre afiliado el usuario, y el derecho a dicha prestación se obtiene con base en el capital depositado en la respectiva cuenta, sin que para ello sea exigible el requisito de edad o determinado número de semanas de cotización. Cabe destacar que, hecha la selección inicial a cualquiera de estos regímenes, los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse de uno a otro, en los términos del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003.

De lo anterior, se entiende que la intención del Legislador con la expedición de la Ley 100 de 1993, en el tema relativo a las pensiones, fue establecer dos regímenes de características singulares y diferentes, para ofrecerle al afiliado la posibilidad de escoger libremente el subsistema que más se ajuste a sus necesidades [RAIS o RPM], lo cual, como lo señala la Corte Constitucional, es coherente con los principios de igualdad y solidaridad que consagran los artículos 13 y 48 del texto superior.

En suma, el RPM y el RAIS fueron instituidos con unos rasgos específicos y unas características singulares, de modo tal que el afiliado pueda distinguirlos con facilidad y optar de manera libre e informada por vincularse a uno o a otro, según estime conveniente.

1.3. La forma como se reparten los aportes en ambos regímenes pensionales

El originario artículo 20 de la Ley 100 de 1993, respecto de la tasa de cotización para la pensión de vejez, estipulaba:

Artículo 20. La tasa de cotización para la pensión de vejez, será del 8% en 1994, 9% en 1995 y del 10% a partir de 1996, calculado sobre el ingreso base

y se abonarán en las cuentas de ahorro pensional en el caso de los fondos de pensiones. En el caso del ISS, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de pensiones de vejez y capitalización de reservas, mediante la constitución de un patrimonio autónomo destinado exclusivamente a dichos efectos.

Para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, la tasa será, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, del 3.5%.

Sin embargo, en la medida en que los costos de administración y las primas de los seguros se disminuyan, dichas reducciones deberán abonarse como un mayor valor en las cuentas de ahorro de los trabajadores o de las reservas en el ISS, según el caso.

La cotización total será el equivalente a la suma del porcentaje de cotización para pensión de vejez y la tasa de que trata el inciso anterior.

Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores, el 25% restante [...].

Obsérvese que la tasa de cotización pensional era igual para ambos regímenes, a pesar de la regla de aumento progresivo. También señala la disposición citada que, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, el 3,5% de dicha tasa debía destinarse para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 692 de 1994, por el cual reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 21 establece un criterio de aumento progresivo del monto de las cotizaciones pensionales, las cuales, a partir del 1° de enero de 1996, debían ser del 13.5% del ingreso base de cotización del afiliado, porcentaje que aplicaba, sin distinción alguna, al RPM y al RAIS:

Artículo 21. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones causadas hasta el 31 de marzo de 1994, se continuará rigiendo por las disposiciones vigentes con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.

A partir del 1° de abril de 1994, la tasa de cotización para el sistema general de pensiones, tanto para el régimen solidario de prima media con prestación definida, como para el régimen de ahorro individual con solidaridad, será del 11.5%, calculado sobre el ingreso base de cotización.

A partir del 1° de enero de 1995, la cotización a que se refiere el inciso anterior, será del 12,5% y a partir del 1° de enero de 1996 será del 13,5%. [Se destaca].

Según el precitado artículo 21, desde el 1° de enero de 1996 la tasa de cotización pensional en los dos regímenes pensionales era del 13,5%, y su distribución no tenía diferencia alguna, toda vez que el porcentaje para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, tanto en el Instituto de Seguros Sociales como en los fondos de pensiones era de 3.5%, y el porcentaje restante se destinaba para el pago de la pensión de vejez, esto es, el 10%.

Ahora bien, el Legislador, consciente de las diferencias existentes entre los dos regímenes pensionales instituidos por la Ley 100 de 1993, y con el propósito de «lograr un Estado Comunitario que dedique sus recursos a erradicar la pobreza, a construir equidad y confianza, ampliar y mejorar la seguridad social y la justicia social», expidió la Ley 797 de 2003, mediante la cual, para efectos de lo que estudia la Sala en el presente asunto, aumentó la tasa de cotización de los aportes a pensión. En este sentido, estableció una regla progresiva, según la cual el porcentaje del 13,5% que señalaba el Decreto 692 de 1996 debía incrementarse año tras año, hasta llegar al 16%, en el 2006, y modificó los criterios de distribución del monto de las cotizaciones pensionales del RAIS, como a continuación se observa:

Artículo 7°. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.

El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el incremento que se realice en el año 2004 se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del régimen de ahorro individual. Los incrementos que se realicen a partir del 2005 se destinarán a las cuentas individuales de ahorro pensional. Quinquenalmente y con base en los estudios financieros y actuariales que se realicen para tal fin, el gobierno redistribuirá los incrementos de cotización previstos en este artículo entre el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual y las cuentas de ahorro pensional [...]. [Se destaca].

Como la Ley 797 de 2003 estableció un aumento progresivo del monto de la tasa de cotización pensional, con límite en el 16%, se observa que las reglas de distribución de este monto, que fueron objeto de modificaciones, deben analizarse dependiendo del momento de causación, pues el panorama cambia si se trata de los años 2003, 2004, 2005, 2006, y del 2008, en adelante, así:

a) Año 2003

La tasa de cotización era del 13,5%, la cual se repartía así: en el RPM, el 10,5% se destinaba a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 10% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 0,5% restante se destinaba al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

b) Año 2004

La tasa de cotización fue del 14,5%, la cual se repartía así: en el RPM, el 11,5% se destinan a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 10% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destinaba al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

c) Año 2005

En este año, la tasa de cotización fue del 15%, la cual se repartía así: en el

RPM, el 12% se destina a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 10,5% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

d) Año 2006

La tasa de cotización era del 15,5%, y se repartía así: en el RPM, el 12,5% se destina a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 11% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

e) Desde al 2008 en adelante

La tasa de cotización es del 16%, la cual se reparte así: en RPM, el 13% se destina a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 11,5% alimenta las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubre gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Es claro para la Sala que desde el año 2003 hay una diferencia en la forma de distribución de la tasa de cotización pensional entre ambos regímenes, toda vez que dicho porcentaje, como se vio, en el caso del RPM se suma a la financiación de la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, mientras que en el RAIS se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esta diferencia se aumentó, al 1,5%, a partir del año 2004, y se mantiene, en la actualidad.

La diferencia del 1,5% advertida significa que tiende a ser mayor el porcentaje destinado para la financiación de la pensión de vejez en el régimen de prima media que en el de ahorro individual, lo cual, como lo señala el consultante, ha generado inconvenientes cuando se producen cambios del régimen privado al público, aspecto sobre el cual se ahondará más adelante.

Sobre el punto, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-670 de 2012, indicó:

Posteriormente, se expidió la Ley 797 de 2003, la cual, en su artículo 7º, modificó la disposición anterior, cambiando la distribución del aporte en el régimen de ahorro individual. Por consiguiente, en aplicación a la nueva legislación, el 1.5% de la cotización del régimen de prima media con prestación definida se debía destinar a la financiación de la pensión de vejez del afiliado, mientras que en el régimen de ahorro individual ese porcentaje se debía abonar al fondo de garantía de pensión mínima. Por ende, el porcentaje designado para la pensión de vejez en el régimen de prima media siempre sería mayor al porcentaje destinado para este efecto en el régimen de ahorro individual. [Énfasis propio].

1.4. El Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, aquellas personas afiliadas al RAIS que no hayan acumulado suficiente capital para financiarse, al menos, una pensión equivalente a un salario mínimo y hubiesen cotizado como mínimo 1.150 semanas, tendrán derecho a una pensión mínima en desarrollo del principio de solidaridad:

Artículo 65. Garantía de pensión mínima de vejez. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

Para garantizar la pensión mínima, el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 (modificadorio del artículo 65 de la Ley 100 de 1993) ordenó la creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el cual se alimenta actualmente del 1.5% que del ingreso base de cotización.

Es importante precisar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-797 de 2004, declaró inexecutable el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 por «haberse demostrado la existencia de un vicio insubsanable en el proceso de formación del texto normativo acusado consistente en la violación del límite material de competencia de la comisión accidental de conciliación»:

Nótese, entonces, como el querer de las Plenarias era: i) crear el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, ii) que los beneficiarios de la norma fueran los afiliados que no hayan

completado los aportes para pensionarse con un salario mínimo y que cumplieran los requisitos tanto de edad (hombres 62 y mujeres 57) como de semanas cotizadas (1.150), iii) que a partir del año 2009 el requisito referente a las semanas de cotización variara incrementándose en veinticinco (25) semanas cada año hasta alcanzar 1.325 semanas de cotización en el 2015, y, iv) que a partir del año 2018 el requisito referente a la edad variara aumentando a 62 años en las mujeres y a 65 en los hombres.

Estos cuatro elementos, como se ha demostrado fueron aprobados por ambas Cámaras, lo cual implica que sobre los mismos no podía afirmarse que existían discrepancias que otorgaran a la comisión accidental de conciliación (Art. 161 C.P.) competencia para modificar el inciso tercero de la norma acusada, eliminando el cuarto aspecto antes reseñado, es decir, la modificación de edad a partir del año 2018.

En estas condiciones la comisión accidental integrada por Senadores y Representantes a la Cámara desbordó el límite constitucional que le fue impuesto por la Carta Política, puesto que a pesar de no existir discrepancia respecto del inciso tercero del artículo 14 aprobado por las plenarias, ésta excediendo su competencia suprimió parte de ese texto normativo, no estando habilitada para ello, afectando con dicha determinación la norma en su integridad, puesto que fue todo el artículo demandado el que fue objeto de análisis por dicha comisión.

Si bien podría afirmarse que el vicio al que se ha aludido fue subsanado al haberse aprobado con posterioridad el informe de conciliación en las condiciones anotadas por las plenarias de cada cámara y que por lo tanto, el defecto detectado no permite declarar la inexequibilidad de la disposición normativa objeto de control, la Sala precisa que dicha interpretación transgrede los principios que informan el proceso de formación de la ley e impide siquiera aplicando, en el presente caso, el principio de instrumentalidad de las formas llegar a esa conclusión.

Lo anterior, por cuanto del artículo 161 y de las demás normas que reglan el trámite legislativo contenidas en la Carta Política y en la Ley Orgánica 5ª de 1992 no se desprende, conforme a las consideraciones precedentes, que la decisión final sobre el informe de conciliación que deben adoptar las plenarias permita convalidar la extralimitación de la competencia material asignada a las comisiones accidentales, que se reitera, sólo pueden actuar sobre los textos de los proyectos de ley respecto de los cuales existan discrepancias, lo cual no acaeció en el presente caso.

De esta manera, al haberse demostrado la existencia de un vicio insubsanable en el proceso de formación del texto normativo acusado consistente en la violación del límite material de competencia de la comisión accidental de conciliación, se declarará su inexequibilidad.

Sin embargo, pese a que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 797 de 2003 por asuntos formales, lo cierto es que dicha

decisión no compromete la existencia del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, toda vez que su existencia quedó prevista en los artículos 7 de esta misma ley, y 46 y 57 de la Ley 1328 de 2009, normas que, en lo pertinente, no han sido objeto de cuestionamiento alguno ni control por parte de la Corte y, por lo tanto, existe sustento normativo vigente que mantienen su existencia en el ordenamiento jurídico.

Mediante el Decreto 510 de 2003, el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003. En relación con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el artículo 8 del referido decreto establece:

Artículo 8°. Las entidades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad recaudarán, conjuntamente con las cotizaciones, la parte de las mismas destinada al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la mantendrán en una cuenta separada representada en unidades del respectivo fondo de pensiones, hasta la fecha en que estos recursos deban trasladarse con sus rendimientos a dicho Fondo de Garantía de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto del Gobierno Nacional.

Obsérvese que se trata de una reglamentación de los recursos con los cuales se financia la garantía de pensión mínima, pero no, en estricto sentido, de la organización y administración del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Como lo señala la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina, no existe norma que reglamente de forma expresa y concreta el funcionamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de tal manera que, desde enero de 2003 hasta la fecha, los recursos correspondientes son recaudados y administrados por los fondos privados, quienes los mantienen en una cuenta destinada para los fines pertinentes, hasta que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito autorice que se utilicen para los pagos a los cuales fueron destinados por el Legislador, tal como lo ordena el artículo 4 del Decreto 832 de 1996.

Así, lo cierto es que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima fue concebido con el propósito de completar los recursos necesarios para financiar las pensiones de aquellas personas que no cuenten con el capital suficiente para acceder a una pensión de un salario mínimo, y se alimenta con el porcentaje del 1,5% de las cotizaciones pensionales, pero su administración y organización carece de reglamentación concreta. Por lo tanto, son los fondos privados de pensiones quienes se encargan de ello, para lo cual deben mantener los recursos destinados a este en cuentas separadas de los demás rubros que conforman los ahorros pensionales.

Por último, es importante advertir que el recaudo de los recursos destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, asunto al que se refiere el precitado Decreto 510 de 2003, así como su administración y gestión, respecto de lo cual -se itera- no existe reglamentación específica, son cuestiones distintas al giro de los recursos que deben efectuar las administradoras de los fondos privados de pensiones, cuando un afiliado decide cambiarse del RAIS al RPM, especialmente si dicho traslado ocurrió en el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008, de lo cual se encargará la Sala en otro acápite.

1.5. El traslado de régimen pensional y los inconvenientes generados por la Ley 797 de 2003

Una de las características principales del sistema de seguridad social en pensiones es la libertad de selección por parte del afiliado de uno de los dos regímenes pensionales que contempla la Ley 100 de 1993, así como la posibilidad de trasladarse de un régimen a otro, lo cual, en todo caso, se sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones.

La libertad de selección por parte del afiliado de uno de los dos regímenes pensionales ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un derecho de rango legal, conexo al derecho constitucional a la seguridad social, que se vulnera cuando se impone o exige la afiliación obligatoria a una entidad prestadora de la seguridad social, como son las administradoras de fondos de pensiones.

El artículo 113 de la Ley 100 de 1993 establece las reglas que deben observarse en caso de traslado del régimen privado al público y viceversa. Concretamente, si el traslado es del RPM al RAIS, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales, los cuales serán depositados en la cuenta individual del afiliado; mientras que, si es del RAIS al RPM, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, y el bono pensional, cuando sea el caso, y se acreditarán las semanas cotizadas en el RAIS, de acuerdo con el salario base de cotización.

Mediante el Decreto 692 de 1994, el Gobierno Nacional reglamentó algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993. Específicamente, en materia de traslados de régimen pensional, el decreto reiteró que los afiliados solo podían trasladarse de uno a otro cada tres años, y estableció, casi en los mismos términos que la ley, el procedimiento a seguir en caso de traslado, así:

Artículo 15. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de

uno cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior.

Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y de éste al de prima media, se aplicará lo siguiente:

a) Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales. La expedición de los bonos se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 del presente Decreto y la reglamentación que al efecto se expida en uso de las facultades extraordinarias de que trata el numeral 5 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993;

b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, se le acreditarán en éste último el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se haya efectuado al momento del traslado, se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado.

Un aspecto adicional por resaltar del Decreto 692 de 1994, tiene que ver con el tratamiento que debe darse a los aportes voluntarios realizados por el afiliado al RAIS, en el sentido de que no deben ser trasladados al RPM, sino que deben ser devueltos al cotizante.

Los aportes voluntarios en materia de pensión, según lo previsto por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, solo tienen cabida en el RAIS, y son aquellos que superan el porcentaje que obligatoriamente debe ser cotizado al sistema pensional por los afiliados y los empleados, según el caso. Fueron concebidos con la finalidad de incrementar los saldos de las cuentas individuales de ahorro pensional para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.

Así las cosas, para la Sala, es claro que, en vigencia del texto originario de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 692 de 1994, las reglas aplicables a los traslados suponen, si es del RPM al RAIS, la conversión de las semanas cotizadas en dinero, lo cual se hace a través de la emisión de bonos pensionales; y si es del RAIS al RPM, el traslado del dinero ahorrado a la administradora del fondo público, lo que incluye el saldo de la cuenta individual, los rendimientos y el bono pensional, cuando sea del caso, y el registro de las semanas cotizadas en el RAIS.

Ahora bien, como la distribución del monto de las cotizaciones, inicialmente, se hacía de la misma forma y en los mismos porcentajes en ambos regímenes, los traslados que se produjeron en vigencia del texto originario de la Ley 100

de 1993 no significaron diferencias o inconsistencias en las historias laborales de los afiliados, pues tanto el dinero del RAIS, convertido a semanas, como el número de semanas cotizadas en el RPM transformadas a bonos pensionales, y posteriormente depositados en una cuenta individual, debían de ser equivalentes y simétricos, y permitían, por lo tanto, conservar los derechos pensionales de los cotizantes, sin variación o alteración alguna, por el paso del sistema público al privado, o viceversa.

En relación con la similitud del reparto del monto cotizado por los afiliados a ambos regímenes pensionales y el impacto de dicha situación en materia de traslados, la Corte Constitucional, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, dispuso:

Como se vio, la sentencia C-789 de 2002 señaló que al cambiarse al régimen de prima media, las personas debían trasladar todo el ahorro que habían efectuado en el régimen de ahorro individual con solidaridad y que dicho ahorro “no podía ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media”. Precisamente en el cumplimiento de éste último requisito reside uno de los problemas jurídicos de la sentencia T-818 de 2007, pues en ella se sostuvo que debido a un cambio de legislación tal exigencia devino en imposible de cumplir.

En efecto, en el 2002, cuando se expidió la sentencia de constitucionalidad anteriormente mencionada, la distribución del aporte en los dos regímenes pensionales de la ley 100 de 1993 era igual: según la redacción original del artículo 20 la cotización se repartía en un 3.5% para pagar los gastos de administración y una prima para un seguro de pensión de invalidez y sobrevivientes y lo restante se destinaba para el pago de la pensión de vejez.

Sin embargo, un panorama distinto surgió a partir de la aprobación de la Ley 797 de 2003, la cual, aunque no modificó directamente las reglas relativas a los traslados pensionales, desencadenó una asimetría en el monto de los traslados del RAIS al RPM que afectó las historias laborales de los afiliados quienes, en vigencia de esta norma, pidieron ser trasladados de los fondos privados a Colpensiones, como pasa a explicarse.

La asimetría en las historias laborales de quienes se trasladaron de régimen pensional, una vez entró en vigencia la Ley 797 de 2003, consistió específicamente en que aquellas personas que se cambiaron del RAIS al RPM notaron que, en sus historias laborales que se generaban a partir del traslado, el número de semanas cotizadas no eran equivalentes al tiempo por el cual habían aportado al fondo privado de pensiones. Esta falta de equivalencia fue vista como un obstáculo, *ex ante*, para obtener el derecho a la pensión en condiciones igualitarias.

Dicha asimetría se ocasionaba, no directamente por un cambio normativo en materia de traslados, sino por la diferencia de reglas en materia de distribución de la cotización pensional que introdujo el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, al destinarse en el RAIS un 1,5% del monto cotizado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, misma cantidad que en el RPM se destina a financiar, en conjunto con las otras cotizaciones, la pensión de vejez, siempre era mayor el porcentaje destinado para la pensión de vejez en el régimen de prima media que en el de ahorro individual.

De tal manera que quien acudía al traslado del RAIS al RPM terminaba afrontado una disminución de los aportes efectuados al sistema, porque el 1,5% que se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima en el primero de los señalados regímenes, no se reflejaba de la misma manera, puesto que, al no ser un ítem destinado a la financiación de la pensión de vejez, mediante la capitalización de las cuentas individuales, se quedaba en poder de las fondos del sistema privado, los cuales, además, según lo señala el consultante, no lo giraban al sistema público debido a que, a su juicio, no existía un sustento normativo para ello.

Este problema se hizo patente cuando la Corte Constitucional revisó unos casos relacionados con traslados del RAIS al RPM, de personas beneficiarias del régimen de transición en pensiones. De tales casos, se destaca el que dio lugar a la Sentencia T-818 de 2007, cuyo problema jurídico fue, en lo que interesa a este concepto, si «PORVENIR AFP, al rechazar el traslado que el accionante solicitaba al ISS, transgredió los derechos a la igualdad, seguridad social y a la libre escogencia de régimen pensional del afiliado».

El argumento de Porvenir, para rechazar el traslado, fue «que el monto de los aportes efectuados por el actor ante la Administradora son inferiores a los que habría cotizado de haber permanecido en Régimen de Prima con Prestación Definida».

En la sentencia T-818 de 2007, la Corte amparó el derecho del accionante a la seguridad social y a la libre escogencia de régimen pensional, con base en lo siguiente:

Por tanto, aquellas personas que, al momento de entrar a regir el artículo 36 de la ley 100 de 1993, hubiesen cotizado quince años o cumplieran con los requisitos de edad, adquirieron el derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el sistema anterior. Lo que acarrea como consecuencia lógica el derecho a trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida en cualquier momento para hacer efectivo dicho derecho, **con la única condición de que al cambiarse de régimen nuevamente se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado al**

régimen de ahorro individual con solidaridad. [Se destaca].

Lo anterior, se comprendió por la Corte en razón a la equivalencia en el ahorro pensional.

Sin embargo, en procura de mayor claridad sobre el traslado de *todo el ahorro*, integrando el porcentaje del 1,5% destinado, en el RAIS, al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 3995 de 2008, expedido con el propósito de evitar la vinculación simultánea de los afiliados a los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993, instituyó una regla aplicable a los traslados del RAIS al RPM, en aras de que se garantizara la equivalencia de los aportes de los afiliados.

El artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 estatuye:

Artículo 7°. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.

Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.

Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, RPM, la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos [...]. [Se destaca].

Se observa que, con la expedición del referido decreto, se integró una regla expresa en el ordenamiento jurídico, con los traslados del RAIS al RPM deben incluir el giro, no solo de los montos que alimentan las cuotas personales de los afiliados, sino, además e inexcusablemente, el porcentaje correspondiente al fondo de garantía de pensión mínima, el cual, como se explicó, era lo que generaba los problemas de equivalencia, en tanto que se trataba de un 1,5% que permanecía en el fondo privado correspondiente, aun cuando el afiliado se hubiese desvinculado de él.

La Corte Constitucional reconoció que, en efecto, la expedición del Decreto 3995 de 2008 constituyó una solución al problema, y que, a partir de este, las únicas diferencias en materia de aportes a pensión son las que se originan en la rentabilidad que lleguen a producir los fondos privados, o producto de cotizaciones voluntarias. En efecto, en la Sentencia T-1061 de 2011, esa Corporación manifestó lo siguiente:

29.- Ese problema detectado en la sentencia T-818 de 2007, consistente en la imposibilidad de cumplir con el requisito de la equivalencia del ahorro impuesto por la Sala Plena en la sentencia C-789 de 2002 a raíz de la reforma introducida por la ley 797 de 2003, ha sido solucionado por el decreto reglamentario 3995 expedido el 16 de octubre de 2008.

El decreto 3995 de 2008, que tiene como fin solucionar una situación generalizada de multifiliación pensional que se ha estado presentando (personas que resultan afiliadas a los dos regímenes existentes) y que no está permitida, señala las reglas para escoger uno de los dos regímenes y trasladar allí el ahorro efectuado en el otro. Así, en el artículo final del decreto se prescribió que las reglas para traslado de recursos descritas en el artículo 7 se aplicarían no sólo en los casos de multifiliación pensional sino también en los casos de las personas beneficiarias del régimen de transición que solicitaran regresar al régimen de prima media en los términos de las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.

El artículo 7, entonces, soluciona el impedimento al que alude la sentencia T-818 de 2007 pues estipula que cuando se realice traslado de recursos del régimen de ahorro individual al régimen de prima media se debe incluir lo que la persona ha aportado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Recuérdese que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de equivalencia del ahorro provenía, precisamente, de que en el régimen de ahorro individual el afiliado destina 1.5% de su cotización mensual al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, mientras que en el régimen de prima media ese 1.5% se dedica, junto con otro porcentaje del aporte mensual, a financiar la pensión de vejez; pero si al trasladarse de régimen al afiliado le devuelven lo que ha contribuido al mencionado fondo, la distribución del aporte contemplada en la ley 797 de 2003 ya no obstaculiza el cumplimiento de la exigencia impuesta en la sentencia C-789 de 2002 por la Sala Plena. [Resaltado fuera del texto original].

Cabe señalar que la precitada sentencia constituye una decisión clave en pro de la consolidación de una línea jurisprudencial según la cual los traslados del RAIS al RPM deben incluir el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, toda vez que, previamente, en la Sentencia T-324 de 2010, la misma Corte Constitucional había expuesto, con contundencia, que la diferencia generada por no trasladar el 1,5% que se destina al referido fondo, podía reducir el monto total del ahorro:

Sumado a lo anterior, quienes son acreedores del traslado pensional, deberán

trasladar todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, **lo cual incluye el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador en la respectiva cuenta individual y en el fondo de garantía de pensión mínima del RAIS**. Dicho ahorro no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido bajo la administración del Seguro Social. [Negritas fuera del texto original].

Así entonces, la Sala evidencia que, con la expedición de la Ley 797 de 2003, se generaron algunos inconvenientes en los traslados del RAIS al RPM, debido a que los aportes efectuados al primero no resultaban equivalentes o análogos, cuando el trabajador optaba por cambiarse de régimen. También, destaca que dichos inconvenientes, tal como lo advirtió la Corte Constitucional, encontraron solución con la expedición del Decreto 3995 de 2008, el cual ordenó expresamente que los traslados del sistema privado de pensiones al público deben incluir el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

No obstante, el ministerio consultante parece entender que el Decreto 3995 de 2008 se aplica para todo aquello que ocurrió y ocurra a partir de su *publicación*, tal como lo señala el artículo 14, lo cual significaría que su observancia y obligatoriedad no se predicaría de los traslados ocurridos antes de su expedición.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cuál es la regla que se debe aplicar a los traslados ocurridos entre la fecha de entrada en vigor de la Ley 797 de 2003 y la de publicación del Decreto 3995 de 2008? Es decir, ¿qué sucede con los aportes que fueron materializados en ese interregno?

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-062 de 2010, al analizar situaciones relacionadas con el traslado de personas beneficiarias del régimen de transición en pensiones, proporcionó una respuesta *parcial* al problema. Para el máximo tribunal de la jurisdicción Constitucional, las reglas contenidas en el Decreto 3995 de 2008, en materia de traslados, se aplican cuando los fondos deban ser traspasados del RAIS al RPM con posterioridad a su entrada en vigencia.

Por ende, para esa Corporación, al identificar el alcance del decreto, no resultan relevantes aspectos como la fecha de la solicitud de traslado ni aquella en que las cotizaciones pensionales se efectuaron. Lo relevante, para los traslados realizados **después** de la publicación del decreto, es el momento mismo en que los recursos deban ser trasladados.

Puntualmente, la Corte explicó, en la Sentencia SU-062 de 2010, lo siguiente:

Finalmente, es necesario aclarar que la orden de traslado del señor [...] está supeditada a la confirmación del cumplimiento del requisito de la equivalencia del ahorro porque el decreto 3995 del 16 de octubre de 2008 le es aplicable. **Aunque este acto administrativo no existía cuando el actor efectuó su solicitud de traspaso al Instituto de Seguros Sociales y ni cuando se estudió su procedencia por parte del Instituto de Seguros Sociales y de ING Pensiones y Cesantías, se debe aplicar a todo traslado de recursos que se efectúe en este tipo de casos después de su entrada en vigencia.** En ese sentido, el momento determinante para saber si el decreto mencionado resulta o no aplicable no es el de la petición ni el del análisis de su procedencia sino aquel en el cual se procede a entregar los dineros al régimen de prima media administrado por el ISS pues ésta es la situación que se regula. [Se destaca].

Así entonces, los traslados del RAIS al RPM que se hagan con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 3995 de 2008 implican que se movilice, además del saldo en las cuentas individuales del afiliado y sus rendimientos, el porcentaje del 1,5% que se haya destinado o estuviera destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sin importar la fecha en la que se realizó la solicitud, o si los aportes fueron efectuados antes de la expedición del referido decreto.

Comparte plenamente la Sala la tesis de la Corte Constitucional, en el sentido de otorgarle primacía a la fecha en la que debe efectuarse el traslado y no a la fecha de la solicitud o de la realización. Lo anterior, debido a que el Decreto 3995 de 2008 impone el deber de trasladar tales aportes, sin hacer mención ni distinción respecto del momento en que fueron efectuadas las cotizaciones respectivas, por parte del afiliado y/o de su empleador.

Ahora bien, hasta aquí podría responderse al cuestionamiento sobre qué sucede con los traslados efectuados **después** del Decreto 3995 de 2008, ya sea porque (i) las cotizaciones se adelantaron antes de su entrada en vigencia; o porque (ii) el traslado se solicitó antes o después de su entrada en vigencia. La respuesta dada por la Corte Constitucional consiste en que los recursos deben trasladarse en su integridad. Con este lineamiento la Sala responderá a la pregunta sobre los traslados efectuados **antes** del decreto.

En efecto, es razonable que la totalidad del ahorro depositado en el fondo de ahorro individual sea equivalente al monto total que se traslade al régimen de prima media, de lo contrario, se afectaría el principio de equivalencia del ahorro pensional y la diferencia generada por no trasladar el monto destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, puede incluso reducir el monto total del mismo.

Debe tenerse presente que los aportes que hacen los afiliados del régimen

pensional, aun cuando hacen parte del sistema de seguridad social en materia de pensiones, no pertenecen a las sociedades administradoras de fondos de pensiones ni al Estado, sino al propio sistema.

Las anteriores consideraciones se fuerzan con la postura sentada por el máximo tribunal en materia laboral, como se ve a continuación.

1.6. La tesis de la Corte Suprema de Justicia cuando se declara la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de ahorro individual con solidaridad

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido consolidado una tesis jurisprudencial que ha servido de fundamento para declarar la ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS, por vicios del consentimiento, derivado de la falta de información suficiente que tuvieron los afiliados al sistema pensional, acerca de las características, ventajas y desventajas que suponía para ellos el cambio del régimen pensional.

Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia parten de la premisa de que las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información y explicación completa y comprensible de las consecuencias de este cambio de régimen. Con fundamento en dicha premisa, se ha llegado a la conclusión de que muchos traslados del RPM al RAIS se originaron en una inducción al error contra los afiliados, a quienes les plantearon que si se trasladaban al régimen privado obtendrían mejores beneficios para su situación pensional individual, y, entre otras cuestiones adicionales, no serían cobijados por las reformas pensionales que se encontraban *ad- portas* de aprobar en el régimen público.

Sin embargo, llegado el momento de la pensión, algunos afiliados se percataron de que los beneficios planteados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, o sus intermediarios, no eran tales y que, por el contrario, el cambio al régimen privado se había traducido para ellos, en realidad, en mayores exigencias para obtener la pensión y menores beneficios que los que hubiesen obtenido de haber permanecido en el RPM. De hecho, a muchos de los que se trasladaron a los fondos privados les negaron el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por no tener el capital acumulado establecido en la ley para que se pudiese cumplir con dicha prestación.

Para corregir esta situación, y en aras de salvaguardar ciertas garantías fundamentales de los afiliados, la Corte Suprema de Justicia ha declarado la *ineficacia* de varios traslados del RPM al RAIS, lo cual supone que las

personas retornen al sistema público, sin perder los derechos o expectativas que hubiesen adquirido, de haber permanecido en dicho régimen, incluso si ya no se encuentran dentro del término de diez años en el que, según la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003), está vedado el traslado entre un subsistema y otro, o si no han transcurrido los cinco años de permanencia en un mismo régimen, exigidos para los mismos efectos.

Entre las primeras sentencias en las que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, se encuentra la del 9 de septiembre de 2008, expediente 31989, en la cual se precisó lo siguiente:

La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Se observa que, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la decisión que deja sin efectos un traslado del RAIS al RPM implica la devolución al sistema de todos los valores que hubieran recibido con motivo de la afiliación del actor, cualquiera que sea su denominación, lo cual incluye los frutos y rendimientos obtenidos.

Pese a que esta tesis la han aplicado de forma pacífica los juzgados y las salas laborales de los tribunales superiores, así como la misma Corte Suprema de Justicia, la casuística ha generado ciertas dudas frente a algunos componentes de las cotizaciones de los trabajadores. Estas dudas condujeron a que el alto tribunal, en providencias de reciente data, efectuara unas precisiones adicionales, en aras de que este tipo de decisiones no resultaran nugatorias.

Las precisiones de la Sala de Casación Laboral que importan al *sub examine* están relacionadas con las consecuencias retroactivas o *ex tunc*, en palabras de esta autoridad, que comporta la declaratoria de ineficacia de los traslados del RPM al RAIS y el tratamiento de los aportes efectuados por el afiliado al fondo privado, especialmente lo que corresponde al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sobre lo cual se hicieron unas explicaciones que es relevante mencionar, al constituir un punto medular del tema consultado.

Sobre este asunto, la Corte Suprema de Justicia manifestó:

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

[...]

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima». [Énfasis añadido].

Para la Sala de Consulta, el alcance de la precitada decisión que interesa a este concepto no es el de las consecuencias de la ineficacia, en los términos previstos por el Derecho Privado, sino la premisa según la cual no existe razón alguna para considerar que los aportes destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima deben estar en un régimen distinto de aquel en el que se encuentre el afiliado, lo cual significa que, si acontece un traslado del régimen privado al público, la misma suerte deben correr los recursos que alimentan el mencionado fondo, porque, con ellos, se financia la pensión de vejez.

El caso analizado en la última sentencia transcrita de la Corte Suprema de Justicia tiene una relevancia mayúscula, si se considera el problema jurídico de esta consulta, toda vez que analiza la situación de un afiliado que estuvo vinculado al sistema público hasta el año 2001, fecha en la cual se trasladó al RAIS, en donde permaneció hasta julio de 2020, cuando se expidió la decisión en sede de casación.

Resulta claro que el 100% del monto de las cotizaciones que hizo el trabajador al RAIS, entre 2001 y 2020, estuvo administrado por el fondo privado correspondiente. También es claro que de las cotizaciones que hizo el trabajador al sistema privado, en el referido periodo, un porcentaje correspondiente al 1,5% se destinó al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y, tal como lo ordena la ley y el reglamento, permaneció ahí hasta que la Corte Suprema de Justicia expidió la sentencia que ordenó devolver ese porcentaje

al RPM.

En este orden de ideas, el argumento según el cual la falta de regulación taxativa, respecto de que el traslado de los aportes del RAIS al RPM debe incluir aquellos depositados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que se recaudaron en vigencia de la Ley 797 de 2003, pero con antelación al Decreto 3995 de 2008, que establece que, en el «traslado de cotizaciones [del RAIS al RPM] se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS», no tiene la fortaleza suficiente para impedir que estos recursos fueran trasladados e imponer que quedaran en las arcas del régimen privado.

En armonía con este planteamiento, la Corte Suprema de Justicia, de manera precisa, ordenó que todos los aportes efectuados por el trabajador para la obtención de la pensión de vejez debían ser transferidos al régimen que de manera libre escogiera el afiliado.

Es decir, para la Corte Suprema de Justicia, lo relevante es cerciorarse de que en el régimen pensional en que se encuentre el cotizante estén también sus aportes pensionales. En consecuencia, si aquel opta por un cambio de régimen, lo propio debe ocurrirles a los aportes, sin salvedad ni excepción alguna.

En adición, uno de los fundamentos constitucionales por los cuales la Corte Suprema de Justicia considera que los aportes pensionales deben estar en el régimen al que se encuentra vinculado el cotizante, está relacionado con el principio superior de sostenibilidad fiscal, previsto en el artículo 48 de la Carta, aspecto sobre el cual la Sentencia SL1512-2022, radicación núm. 822881, del 3 de mayo de 2022, prescribió:

De igual modo y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que opera en favor de Colpensiones, en desarrollo del principio de sostenibilidad financiera del RPM previsto en el artículo 48 de la CP, la AFP Porvenir S.A., deberá devolver a Colpensiones, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, y comisiones, con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por esta última (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, SL4062-2021).

En esa medida, habrá de adicionarse el fallo de primer grado, en el sentido de condenar a la AFP Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros

previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y las comisiones, con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Quiere decir lo anterior, parafraseando a la Corte Suprema de Justicia, que la decisión que ordena trasladar los recursos pensionales al régimen al que esté vinculado el cotizante no lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del Sistema General de Pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional.

1.7. Naturaleza de los recursos destinados a pagar las pensiones

Los recursos del Sistema General de Pensiones, en los dos regímenes, provienen de tres fuentes: *i)* los aportes que hacen los afiliados y empleadores para que los primeros puedan obtener una pensión, en cualquiera de sus modalidades; *ii)* los aportes del Estado que sean necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas, en los casos que establece el ordenamiento legal; y *iii)* los rendimientos que generen los aportes.

Las normas no definen, en forma clara y expresa, cuál es la naturaleza de los recursos del Sistema General de Pensiones. No obstante, por una parte, la Constitución Política de 1991, en el artículo 48, dispone que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines *diferentes* a ella, y por otra, los artículos 9 y 13 de la Ley 100 de 1993 señalan que dichos recursos no pertenecen a la Nación ni a las entidades que los administran, y no pueden ser destinados para fines *diferentes* a ella.

Ahora bien, el hecho de que la Ley 100 de 1993 no defina expresamente la naturaleza de los recursos con los cuales se pagan las pensiones, no quiere decir que sea imposible inferir su naturaleza jurídica, ya que la normativa en mención establece algunas características, tales como su destinación específica (artículo 9), su inembargabilidad (artículo 134) y su tratamiento tributario (artículo 135), a partir de las cuales el Consejo de Estado, tanto en sede consultiva como jurisdiccional, ha efectuado unas interpretaciones, que vale la pena traer a colación, para ratificar que los recursos del sistema pensional no son, en estricto sentido, de quienes los aportan ni de quienes los administran.

Esta Sala, en ejercicio de la función consultiva, tuvo la oportunidad de referirse a los recursos del sistema pensional, como a continuación se observa:

Es claro, entonces, que hoy y dentro del Sistema General de Pensiones, no se puede afirmar que las pensiones reconocidas por los fondos de pensiones o por el ISS, financiadas en todo o en parte con los aportes o cotizaciones **de índole parafiscal** obligatoria pagados por entes públicos a dichos fondos o al ISS, constituyen asignaciones provenientes del tesoro público, pues **una vez pagadas dichas cotizaciones patronales en cumplimiento de ese deber legal, los recursos son del Sistema y no pertenecen ni a la Nación ni a las entidades que los administran. Con tales aportes, las entidades públicas satisfacen un deber legal respecto de sus servidores y, por consiguiente, los recursos salen de su patrimonio e ingresan al sistema general de pensiones, refundiéndose con todos los demás recursos del mismo sistema, los cuales si bien tienen naturaleza pública por provenir de una contribución parafiscal, no son propiedad de ninguna entidad estatal ni pertenecen al tesoro público.**

[...]

De esta forma, una vez que la entidad estatal u oficial realiza el pago de sus aportes al sistema general de pensiones en cumplimiento de su deber legal como patronos (arts. 20 , 22 y 23 ley 100, el primero modificado por el artículo 7º ley 797) - recursos parafiscales -, o efectúa el pago del bono pensional a que está obligado en las hipótesis de los artículos 113 y siguientes de la ley 100, en concordancia con los artículos 13, 33 y 67 de la misma, los dineros así entregados dejan de tener la naturaleza de recursos del tesoro y se convierten en recursos del sistema general de pensiones, los cuales, a la luz de las normas de la ley 100 (arts 32 literal b) 59 y 60), ratificadas por las de la ley 797 (arts.2º literal m) y 7) no pertenecen a la Nación ni a las entidades que los administran y no pueden destinarse ni utilizarse para fines distintos de los propios a la seguridad social (art. 9 L.100). [Negrillas fuera del texto original].

El concepto citado hace referencia a que los recursos pensionales no son de quienes los aportan, de quienes los administran, ni tampoco del tesoro público, y agrega que están comprendidos dentro del concepto de *contribuciones parafiscales*, los cuales, de conformidad con lo establecido por el artículo 29 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se definen como aquellos que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector:

Artículo 29. Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable [...].

Posteriormente, la Corte Constitucional ratificó lo dicho por la Sala de Consulta,

en el sentido de que los recursos del sistema pensional son de carácter parafiscal, y que no son de propiedad de la Nación ni de quienes los administran:

3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado también hizo un análisis sobre la naturaleza parafiscal de los recursos del sistema pensional, desde una óptica eminentemente tributaria, para concluir que dichos recursos no están gravados con impuesto alguno, debido a la aludida naturaleza. Empero, la sentencia citada deja claro que no todos los recursos relacionados con la seguridad social deben ser percibidos bajo un mismo racero, debido a que no todos se usan para pagar prestaciones pensionales.

A esta conclusión arribó la Sección Cuarta, por vía de la interpretación del artículo 4 del Decreto 841 de 1998, el cual señala que «gozarán de exención de impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, los recursos de los Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de los fondos de reparto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, del fondo de solidaridad pensional, de los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, y las reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos».

Los términos exactos de la sentencia de la Sección Cuarta son:

El artículo 135 de la Ley 100 de 1993 dispone que los recursos de los Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los recursos de los Fondos de Reparto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, los recursos de los Fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de los bonos pensionales y los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, gozan de exención de toda clase de impuestos del orden nacional.

Lo anterior significa que los aportes obligatorios para pensión tienen naturaleza parafiscal y, en consecuencia, no pueden ser gravados con ningún impuesto.

[...]

Bajo el criterio expuesto, la exención se aplica solo para los recursos a los que se refiere el Decreto 841 de 1998, por ser los afectos al Sistema General de Pensiones ya que, como antes se anotó, los recursos de la reserva de estabilización de rendimientos son de propiedad de las Sociedades Administradoras debido a que se conforman con recursos propios de ellas y, por consiguiente, los rendimientos generados por dicha reserva, contrario a lo afirmado por el accionante, se consideran ingresos ordinarios gravables del respectivo año, en la medida que no fueron excluidos por el legislador.

La Sala sintetiza los pronunciamientos citados, así: *i)* los recursos del sistema pensional son de naturaleza parafiscal y, en tal virtud, no son de la Nación, de las entidades que los administran, de los empleados ni de los empleadores; *ii)* tienen una destinación específica, que consiste en financiar las pensiones y demás prestaciones cubiertas por el sistema, cuando se cumplan los requisitos fijados por el Legislador; y *iii)* no son embargables ni susceptibles de ser gravados con tributos.

1.8. El principio de favorabilidad como criterio de interpretación en el análisis de casos que involucren la protección del derecho a la seguridad social

El artículo 53 de la Constitución establece, como uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo, el de favorabilidad laboral, consistente en el deber de aplicar la consecuencia más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales del derecho:

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Código Sustantivo del Trabajo también se refiere al principio constitucional de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta, en los siguientes términos:

Artículo 21. Normas más favorables. **En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador.** La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. [Énfasis añadido].

Según lo establecido en el precitado artículo 21, el principio de favorabilidad es aquel que permite aplicar la norma de trabajo más favorable al trabajador, cuando su aplicación genere conflicto o dudas.

La Corte Constitucional ha precisado el alcance, definición y contenido del principio de favorabilidad laboral, en los siguientes términos:

De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. **La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad,** ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador. [Negritas por fuera del texto original].

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional edificó una robusta línea jurisprudencial sobre el principio de favorabilidad en materia de derecho del trabajo. La Sentencia SU-138 de 2021 condensa las principales características de dicho principio, así:

- i) Opera como un mecanismo de solución para los conflictos entre normas o interpretaciones vigentes sobre las fuentes formales del derecho del trabajo.
- ii) Su aplicación no es potestativa sino obligatoria.
- iii) Tanto los jueces como las autoridades administrativas están vinculadas con su aplicación.

iv) Obra en dos escenarios: cuando se presentan diversas fuentes de derecho que se contraponen en sus consecuencias jurídicas o cuando concurren distintas interpretaciones de una misma disposición que llevan a consecuencias igualmente diferentes.

v) Debe preferirse aquella disposición o interpretación, según el caso, que otorga un mayor grado de protección a los derechos del trabajador.

1.9. Análisis de la Sala y solución al problema jurídico

Afirma el ministro consultante que, con la Ley 797 de 2003 se creó en el RAIS el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y se precisó el porcentaje que debía destinarse a su financiación. Sin embargo, en este cuerpo normativo no se especificó si, ante el trasladado de los afiliados al RPM, debía incluirse dicho porcentaje. Solamente hasta el Decreto 3995 de 2008, el Gobierno Nacional, precisó que los traslados del régimen privado al público debían incluir dichos recursos.

Según indica, por la ausencia de esa regla expresa, respecto de los traslados efectuados entre 2003 y 2008, las administradoras del RAIS transfirieron al RPM los aportes de los afiliados que solicitaron el cambio de régimen, **sin** incluir el monto que de sus cotizaciones se había destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Tal situación, además, alteró las historias laborales registradas en el sistema público, pues Colpensiones no acreditó la totalidad de cotizaciones reportadas en el RAIS por la vinculación al sistema privado.

Como pasa a explicar la Sala, los traslados del RAIS al RPM, incluidos los efectuados entre la Ley 797 de 2003 y la expedición del Decreto 3995 de 2008, deben comprender los aportes pensionales del afiliado, integrando el porcentaje que de sus cotizaciones fue destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En cualquier caso, en el RPM debe acreditarse la totalidad de las semanas reportadas, y ante la ausencia de pago total, Colpensiones cuenta con las facultades pertinentes para el cobro.

En efecto, como señala el ministro, una vez creado el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, mediante la Ley 797 de 2003, la regla expresa consistente en que el traslado del RAIS al RPM comprendía el porcentaje de las cotizaciones destinado a su financiación no se positivizó en el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, cualquier duda al respecto se despejó con el Decreto 3995 de 2008, mediante el cual el Gobierno Nacional dispuso, en que:

Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.

Es importante señalar que, en modo alguno, puede interpretarse el Decreto 3995 de 2008 por fuera del contexto del marco pensional creado por la Ley 100 de 1993, ni como una norma que estatuye situaciones diferentes a las de la referida ley y sus reformas, cuyo *telos* aboga por permitirle a los trabajadores que se pensionen con el producto de todo lo que ahorraron, bajo el principio de equivalencia del ahorro pensional.

De hecho, el Decreto 3995 de 2008, sin hacer alusión a limitante, excepción o salvedad alguna, relativa a, entre otros, la fecha, el monto o la distribución de las cotizaciones, dispone que «Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS».

Ahora bien, sobre los traslados del RAIS al RPM materializados entre 2003 y 2008, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha fijado unas reglas jurisprudenciales que sirven como parámetro y que vale reiterar.

La Corte Constitucional, en armonía con el principio de equivalencia del ahorro pensional, ha sostenido que, el traslado pensional implica traspasar todo lo que hayan ahorrado los trabajadores en el RAIS, lo cual incluye el saldo, en unidades, de los aportes efectuados a nombre del cotizante, en la respectiva cuenta individual y en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En concordancia, ha sostenido que el ahorro no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente.

Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que si se reconoce que un trabajador que se cambió del RPM al RAIS tiene derecho a devolverse al RPM, dicha devolución incluye que se trasladen *todos* los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, incluso con efectos retroactivos, e incluye los rendimientos correspondientes, porque dichos recursos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Además del principio de equivalencia de ahorro pensional, en el que enfatiza la jurisprudencia, vale señalar que la sostenibilidad fiscal del RPM también podría resultar comprometida, en caso de que los traslados del sistema privado al público no incluyan la parte del ahorro que se destina al Fondo de Garantía de

Pensión Mínima, toda vez que, en el RPM, Colpensiones, para no desconocer el monto y el tiempo por el cual se han efectuado cotizaciones, tendría que pagar las pensiones de sus afiliados sin contar con la totalidad de los recursos derivados de los ahorros pensionales. Y, en contraste, los fondos privados de pensiones conservarían los recursos depositados el mentado fondo, sin que el afiliado que los cotizó se encuentre vinculado al RAIS.

Lo anterior, sumado al principio de favorabilidad al que se refiere el artículo 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual entre dos o más posibles soluciones a una situación, debe preferirse aquella que resulte más favorable para el trabajador, es decir, la que permita la aplicación más amplia y efectiva del derecho fundamental.

En este caso, cabría interpretar, como lo hicieron algunas administradoras del RAIS, que, por no haber un acto administrativo expreso, no era necesario el traslado de las cotizaciones del trabajador, que internamente destinaron al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. La otra interpretación consiste en que, como de ordinario se venía haciendo, los recursos pagados por el afiliado debían trasladarse al RPM, sin perjuicio de lo destinado a gastos de administración y primas de seguros y reaseguros. Debido a que la segunda es la interpretación más favorable, por permitirle al cotizante conservar la equivalencia de ahorro pensional y al sistema de seguridad social la sostenibilidad financiera, es esta última la procedente en el ordenamiento jurídico colombiano.

La interpretación de los principios señalados conduce a la Sala a aseverar que los traslados del RAIS al RPM, cualquiera que sea el momento en que se presenten, contienen la implícita e indivisible obligación de que se giren todos los aportes cotizados por el afiliado, sin distinción ni salvedad alguna, puesto que dichos recursos no pertenecen a los fondos privados de pensiones.

En tal medida, los fondos privados de pensiones no pueden fraccionar los aportes pensionales, y decidir cuál rubro se traslada y cuál no, puesto que la obligación que nace, a partir de la voluntad del afiliado, de cambiarse de régimen, incluye el traslado de la porción que se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en tanto que así lo señalan el reglamento y la jurisprudencia.

Así, los aportes pensionales deben estar en el régimen en el que se encuentre el trabajador o cotizante. Esta respuesta surge de una lectura del ordenamiento jurídico que comprende el marco constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial, así como la interpretación del principio de equivalencia del ahorro pensional, de sostenibilidad fiscal, y de favorabilidad.

Entonces, si una persona se trasladó del RAIS al RPM, en vigencia del Decreto 3995 de 2008, o antes, pero, en este último caso, los recursos del fondo de garantía de pensión mínima no se han transferido, dicho traslado sí procedía, sin importar la fecha en la que se solicitó el traslado o aquella en que la administradora del fondo de pensiones recibió las cotizaciones respectivas.

Cabe mencionar que, para la Sala no resulta razonable ni acorde con los principios sobre los que se edifica la seguridad social, que un cotizante, para efectos de poner a salvo un derecho de rango constitucional, como la pensión, deba agotar una formalidad, como sería, por ejemplo, la de presentar una petición a la sociedad administradora del fondo privado en el que hayan permanecido sus aportes, entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008, para lograr que sean trasladados al RPM la totalidad de sus aportes y, especialmente, aquella parte destinada al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, obligación que, de suyo, deben cumplir las administradoras de pensiones.

Ahora bien, la historia laboral de un trabajador, así como los aportes obligatorios al sistema no deben ser desconocidos o sufrir variación alguna por el hecho de que se presente un traslado del régimen privado al público, toda vez que, los aportes que se giren al RPM, luego de que el trabajador haya decidido desvincularse del RAIS, no pueden ser inferiores al monto total del aporte legal efectuado.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala, cualquier circunstancia que se vislumbre como una desmejora de los ahorros de los afiliados, o de sus expectativas de jubilación, sea por el hecho del reglamento o de una interpretación de este, no tiene viabilidad jurídica, puesto que desconoce los pilares del Estado social y democrático de derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de relieve que una cosa son las semanas cotizadas por una persona en el Sistema General de Pensiones, o, en general el tiempo laborado, y otra distinta, es el valor de los aportes efectuados en su nombre, o el monto de los ahorros que tenga en su cuenta individual (en el caso del RAIS), y que deban trasladarse al RPM.

En consecuencia, cuando una persona se traslada del RAIS al RPM, la primera obligación de Colpensiones es registrar el tiempo, en semanas, que esa persona cotizó efectivamente en el RAIS, de acuerdo con la información que le reporte la correspondiente administradora, sin que pueda hacer ningún recorte, alteración o modificación en dicha información, toda vez que la ley no la autoriza para ello. La segunda, consiste en recibir los recursos que la persona

tuviera en su cuenta de ahorro individual, y el bono pensional, incluyendo o no, según el caso, el porcentaje destinado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme con lo explicado.

Así, si Colpensiones advierte que el monto traslado por la administradora del RAIS no corresponde a las semanas cotizadas, y que, por lo tanto, debe ser mayor, está facultada para reclamar a dicha administradora el valor faltante, sin que ello signifique trasladar al afiliado las consecuencias económicas de la discrepancia que pueda existir, a este respecto, entre dicha entidad y un fondo privado, la cual debe ser solucionada entre ellas.

Por último, es importante para la Sala indicar, por un lado, que los derechos pensionales son imprescriptibles, y por otro, que el giro al RPM del porcentaje de las pensiones que se deposita en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima no es una operación que, en principio, desde el punto de vista operativo, sea susceptible de ser considerada como una cuestión compleja, puesto que los fondos privados deben mantener separados los ahorros de los trabajadores, de sus propias cuentas, así como también los recursos que se destinan a financiar la garantía de pensión mínima.

1.9. Conclusiones

a) El Fondo de Garantía de Pensión Mínima, como su nombre lo indica, es un fondo constituido con los aportes que hacen todos los afiliados al RAIS, cuyo propósito es completar los recursos necesarios para financiar las pensiones de aquellas personas que no cuentan con el capital suficiente para acceder a una pensión de un salario mínimo, que, actualmente, se alimenta con el porcentaje del 1,5% de las cotizaciones de los trabajadores.

b) El traslado de régimen pensional contiene la implícita e indivisible obligación de que se giren todos los aportes cotizados por cuenta del afiliado, sin distinción ni salvedad alguna, puesto que dichos recursos son del sistema, no de los fondos privados de pensiones, a excepción del porcentaje destinado para gastos de administración y primas de seguros y reaseguros. Esta regla aplica también a los traslados efectuados o materializados entre el año de creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, mediante la Ley 797 de 2003, y el Decreto 3995 de 2008.

c) Las reglas contenidas en el Decreto 3995 de 2008 no están limitadas a condiciones como la fecha, el monto o la distribución de las cotizaciones. Por ende, la disposición conforme con la cual «Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de

Garantía de Pensión Mínima del RAIS», resulta aplicable a todas las transferencias de recursos que se efectúen en virtud de un traslado.

d) Cada afiliado al RAIS tiene una cuenta individual de ahorro pensional, que está conformada por subcuentas que incorporan lo abonado. En una de esas subcuentas están depositados los recursos destinados a financiar la garantía de pensión mínima.

e) Los traslados del RAIS al RPM no pueden afectar el principio de equivalencia del ahorro pensional. En tal virtud, dichos traslados implican, por un lado, que Colpensiones registre el mismo número de semanas que tenía el trabajador en el RAIS, y por otro, que se giren todos los ahorros.

f) En vista del principio de sostenibilidad financiera, los aportes que se giren al RPM, luego de que el trabajador haya decidido desvincularse del RAIS y trasladarse a aquel, no pueden ser inferiores al monto total del aporte legal correspondiente. De lo contrario, Colpensiones, tendría que pagar las pensiones de sus afiliados sin contar con la totalidad de los ahorros pensionales

g) En virtud del principio de favorabilidad, las normas en materia de seguridad social deben ser interpretadas de la forma que resulte más favorable al trabajador, en cuanto a la eficacia, amplitud y protección de sus derechos fundamentales y legales.

h) Los recursos que ingresan al sistema pensional no pertenecen a los fondos privados de pensiones, salvo el porcentaje que corresponda a su administración y al pago de las primas de seguros y reaseguros. Esos recursos son de carácter parafiscal, y forman parte del Sistema General de Pensiones.

i) En razón de todo lo anterior, el giro de todos los ahorros del RAIS al RPM debe incluir el saldo total de los aportes efectuados a nombre del trabajador en su respectiva cuenta individual, incluyendo lo que se haya destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y sin perjuicio de que el traslado se hubiera efectuado entre 2003 y 2008.

En atención a las consideraciones anteriores,

III. La Sala RESPONDE:

Debido a su similitud, la Sala responderá las preguntas 1 y 2 en una sola respuesta:

1. *¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado únicamente, sin incluir el porcentaje que del valor de los aportes realizados fue girado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), a pesar de, como quedó dicho anteriormente, que el registro muestra una notoria diferencia en el número de semanas acreditadas en el RPM frente a las reportadas en el RAIS?*

2. *¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado, sin incluir los aportes realizados con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), y que en el Régimen de Prima Media RPM se acredite el número total de semanas cotizadas en el RAIS, sin que se perciba una diferencia entre los dos registros y sin que sea necesario solicitar el giro del porcentaje correspondiente al aporte remitido al FGPM?*

Conforme con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008, todos los traslados del RAIS al RPM deben incluir el porcentaje que del valor de los aportes realizados por el cotizante haya sido girado con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, independientemente de la fecha en la que dichos aportes se hayan causado o de la fecha de solicitud del traslado.

En cualquier caso, las semanas de cotización que se deben reflejar en el RPM, luego del traslado, no pueden ser inferiores a las que el mismo afiliado tenía reportadas en el RAIS (a través de la respectiva sociedad administradora).

3. *En virtud de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, ¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2018 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, las Administradoras del Régimen de Ahorro Individual deben remitir a Colpensiones la totalidad de los recursos pagados por el afiliado incluidos los acreditados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y por consiguiente Colpensiones debe acreditar la totalidad de semanas registradas en el RAIS por el mismo periodo cotizado sin que se presente*

diferencia alguna?

Sí, para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008, del RAIS al RPM, y cuyos aportes no se transfirieron, en su totalidad, antes de la última fecha indicada, las administradoras del régimen de ahorro individual deben remitir a Colpensiones la totalidad de los recursos pagados por cuenta del afiliado, incluidos los acreditados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Por su parte, Colpensiones debe acreditar la totalidad de semanas registradas en el RAIS por el mismo periodo cotizado, sin que se presente diferencia alguna respecto de las semanas reportadas a nombre del trabajador, en el régimen privado.

Lo anterior, con fundamento en el principio de equivalencia del ahorro pensional.

Remítase a la ministra del Trabajo y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

ANA MARÍA CHARRY GAITÁN
Presidenta de la Sala

ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS
Consejero de Estado

MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA
Consejera de Estado

ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
Consejero de Estado

REINA CAROLINA SOLÓRZANO HERNÁNDEZ
Secretaria de la Sala



Ca4524503

República de Colombia
N° 3064



Aa089777008 1

NOTARÍA DIECIOCHO (18) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.**ESCRITURA PÚBLICA:**

TRES MIL SESENTA Y CUATRO (3064)

N° 3064

FECHA OTORGAMIENTO: DICIEMBRE QUINCE (15) DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

PRIMER ACTO

REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL

PODERDANTE:

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. con NIT. 800.144.331-3 debidamente representada por SILVIA
LUCÍA REYES ACEVEDO identificado(a) con C.C. No. 37.893.544 expedida en
San Gil- Santander.

APODERADOS:

NOMBRE	CEDULA ó NIT
ADOLFO TOUS SALGADO	8285008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	39777477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	53077586
ALEJANDRO ARGOTI NARANJO	1018447580
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	79985203
ANA MARIA ROMERO LAGOS	1019119578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	42162378
ANA XIMENA TAMAYO	36286470
ANDREA AYALA GOMEZ	1140887859
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	52253673
ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA	1045685857
ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS	1140857122
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	1069582580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	1053844786
ANDRES GONZALES HENAO	10004318
ANDRES LALINDE CERON	1037641903

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

1136JANVPAAZ3D3

09-10-23

Cadena S.A. - notario

Cadena S.A. - notario

11373G4DDY9CC

3064

2

ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591
ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CARLA SANTA FE FIGUERO	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	43730160
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	1017170491
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARGARITA BERROCAL LENGUA	1067874002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Ca 4524503

República de Colombia

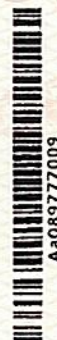
cadena 3064



Aa089777009 3

ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICO URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	79581111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN JOSE JARAMILLO SANCHEZ	1035877468
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ	1017227899

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777009



11364ADADPPAAJ3

09-10-23

Cadena S.A. No. 090935340

02-11-23

11374EAG4DYY9

KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEO	1082930759
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MANUELA QUEVEDO CARDONA	1152467457
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ	1143150933
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Ca 4524503

cadena

República de Colombia



Aa089777010 5

3064

MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDER S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
SHULY ROXANA GOMEZ FANG	1050957682
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 00411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924
VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ	1070022343
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VANESSA LICETH BELLO SALCEDO	1140855245
VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA	40945070
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777010



09-10-23 • 1136572ADA9PPAA

Cadena S.A. No. 09-10-23

Cadena S.A. No. 09-10-23

11375aGEAG4D4

WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477

VALOR DEL ACTO: SIN CUANTÍA.-----

-----SEGUNDO ACTO-----

-----PODER ESPECIAL-----

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: -----

PODERDANTE: -----

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A. con NIT. 800.144.331-3 debidamente representada por SILVIA
LUCÍA REYES ACEVEDO identificado(a) con C.C. No. 37.893.544 expedida en
San Gil – Santander.-----

APODERADOS:-----

NOMBRE	CEDULA ó NIT
ADOLFO TOUS SALGADO	8285008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	39777477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	53077586
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	79985203
ANA MARIA ROMERO LAGOS	1019119578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	42162378
ANA XIMENA TAMAYO	36286470
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	52253673
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	1069582580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	1053844786
ANDRES GONZALES HENAO	10004318
ANDRES LALINDE CERON	1037641903
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591



Ca4524503

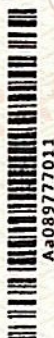
República de Colombia
cadena **Nº 3064**



Aa089777011 7

ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
BRENDA ZULGEY MERCADO FERREIRA	1098663314
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CAMILO ANDRES POVEDA VILLANOVA	1102549082
CARLA SANTAFE FIGUERO	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS ANDRES VIUCHE FONSECA	1144027236
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CARMEN YOJANA RAMIREZ VILLEGAS	43209298
CAROLD JULIANA MONRROY MORENO	52456659
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANA VALENTINA CORTES CIFUENTES	1069266048
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DANYELA KATHERINE MONTES BENITEZ	1001914904
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777011



11361PAAZO-AAP

09-10-23

Cadena SA No. 894935340

02-11-23

11371YACG8AE4

EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICO URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DÍAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635
HECTOR JOSE BONILLA LIZCANO	7715904
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JESUS HUMBERTO GAITAN LEAL	19441758
JHON ALEXANDER PABON MORALES	80744875
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JORGE LUIS FONTALVO CORREA	1045734875
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144



Ca 4524503

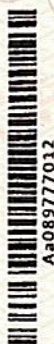
República de Colombia
cadena 3064



Aa089777012 9

JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
KIMBERLY ZARITH VILLANUEVA LÓPEZ	1045715327
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LEIDY VICTORIA JARA MUÑOZ	53037192
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LIZETH ANGELICA RODRIGUEZ MARTINEZ	1022409921
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MALORY SALTAREN RAMIREZ	1083024582
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA ALEJANDRA QUINTERO MUÑOZ	1152217116
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA ANDREA FLOREZ DAVID	1069501523
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777012



11362PPAAZZ091A

09-10-23

Cadena S.A. No. 99030534-0

Cadena S.A. No. 99030534-0 02-11-23

11372DCYACGaA

MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ANGEL MARQUEZ SERRANO	13839869
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922
MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
MONICA ESPERANZA TASCO MUÑOZ	1018451024
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
OLGA MILENA MUNZA MOLANO	1016040173
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDER S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SANTIAGO CADENA MANTILLA	1018508615
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 900411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924



Ca 4524503

República de Colombia
cadena 3064



Aa08977701311

VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434
WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477

VALOR DEL ACTO: SIN CUANTÍA.

En la Ciudad de Bogotá Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los QUINCE (15) días de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023), en la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá, estando, fungiendo como Notario En Propiedad JOSÉ MIGUEL ROBAYO PIÑEROS, se otorgó Escritura Pública en los siguientes términos:

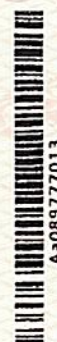
PRIMER ACTO

REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL

COMPARECÍO CON MINUTA ESCRITA

SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.893.544 expedida en San Gil - Santander, quien en su calidad de Vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3, sociedad de servicios financieros legalmente constituida por Escritura Pública número cinco mil trescientos siete (5307) de fecha veintidós (22) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Veintitrés (23) del Círculo Notarial de Bogotá, con autorización de funcionamiento conferida por la Superintendencia Financiera de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777013



11363APPAAZDA

09-10-23

cadena s.a. no papeles

cadena s.a. no papeles 02-11-23

11373G4DGYACC

Colombia mediante la Resolución S.F.C. 3970 del treinta (30) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) y domicilio principal en Bogotá D.C, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se anexa para su protocolización, y;--

-----**MANIFESTÓ**-----

PRIMERO: Que por medio del presente instrumento público se **REVOCA** los **PODERES ESPECIALES**, otorgados por medio de la Escritura Pública número mil doscientos ochenta y uno (1281) otorgada el dos (02) de junio del año dos mil veintidós (2023) en la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., a las personas a las cuales se les había conferido poder especial mediante dicha escritura, dejándola sin valor, ni efecto alguno. -----

-----**HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA**-----

NOTA UNO (1). - Acude a este despacho a **REVOCAR** en todas y cada una de sus partes **EL PODER ESPECIAL** otorgado a:-----

NOMBRE	CEDULA ó NIT
ADOLFO TOUS SALGADO	8285008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	39777477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	53077586
ALEJANDRO ARGOTI NARANJO	1018447580
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	79985203
ANA MARIA ROMERO LAGOS	1019119578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	42162378
ANA XIMENA TAMAYO	36286470
ANDREA AYALA GOMEZ	1140887859
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	52253673
ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA	1045685857
ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS	1140857122
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	1069582580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	1053844786
ANDRES GONZALES HENAO	10004318
ANDRES LALINDE CERON	1037641903

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Ca4524503

República de Colombia
cadena #3064



Aa08977701413

ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591
ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CARLA SANTAFE FIGUERO	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	43730160
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	1017170491
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARGARITA BERROCAL LENGUA	1067874002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777014

11364ADA3PPAAZ

09-10-23

Cadena SA. No. 090495340

Cadena SA. No. 090495340 02-11-23

11374EAG4DKYA

ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICÓ URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	79581111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN JOSÉ JARAMILLO SANCHEZ	1035877468
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ	1017227899



Ca4524503

 República de Colombia
cadena # 3064

Aa089777015¹⁵

KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEO	1082930759
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MANUELA QUEVEDO CARDONA	1152467457
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ	1143150933
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777015



113652aDAZPPAA

09-10-23

Cadena S.A. No. 0000000000

Cadena S.A. No. 0000000000 02-11-23

11375aGEAG4D9

MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDÉR S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
SHULY ROXANA GÓMEZ FANG	1050957682
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 900411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924
VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ	1070022343
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VANESSA LICETH BELLO SALCEDO	1140855245
VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA	40945070
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434



Ca4524503

República de Colombia
cadena 3064



Aa08977701617

WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477



NOTA DOS (2).- Con esta revocación, SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, quien actúa en nombre y representación de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., identificada con NIT. 800.144.331-3, declara CANCELADA la Escritura Publica número mil doscientos ochenta y uno (1281) otorgada el dos (02) de junio del año dos mil veintitrés (2023) en la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., en cuanto respecta al poder conferido por la entidad que representa.

NOTA TRES (3). - Teniendo en cuenta que la Escritura antes mencionada se encuentra en las dependencias de la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., el (la) Notario (a) impondrá la respectiva nota en el protocolo correspondiente del contenido del presente instrumento público.

ACEPTACIÓN: Presente (a) EL (LA) (LOS) COMPARECIENTE (S), de las condiciones civiles anteriormente anotadas, manifestó (aron): -----
Que acepta (n) la presente Escritura de Revocatoria de Poder por estar en todo de acuerdo con todo lo deseado por la entidad que representa.

SEGUNDO ACTO

PODER ESPECIAL

COMPARECIÓ CON MINUTA ESCRITA

SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.893.544 expedida en San Gil - Santander, quien en su calidad de Vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de SOCIEDAD

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777016

09-10-23 11361PAAZD:SNTP

Cadena SA

11371YACGAE4

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., identificada con NIT 800.144.331-3, sociedad de servicios financieros legalmente constituida por Escritura Pública número cinco mil trescientos siete (5307) de fecha veintidós (22) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Veintitrés (23) del Círculo Notarial de Bogotá, con autorización de funcionamiento conferida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución S.F.C. 3970 del treinta (30) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) y domicilio principal en Bogotá D.C, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se anexa para su protocolización, y;--

-----**MANIFESTÓ**-----

PRIMERO: Por medio de este instrumento, **CONFIERO PODER ESPECIAL**, a los siguientes Subgerentes de servicio de las sedes Regionales de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, así como a los Abogados de planta y Externos de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, para representarla ante las Autoridades Judiciales y Administrativas, con la facultad general para actuar bajo los parámetros del artículo 74 y 77 del Código General del Proceso, en las audiencias de conciliación y de trámite de que tratan los artículos 77 y 80 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en las audiencias de conciliación de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso y demás normas concordantes conforme a la normatividad vigente, las audiencias de conciliación extrajudiciales, así como para absolver interrogatorio de parte, asistir a funcionarios, notificarse de resoluciones, actos administrativos, demandas judiciales y providencias judiciales, exhibir documentos, confesar y conciliar en los procesos que se adelanten en contra de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, por sus funcionarios, ex funcionarios, afiliados a los Fondos de Pensiones Voluntarias, Obligatorias y Cesantías, así como por las personas que ostenten la calidad de beneficiarios de éstos, empleadores, o en todos aquellos en los que la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS**



Ca4524503

República de Colombia
cadena 3064



Aa08977701719

PORVENIR S.A sea parte.

TERCERO: Otorgar poder amplio y suficiente a:

NOMBRE	CEDULA ó NIT
ADOLFO TOUS SALGADO	8285008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	39777477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	53077586
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	79985203
ANA MARIA ROMERO LAGOS	1019119578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	42162378
ANA XIMENA TAMAYO	36286470
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	52253673
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	1069582580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	1053844786
ANDRES GONZALES HENAO	10004318
ANDRES LALINDE CERON	1037641903
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591
ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
BRENDA ZULGEY MERCADO FERREIRA	1098663314
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CAMILO ANDRES POVEDA VILLANOVA	1102549082
CARLA SANTAFE FIGUEREDO	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS ANDRES VIUCHE FONSECA	1144027236
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777017



11362PYPAAZDdLA

09-10-23

Cadena S.A. No. 896935340

02-11-23

Cadena S.A. No. 896935340

11372DEYACgaA

CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CARMEN YOJANA RAMIREZ VILLEGAS	43209298
CAROLD JULIANA MONRROY MORENO	52456659
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANA VALENTINA CORTES CIFUENTES	1069266048
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DANYELA KATHERINE MONTES BENITEZ	1001914904
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICO URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635



Ca 4524503

República de Colombia
cadena ^{no} 3064



Aa08977701821

HECTOR JOSE BONILLA LIZCANO	7715904
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRÓ ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JESUS HUMBERTO GAITAN LEAL	19441758
JHON ALEXANDER PABON MORALES	80744875
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JORGE LUIS FONTALVO CORREA	1045734875
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
KIMBERLY ZARITH VILLANUEVA LÓPEZ	1045715327
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LEIDY VICTORIA JARA MUÑOZ	53037192
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LIZETH ANGELICA RODRIGUEZ MARTINEZ	1022409921
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777018

11363AVPAAZDZ

09-10-23

Cadena 17

Cadena S.A. NE. B00000046 02-11-23

11373G4DDYACC

LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MALORY SALTAREN RAMIREZ	1083024582
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA ALEJANDRA QUINTERO MUÑOZ	1152217116
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA ANDREA FLOREZ DAVID	1069501523
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ANGEL MARQUEZ SERRANO	13839869
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922
MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
MONICA ESPERANZA TASCO MUÑOZ	1018451024
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABBALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
OLGA MILENA MUNZA MOLANO	1016040173

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Ca4524503

República de Colombia
cadena 3064



Aa08977701923

ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDER S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SANTIAGO CADENA MANTILLA	1018508615
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 900411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434
WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477

Los nombrados podrán ejecutar los siguientes actos:-----

1. Representar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777019



09-10-23 11364DADPPYAAZZ

Cadena S.A. 09-11-23

Cadena S.A.

NIT: 800000000

11374EAG4DYVA

Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito de Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la Administración.-----

2. Notificarse de todo tipo de providencia Judicial o Administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de parte, contestar demandas, renunciar a términos en los que haga parte la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**-----

3. Asistir en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** a las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que haga parte la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** en todo el país, con la facultad para conciliar o no de conformidad con los intereses de la Sociedad que Representa. Esta facultad también se extiende a actuaciones administrativas en el Ministerio del Trabajo y demás entidades de carácter administrativo, Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio y Ministerio Público. -----

4. Actuar como Representante Legal de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** en las audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y saneamiento de Litigio (Ley 712 de 2001, modificada por la Ley 1149 de 2007) para conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas la actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del Mandato conferido y en fin todas las facultades de Ley. -----

5. En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o emanadas de los Funcionarios administrativos del poder Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades Descentralizadas del Mismo Orden. -----



República de Colombia
cadena # 3064



Aa08977702025



Ca4524503

6. Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, contestar demandas, desistir, conciliar, confesar, sustituir y transigir. -----

PARÁGRAFO: Finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos 2156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2189 del Código Civil que dice: "DE LA TERMINACIÓN DEL MANDATO": El mandato termina: -----

1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido: -----
2. Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato. -----
3. Por la revocación del mandante. -----
4. Por la renuncia del mandatario. -----

----- **HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA** -----

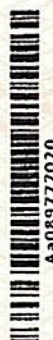
ACEPTACIÓN: Presente SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, quien en su calidad de vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3, de las condiciones civiles y personales ya indicadas manifestó: -----

*Que suscribe el presente documento público y que lo acepta en todas sus partes por hallarse ajustado en todo a la realidad. -----

EL (LA) (LOS) COMPARECIENTE (S) HACE (N) CONSTAR QUE: -----

1. Ha (n) verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, número correcto de sus documentos de identificación, y aprueba (n) este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. -----
2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y el (la) (los) otorgante (s) la aprueba (n) totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asume (n) la responsabilidad por cualquier inexactitud. -----
3. El Notario no puede dar fe sobre la voluntad real del (la) (los) compareciente (s) y beneficiario (s), salvo lo expresado en este instrumento, que fue aprobado sin

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777020

113652aDA9PYPAA

09-10-23

Cadena S.A. No. 89953140

Cadena S.A. No. 89953140 02-11-23

reserva alguna por el (la) (los) compareciente (s) y beneficiario (s) en la forma como quedó redactado. -----

4. Conoce (n) la Ley y sabe (n) que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones del (la) (los) otorgante (s), ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento.-----

5. Será (n) responsable (s) civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. -----

6. Sólo solicitará (n) correcciones, aclaraciones, o modificaciones al texto de la presente escritura en la forma y en los casos previstos por la Ley. -----

Política de Privacidad: El (la) (los) otorgante (s) expresamente declara (n) que NO autoriza (n) la divulgación, ni comercialización, ni publicación por ningún medio, sin excepción alguna, de su imagen personal y/o fotografía tomada en la Notaría Dieciocho (18) del círculo Bogotá, ni su huella digital, ni de sus documentos de identidad, salvo con lo relacionado con el presente instrumento y demás actos notariales que personalmente o por medio de apoderado solicite (n) por escrito, conforme a la Ley.-----

-----ADVERTENCIAS NOTARIALES:-----

1. Cada vez que se pretenda hacer uso del presente poder y/o autorización, se deberá presentar a la autoridad o entidad ante quien se quiera hacer valer, una certificación original, expedida al día por la Notaría Dieciocho del Círculo de Bogotá, donde conste que el poder y/o autorización está vigente, pues no aparece anotación alguna que indique que fue revocado. -----

2. El suscrito Notario Dieciocho (18) encargado, del Círculo de Bogotá, advirtió al (los) compareciente (s), sobre la importancia y conveniencia que su (s) apoderado (s) comparezca (n) y firme (n) la presente escritura pública, para que quede enterado de la existencia del poder, y así el poderdante siempre este legal y debidamente representado. Hecha la advertencia y recomendación el (los) compareciente (s), **INSISTE (N)** en otorgar la presente escritura Pública. -----

3. EL NOTARIO ADVIRTIÓ AL (LOS) OTORGANTE (S), DE LA OBLIGACIÓN QUE



Ca 4524503

La veracidad de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de rrv

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

N° 3064

Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN****EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA**RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.****NIT: 800144331-3****NATURALEZA JURÍDICA:** Sociedad Anónima De Nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Escritura Pública No 5307 del 22 de octubre de 1991 de la Notaría 23 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).

Resolución S.F.C. No 0628 del 03 de abril de 2013 la Superintendencia Financiera de Colombia, no objeta la adquisición de BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Resolución S.F.C. No 2134 del 22 de noviembre de 2013 La Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la fusión por absorción de HORIZONTE Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía PORVENIR S.A., protocolizada mediante Escritura Pública 2250 del 26 de diciembre de 2013 Notaría 65 de Bogotá, produciéndose en consecuencia la disolución sin liquidación de la entidad absorbida.

Resolución S.F.C. No 0750 del 22 de junio de 2022 autoriza al Banco de Occidente (Panamá) S.A., sociedad con domicilio en la República de Panamá, para realizar actos de promoción y publicidad de los productos y servicios relacionados en el considerando quinto de esta Resolución, y al Occidental Bank (Barbados) Ltd., sociedad con domicilio en Barbados, para realizar actos de promoción y publicidad de los productos y servicios relacionados en el considerando sexto de esta Resolución, a través de la AFP Porvenir S.A.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991

Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991 Autorizó a la citada sociedad para desarrollar las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de Pensiones y de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTIAS.

Oficio 92042984-9 del 01 de julio de 1993 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones voluntarias

Resolución S.B. 535 del 30 de marzo de 1994 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones del Régimen de ahorro Individual con Solidaridad en lo términos en que dicha autorización fue solicitada y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración y representación de la sociedad estará a cargo del Presidente

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 4

**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Cadena S.A. No. 89303340 02-11-23

11372DCYECGaA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

y de los Vicepresidentes, que para el efecto designe la Junta Directiva. Los representantes legales serán nombrados por la Junta Directiva de manera indefinida, pudiendo ser removidos en cualquier tiempo. Los representantes podrán ser socios o extraños. **FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL** Son funciones de los Representantes Legales las que, dentro de los límites que le imponen el objeto social y los estatutos de PORVENIR, las que les corresponden de acuerdo con la naturaleza de su cargo y en particular las siguientes: a) Usar la denominación social y ejercer la representación legal y además representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, ante cualquier autoridad o persona natural o jurídica, con facultades para novar, transigir, comprometer y desistirse y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad de bienes o derechos sociales; b) Ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos relativos al objeto social, en que tenga interés la compañía; c) Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias, y presentar en las primeras un informe sobre el estado de los negocios sociales; d) Designar los empleados cuyo nombramiento no esté asignado a otro órgano social, removerlos y firmar los respectivos contratos de trabajo; e) Abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad para mantener en ella los dineros sociales, girar contra ellas y negociar toda clase de títulos valores; f) Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en juicio o fuera de él y delegarles las funciones o atribuciones que considere necesarias, en cuanto sean delegables; g) Suscribir las escrituras de reformas estatutarias; h) Suscribir los contratos que sean necesarios para la administración de los patrimonios autónomos que constituyan las entidades territoriales y sus descentralizadas, con independencia de su cuantía; i) Resolver, en primera instancia, sobre la procedencia de auditorías especiales solicitadas por los accionistas, en los términos definidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad; j) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas de Buen Gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes en ella invierten o en cualquier otro valor que llegare a emitir y la adecuada administración de sus asuntos y k) Ejercer todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva o la Ley y que no se encuentren aquí relacionadas. (Escritura Pública 1674 del 30 de septiembre de 2009 Notaria 65 de Bogotá D.C.). Para efectos de la Representación Legal de la Sociedad, tendrán la calidad de Representantes Legales judiciales los abogados que con tal fin designe la Junta Directiva, quienes representarán a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado (Escritura Pública 1708 del 11 de octubre de 2010 Notaria 65 de Bogotá).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Miguel Largacha Martínez Fecha de inicio del cargo: 06/10/2008	CC - 79156394	Presidente
Erik Andrés Moncada Rasmussen Fecha de inicio del cargo: 15/11/2018	CC - 79781438	Vicepresidente
Roberto Díez Trujillo Fecha de inicio del cargo: 06/02/2014	CC - 79292143	Vicepresidente
Alejandro Gómez Villegas Fecha de inicio del cargo: 27/10/2011	CC - 79941020	Vicepresidente
Alonso Angel Lozano Fecha de inicio del cargo: 28/10/2010	CC - 16799132	Vicepresidente
Juan Pablo Salazar Aristizabal Fecha de inicio del cargo: 07/10/2004	CC - 71731636	Vicepresidente
Andrés Vasquez Restrepo Fecha de inicio del cargo: 08/01/2004	CC - 71695255	Vicepresidente
Silvia Lucía Reyes Acevedo Fecha de inicio del cargo: 21/05/2020	CC - 37893544	Vicepresidente
Johana Andrea Lesmes Mendieta Fecha de inicio del cargo: 09/08/2019	CC - 1015401438	Representante Legal Judicial





Ca 4524503

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

Nº 3064

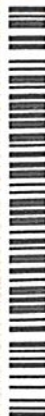
Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Daniela Guerrero Ordoñez	CC - 1018458983	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 09/08/2019		
Miguel José Gregory Villegas Castañeda	CC - 1110464235	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021		
Carla Santafé Figueredo	CC - 1130608527	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021		
Ivonne Astrid Ortiz Giraldo	CC - 32243789	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021		
Erika Isabel Arrieta Ruiz	CC - 32779976	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021		
Fredy Quintero López	CC - 79581111	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021		
Ana María Romero Lagos	CC - 1019119578	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 23/09/2021		
Diana Marcela Bautista Ruiz	CC - 1032360609	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022		
Andrés Felipe Fernández Cardona	CC - 1069582580	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022		
Luisa Fernanda Currea Franco	CC - 1072709498	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022		
Laura Ximena Florez González	CC - 1098797771	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 09/06/2023		
Sebastián Fernández Bonilla	CC - 80975529	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 09/06/2023		
Leidy Victoria Jara Muñoz	CC - 53037192	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 12/07/2023		
Alejandro Omaña Paipilla	CC - 1090473030	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 11/09/2023		
Alba Janneth Moreno Baquero	CC - 53077586	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017		
Jorge Eduardo Montañez Cortés	CC - 79443280	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 19/02/2016		
Carlos Andrés Sánchez Medina	CC - 94501244	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 07/01/2016		
Genny Carolina Ramírez Zamora	CC - 52829319	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 17/03/2015		
Diana Martínez Cubides	CC - 52264480	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014		
Elizabeth Mira Hernández	CC - 43868037	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014		
Ivonne Amira Torrente Schultz	CC - 32737160	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011		
Nancy Adriana Rodríguez Casas	CC - 51970146	Representante Legal Judicial
Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011		

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 3 de 4

MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

Cadenas S.A. No. 890335340 02-11-23

11373G4DG YECG

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

Natalia Guerrero Ramírez

**NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





Ca45245037

República de Colombia
cadena **Nº 3064**



Aa08977702127

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: **Nº 3064**

DE FECHA: DICIEMBRE QUINCE (15) DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

OTORGADA EN LA NOTARÍA DIECIOCHO (18) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Viene de la página veintiséis (26)

TIENE (N) DE LEER DILIGENTE Y CUIDADOSAMENTE LA TOTALIDAD DEL TEXTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, PARA VERIFICAR LA EXACTITUD DE TODOS LOS DATOS EN ELLA CONSIGNADOS, CON EL FIN DE ACLARAR, MODIFICAR O CORREGIR LO QUE CONSIDERE (N) PERTINENTE ANTES DE FIRMARLA; PONIENDO DE PRESENTE QUE LA FIRMA ESCRITURA DEMUESTRA SU APROBACIÓN TOTAL DEL TEXTO. EN CONSECUENCIA, LA NOTARÍA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES ESTABLECIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DEL (LOS) OTORGANTE (S) Y LA AUTORIZACIÓN DEL NOTARIO. DE SER NECESARIO CORREGIR, ACLARAR Ó MODIFICAR LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, SE DEBERÁ OTORGAR NUEVA, LA CUAL TENDRÁ QUE SER SUSCRITA POR TODOS LOS QUE UNA INTERVINIERON EN LA INICIAL, SIENDO DE CARGO DE LOS OTORGANTES LOS COSTOS Y GASTOS QUE ESTO DEMANDE.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por el (la) (los) compareciente (s) y advertido (a) (s) de su formalidad, lo aprobó (aron) en todas sus partes y firmó (aron) junto con el suscrito notario quien da fe y lo autoriza.-

La presente Escritura se elaboró en las hojas de papel notarial números:-

Aa089777008 - Aa089777009 - Aa089777010 - Aa089777011 - Aa089777012-

Aa089777013 - Aa089777014 - Aa089777015 - Aa089777016 - Aa089777017-

Aa089777018 - Aa089777019 - Aa089777020 - Aa089777021-

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777021

Ca45245037



11361PAZSDJAYP

09-10-23

cadena s.a. No. 89-995340

02-11-23

cadena s.a. No. 89-995340

cadena s.a.

11371VECGaAE4G

Nº 3064

28

Valor de los derechos Notariales \$ 149.800.00 ***
Superintendencia de Notariado y Registro \$ 7.950.00 ***
Fondo Cuenta Nacional del Notariado \$ 7.950.00 ***
Retención en la fuente \$ - 0 -
Iva \$ 56.943.00 ***
SE FIRMA

PODERDANTE



SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO

ÍNDICE DERECHO

Quien en su calidad de vicepresidente y por ende Representante Legal obra en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3. C.C. No.37.893.544 expedida en San Gil - Santander

Dirección

Tel.

e-mail:

Firma tomada fuera del Despacho Artículo 12 Decreto 2148 de 1983, hoy Artículo 2.2.6.1.2.1.5 Decreto 1069 de 2015.



JOSE MIGUEL ROBAYO PIÑEROS

NOTARIO 18 DE BOGOTÁ D.C.

NOTARÍA DIECIOCHO DE BOGOTÁ, D.C.

Es Primera copia tomada de original.

Escritura pública No. 3064 de DIC 15 de 2023

Que expone y autoriza en DIECISEIS (16) hojas útiles

Con destino a

Elaboró/Fabiola Medina

Revisó/Dr. Alejandro Robayo

13362

12.12.2023

21 DEC 2023

SNR

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Sigla: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.
Nit: 830.515.294-0 Administración : Dirección
Seccional De Impuestos De Bogotá, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01447565
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: pagos@godoycordoba.com
Teléfono comercial 1: 3174628
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 84A #10-33 Piso 5
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@godoycordoba.com
Teléfono para notificación 1: 3174628
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2022, con el No. 02862790 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S." a GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. y adicionó la(s) sigla(s) GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S..

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita. De manera particular, pero sin limitarse a ello, la Sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. Así mismo, la Sociedad puede dedicarse a la prestación de servicios integrales en prevención de riesgos laborales, promoción y prevención de la salud, asesorías y capacitaciones en las siguientes áreas con profesionales competentes y licencia en salud y seguridad en el trabajo vigente: legal, medicina preventiva y del trabajo, medicina del deporte, nutrición deportiva y ocupacional, fisioterapia, psicología, auditoria, ingeniería, entre otras. Así mismo, podrá prestar servicios integrales para todas las actividades de asesoría en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión en Seguridad y salud en el trabajo. También podrá llevar a cabo las demás actividades y servicios que de acuerdo con la legislación vigente en riesgos laborales, se deban diseñar e

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

implementar a nivel empresarial en organizaciones de cualquier sector empresarial ya sea del sector público o privado, entre otras. La Sociedad también podrá poseer y administrar establecimientos de comercio, así como celebrar cualquier tipo de operaciones sobre los mismos, y en general, estará facultada para realizar actividades de importación y exportación de bienes y servicios.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$10.000.000.000,00
No. de acciones : 10.000.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$240.201.000,00
No. de acciones : 240.201,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$240.201.000,00
No. de acciones : 240.201,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la Junta Directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General De accionistas y de la Junta Directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; E) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la Asamblea General de Accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas- exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019, registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Barros Cardenas Jhon Alex	C.C. 1.043.015.010	287.301

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 5 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Rey Londoño Oscar Alberto	C.C. 1.140.866.487	300.858

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 22 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo C.C.	1.151.946.356	253.718
John Jairo Rodriguez Bernal	C.C. 1.070.967.487	325.589
Omar Alonso Camargo Mercado	C.C. 1.043.010.907	285.256
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	C.C. 1.013.641.075	278.768

Por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Chavez Alvarado Andres Felipe	C.C. 1.075.655.441	232007

Por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	C.C. 80.873.156	175488
Benrey Zorro Juliana	C.C. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	C.C. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	C.C. 1.121.914.728	288455

Por Documento Privado Sin núm del Representante Legal, del 29 de julio de 2020, registrado el 30 de julio de 2020 bajo el número 02602260 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Viviel Gonzalez Jorge Enrique	C.C. 1.014.225.303	277.946

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 13 de agosto de 2020, registrado el 13 de agosto de 2020 bajo el número 02606331 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P:
Romero Méndez Andrés Felipe	C.C.1.019.080.336	286.638
Duque Duque Juan Antonio	C.C.80.085.295	138.464

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 03 de septiembre de 2020, registrado el 4 de septiembre de 2020 bajo el número 02612596 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P.
Puentes Cespedes Ana Carolina	C.C. 1.010.229.148	330105

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 11 de febrero de 2021, registrado 4 de Marzo de 2021 bajo el número 02669512 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Carlos Augusto Suarez Pinzón	C.C. 1.032.470.700	347.852
Miguel Alejandro Lombana Cuevas	C.C. 1.022.398.901	308.077
Deivid Alexander Rodríguez Ramirez	C.C. 1.233.690.042	LT25399
Natalia Alzate Garcia	C.C. 1.095.786.682	173.261
Sara Heshusius Sancho	C.C. 1.144.068.042	346.483
Youssef Norredine Amara Pachon	C.C. 1.019.069.334	311.472

Por Documento Privado Sin Núm. del 12 de mayo de 2021 del Representante Legal, registrado 27 de Mayo de 2021, bajo el número 02709540 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Nicolás Eduardo Ramos Ramos	C.C. 1.018.469.231	365094
Daniel Andres Paz Erazo	C.C. 1.085.291.127	329936
Laura María Valderrama Medrano	C.C. 1.010.220.471	307507

Por Documento Privado sin num. del 18 de agosto de 2021, inscrito el 23 de Agosto de 2021 con el No. 02736169 del libro IX, de conformidad

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Miguel Angel Salazar Cortes	C.C. No. 1.019.128.867	347296
Michelle Valeria Mina Marulanda	C.C. No. 1.234.195.459	359423

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2021, inscrito el 18 de Diciembre de 2021 con el No. 02773873 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Angélica María Cure Muñoz	C.C. No. 1.140.887.921	369821
Paula Huertas Borda	C.C. No. 1.020.833.703	369744
María Alejandra Ramírez Olea	C.C. No. 1.152.225.557	359508

Por Documento Privado del 01 de julio de 2022, inscrito el 8 de Julio de 2022, con el No. 02856173 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andres Felipe Duque Velásquez	C.C No. 1.053.772.677	221517
Daniel Felipe Ramirez Sanchez	C.C No. 1.070.018.966	373906
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C No. 1.233.690.042	378503
Manuel Rodrigo Jaimes Beltran	C.C No. 1.071.169.446	417.436

Por Documento Privado del 22 de julio de 2022, inscrito el 27 de Julio de 2022 con el No. 02862244 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre:	Identificación:	TP:
Diana Camila Gaitan Hemelberg	C.C No. 1.019.123.311	334532
David Ricardo Rodriguez Preciado	C.C.No. 1.057.581.246	251947

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2022 , inscrito el 26 de Agosto de 2022 con el No. 02872678 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Octavio Andrés Castillo Ocampo	C.C No. 1.017.267.151	380131
Stephany Obando Perea	C.C No. 1.107.080.046	361681
Diana Esperanza Gomez Fonseca	C.C No. 1.023.967.512	419.705
Lina María Varela Vélez	C.C No. 1.234.091.873	364597

Por Documento Privado del 04 de octubre de 2022, inscrito el 7 de Octubre de 2022 con el 02887434 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andrea Juliana Hernández Rueda	C.C No. 1.098.751.528	295.390
Juliana Araque Quiroz	C.C No. 1.035.868274	293.693

Por Documento Privado del 28 de noviembre de 2022, inscrito el 30 de Noviembre de 2022 con el No. 02904376 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
María Carolina Martinez Portillo	C.C No. 1.020.721.389	207.162
Gina Paola Espinosa Martinez	C.C No. 22.464.396 116.498-D1	
Karen Sofia Sanchez Gonzalez	C.C No. 1.152.454.659	383.959
Paola Andrea Aponte Lopez	C.C No. 1.144.089.950	387.090

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mariana Pérez Cuenca	C.C No. 1.020.824.515	367.191
Maria Clara Jaramillo Berrio	C.C No. 1.152.702.664	388.141
Daniel Francisco Gomez Cortes	C.C No. 1.019.133.337	389.914

Por Documento Privado del 20 de febrero de 2023, inscrito el 22 de Febrero de 2023 con el No. 02936798 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Brandon Camilo Archila Jaimes	C.C No. 1.098.817.164	361.004
Miguel Angel Cadena Miranda	C.C No. 1.020.792.591	380.420

Por Documento Privado del 30 de junio de 2023, inscrito el 5 de julio de 2023 con el No. 02993832 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Camila Soler Sánchez	C.C No. 1.014.290.875	352.159
Luis Eduardo Calderón Pastrana	C.C No. 1.004.155.816	406.112
Yudi Marcela Barajas Soto	C.C No. 1.098.762.996	303.201

Por Documento Privado del 22 de agosto de 2023, inscrito el 24 de Agosto de 2023 con el No. 03010137 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Sharik Alejandra Mateus Diaz	C.C No. 1.010.240.279	403.554
Lorena Paola Castillo Soriano	C.C No. 1.032.505.290	404.442
Vanessa Gómez Quintero	C.C No. 1.032.509.355	409.053
Laura Camila Guanumen Piñeros	C.C No. 1.032.474.517	355.025
Sebastián Huertas Trujillo	C.C No. 1.020.844.303	399.622

Por Documento Privado del 15 de noviembre de 2023, inscrito el 15 de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Noviembre de 2023 con el No. 03035663 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Cristian Alexander Monroy Ortiz	C.C No. 1.233.695.695	374.931
Tania Esmeralda López Rubio	C.C No. 1.049.652.417	360.979
María Camila Guio Martínez	C.C No. 1.032.505.503	414.733
Daniela Hoyos Álvarez	C.C No. 1.010.147.363	407.057

Por Documento Privado del 25 de enero de 2024, inscrito el 25 de Enero de 2024 con el No. 03058353 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Gabriela Pacheco Mendoza	C.C. No. 1.020.826.114	363.705
Fausto Alejandro Villalba Salinas	C.C. No. 1.000.588.698	419.732

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

Por Acta No. 87 del 6 de octubre de 2023, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre de 2023 con el No. 03025495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Representante Alejandro Gonzalez C.C. No. 1020789792
Legal Suplente Cuberos
(Gerente
Suplente)

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 81717493
Segundo Renglon	Ana Cristina Medina Gonzalez	C.C. No. 52991736
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521
Cuarto Renglon	Daniel Francisco Buritica Cordoba	C.C. No. 80873703
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

Por Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2020 con el No. 02582656 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 81717493
Cuarto Renglon	Daniel Francisco Buritica Cordoba	C.C. No. 80873703

SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 51 del 23 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre de 2021 con el No. 02740441 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

Por Acta No. 65 del 15 de mayo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2023 con el No. 02981566 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Segundo Renglon Ana Cristina Medina C.C. No. 52991736
Gonzalez

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 59 del 9 de noviembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901235 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	BAKER TILLY COLOMBIA LTDA	N.I.T. No. 800249449 5

Por Documento Privado del 11 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901236 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nydia Jasmin Mora Torres	C.C. No. 1022334637 T.P. No. 165330-T
Revisor Fiscal Suplente	Erika Tatiana Castaño Cruz	C.C. No. 1026276146 T.P. No. 272902-T

PODERES

Por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:
Ana Cristina Medina González

IDENTIFICACIÓN:
C.C. 52.991.736

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Carlos Hernán Godoy Fajardo	C.C. 19.251.626
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Francisco Erney Buritica Ruiz	C.C. 10.529.620
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Andrés Fernando Da Costa Herrera	C.C. 80.505.099
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Gustavo Gnecco Mendoza	C.C. 19.431.641
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Santiago Andrés Martínez Méndez	C.C. 81.717.493
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
María Isabel Vinasco Lozano	C.C. 53.006.455
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jhon Sebastián Molina Gómez	C.C. 1.018.466.887
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Sergio Andrés Campos Guzmán	C.C. 1.015.433.588
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
José David Ochoa Sanabria	C.C. 1.010.214.095
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jennifer Lorena Molina Mesa	C.C. 1.129.511.816
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Daniel Mauricio Contreras Jaimes	C.C. 1.090.424.399
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Fabio Andrés Salazar Reslen	C.C. 1.032.358.377
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ricardo José Aguirre Bejarano	C.C. 1.018.442.942
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ernesto Rosales Jaramillo	C.C. 1.090.420.262

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:

Juan Sebastián Velandia Párraga

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.018.456.181

Por Documento Privado del 25 de agosto de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 14 de Septiembre de 2022, con el No. 00048142 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial a Diana Carolina Soler, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.727.319, para que represente al Poderdante y actúe en su nombre en los diferentes temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, afiliación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad. Específicamente, la Apoderada podrá desempeñar las siguientes funciones y todas aquellas directamente relacionadas con ellas o necesarias para poderlas ejercer, sin que se extiendan a temas o materias sustancialmente distintas: (i) Preparar, firmar y presentar cualquier documento en los temas relacionados con la administración, contratación y relevo de personal de la Sociedad, incluyendo contratos de trabajo, de prestación de servicios, diligenciamiento de formularios y documentos de vinculación ante cualquier tipo de autoridad pública o privada relacionada con el sector de salud, de trabajo o de seguridad social; (ii) Representar a la Sociedad administrativa, judicial y extrajudicialmente ante los empleados, funcionarios, terceros y toda clase de autoridades públicas, judiciales y administrativas en los temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad; (iii) Notificarse personalmente de cualquier decisión proferida por las autoridades administrativas y judiciales en las cuales resulten involucrados de cualquier forma los intereses de la Sociedad en los temas referidos, presentar recursos, solicitar pruebas, responder y/o elevar peticiones frente a ellas.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

E. P. No. 0002230 del 26 de junio
de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá
D.C.

INSCRIPCIÓN

01147130 del 26 de julio de
2007 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios	01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX
Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX
Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02582655 del 2 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 51 del 31 de enero de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02790542 del 9 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02862790 del 28 de julio de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 60.705.863.638

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de enero de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.290.875**

SOLER SANCHEZ

APELLIDOS

CAMILA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

09-AGO-1997

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

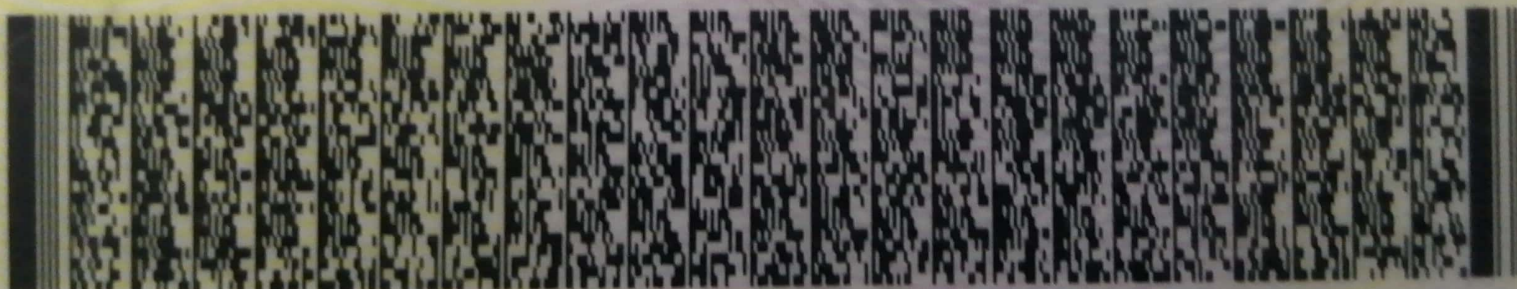
SEXO

10-AGO-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00743785-F-1014290875-20150904

0046249191A 1

44357585

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Consejo Superior
de la Judicatura

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



VER31043

NOMBRES:
CAMILA

APELLIDOS:
SOLER SANCHEZ

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA

UNIVERSIDAD
LA GRAN COLOMBIA/BTA

FECHA DE GRADO
18/09/2020

CONSEJO SECCIONAL
BOGOTÁ

CEDULA
1014290875

FECHA DE EXPEDICIÓN
07/12/2020

TARJETA N°
352159